

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y
CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

EL DEBIDO PROCESO EN EL JUZGAMIENTO DE
LOS ADOLESCENTES EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE
TINGO MARÍA, 2014 - 2015.

TESISTA

MONTES SERRANO, GENARO JULIO

ASESOR

MG. AVILES QUISPE, ABDEL

HUÁNUCO – PERÚ
2018



RESOLUCIÓN N° 147-2018-D-CFD-UDH
Huánuco, 02 de abril de 2018

Visto, la solicitud con ID170627-0000001040 de fecha 02 de abril 2018 presentado por el Bachiller **MONTES SERRANO Genaro Julio**, quien pide se Ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"EL DEBIDO PROCESO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE TINGO MARÍA 2014-2015"** para optar el Título profesional de Abogado y ;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 084-2018-D-CFD-UDH de fecha 26 de febrero del 2018 se aprueba el Informe final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"EL DEBIDO PROCESO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE TINGO MARÍA 2014-2015"** formulado por el Bachiller **MONTES SERRANO Genaro Julio** del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, quien posteriormente fue declarado **APTO** para sustentar dicha investigación;

Que, estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y a lo Establecido en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; y la facultad contemplada en la Resolución N° 644-2016-R-UDH de fecha 25 de agosto del 2016;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR Y DESIGNAR a los miembros del Jurado de Tesis para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, **MONTES SERRANO Genaro Julio** para optar el Título profesional de Abogado por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis), a los siguientes docentes:

Dr. Uladislao Zevallos Acosta	: Presidente
Mg. Jhon Meza Blácido	: Vocal
Abog. Hernán Gorín Cajusol Chepe	: Secretario

Artículo Segundo.- SEÑALAR el día viernes 06 de abril del año 2018 a horas 08:00 a.m dicha sustentación pública en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza.

Regístrese, comuníquese y archívese

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Uladislao Zevallos Acosta Dr. D.
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Mg. Eli Carbajal Alvarado
SECRETARIO DOCENTE
CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO Y CC.PP

DISTRIBUCIÓN: Rectorado, Vicerrectorado, Fac. Derecho, Of. Mat. Y Reg. Acad. Exp. Graduando, Interesado, Jurados (3)
Asesor. Archivo

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 8:20 a.m. horas del día 06 del mes de Abril del año 2018, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad Universitaria La Esperanza, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunió el Jurado Ratificado integrado por los docentes:

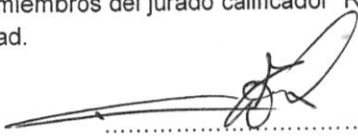
Dr. Uladislao Zevallos Acosta	: (Presidente)
Mg. Jhon Meza Blácido	: (Vocal)
Abog. Hernán Gorín Cajusol Chepe	: (Secretario)

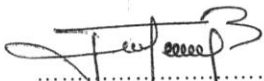
Nombrados mediante la Resolución N° 147-2018-D-CFD-UDH. de fecha 02 de abril de 2018, para evaluar la Tesis intitulada **"EL DEBIDO PROCESO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE TINGO MARÍA 2014-2015"** presentado por el Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, MONTES SERRANO Genaro Julio para optar el Título profesional de Abogado.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) Aprobado por Unanimidad con el calificativo cuantitativo de Quince y cualitativo de Bueno.

Siendo las 9:20 horas del día 06 del mes de abril del año 2018, los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.


Dr. Uladislao Zevallos Acosta
PRESIDENTE


Mg. Jhon Meza Blácido
VOCAL


Abog. Hernán Gorín Cajusol Chepe
SECRETARIO

DEDICATORIA

A las personas que me acompañaron en la ardua labor cotidiana realizada con el fin de concluir el presente trabajo.

AGRADECIMIENTOS

A las palabras que se hicieron presente, en los momentos precisos, en las oportunidades que se gestaron en el diálogo, en las personas y en la esperanza de seguir aprendiendo y comprender el mundo. A ti, Jasper, que estas en este proceso de descubrir el mundo, te dedico esta breve comprensión del mundo.

Genaro Julio MONTES SERRANO.

INDICE

PÁG.

PAGINA DEL JURADO

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

INDICE

LISTA DE TABLAS

LISTA DE GRÁFICOS

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

1.1.Descripción del Problema	1
1.2.Formulación del Problema	4
1.2.1. Problema general	4
1.2.2. Problemas específicos	4
1.3.Objetivos de la investigación	4
1.3.1. General	4
1.3.2. Específicos	5
1.4.Justificación de la investigación	5
1.5.Limitaciones de la investigación	6
1.6.Viabilidad de la investigación	7

CAPITULO II

MARCO TOERICO

2.1. Antecedentes de la investigación	8
2.2. Bases teóricas	14
2.2.1. El debido proceso	14
2.2.1.1. Antecedentes del debido proceso	16
2.2.1.2. Definición del debido proceso	20
2.2.1.3. El contenido del debido proceso	29
2.2.1.4. El debido proceso en la justicia penal juvenil	30
2.2.1.5. El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en la justicia penal juvenil	33
2.2.1.6. Principios Fundamentales de la Doctrina de la Protección integral	35
2.2.1.7. Principios rectores de la Convención que inciden en la configuración y observancia del debido proceso	36
2.2.1.8. La aplicación del principio – derecho del debido proceso en los procedimientos administrativos.	51
2.2.2. Juzgamiento de los adolescentes infractores	53
2.2.2.1. Naturaleza jurídica de la responsabilidad Penal del adolescente	55
2.2.2.2. Culpabilidad, inimputabilidad y responsabilidad Penal	58
2.2.2.3. Adolescentes penalmente imputables y penalmente responsables	62

2.2.2.4. El adolescente eximente de responsabilidad	64
2.2.2.5. Teoría de la Responsabilidad o del Sujeto Responsable	68
2.2.2.6. Las garantías sustantivas, procesales y de ejecución del sistema de justicia penal juvenil	69
2.2.2.7. ¿Por qué se establecen a los adolescentes medidas socioeducativas y no penas?	93
2.2.2.8. Los cambios más importantes el nuevo Código De Responsabilidad Penal de Adolescentes	
2.3. Definiciones conceptuales	96
2.4. Hipótesis	100
2.4.1. General	101
2.4.2. Específicos	101
2.5. Variables	101
2.5.1. Variable independiente	101
2.5.2. Variable dependiente	102
2.6. Operacionalización de las variables Dimensiones e indicadores	102

CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de Investigación	103
3.1.1. Enfoque	103

3.1.2. Alcance o nivel	104
3.1.3. Diseño	104
3.2. Población y muestra	105
3.2.1. Población	105
3.2.2. Muestra	105
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	106
3.3.1. Para la recolección de datos	106
3.3.2. Para la presentación de datos	107
3.3.3. Para el análisis e interpretación de datos	108

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1. Procesamiento de datos (cuadros estadísticos con su respectivo Análisis e interpretación)	110
---	-----

CAPITULO V

DISCUSION DE RESULTADOS

5.1. Presentación de los resultados del trabajo de investigación	129
CONCLUSIONES	137
RECOMENDACIONES	140
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	141
ANEXO	146

LISTA DE TABLAS

TABLA N° 01. Casos presentados y atendidos en el Juzgado de Familia de Tingo María 2014 - 2015

TABLA N° 02. Conformidad con las decisiones emitidas por los jueces de familia

TABLA N° 03. Conocimiento de requisitos y trámites para solicitar libertad y semilibertad

TABLA N° 04. Percepción de los derechos al momento de intervenir o antes de ser conducido a una delegación policial

TABLA N° 05. Intimidación de algún modo o circunstancia para declarar de forma diferente a la investigación

TABLA N° 06. Imputado sin prueba alguna el hecho delictuoso

TABLA N° 07. Medida socio educativa impuesta

TABLA N°08. Intervención del Ministerio Público y Juzgado de Familia con criterio de justicia y proporcionalidad

TABLA N° 09. Prueba más concluyente para determinar la reclusión

TABLA N°10. Tiempo determinado por el juez al término de las investigaciones

TABLA N°11. Rol del abogado durante el proceso

LISTA DE GRÁFICOS

- GRÁFICO 01.** Conformidad con las decisiones emitidas por los jueces de familia
- GRÁFICO 02.** Conocimiento de requisitos y trámites para solicitar libertad y semilibertad
- GRÁFICO 03.** Percepción de los derechos al momento de intervenir o antes de ser conducido a una delegación policial
- GRÁFICO 04.** Intimidación de algún modo o circunstancia para declarar de forma diferente a la investigación
- GRÁFICO 05.** Imputado sin prueba alguna el hecho delictuoso
- GRÁFICO 06.** Medida socio educativa impuesta
- GRÁFICO 07.** Intervención del Ministerio Público y Juzgado de Familia con criterio de justicia y proporcionalidad
- GRÁFICO 08.** Prueba más concluyente para determinar la reclusión
- GRÁFICO 09.** Tiempo determinado por el juez al término de las investigaciones
- GRÁFICO 10.** Rol del abogado durante el proceso

RESUMEN

En la nueva Legislación peruana para el tratamiento del menor se ha promulgado el Decreto Legislativo N° 1348 el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, este decreto es bastante claro al referirse al adolescente como sujeto de derechos y obligaciones, responde por la infracción en virtud a una responsabilidad penal especial; es decir no pueden ser eximentes, están comprendidos entre las edades de catorce (14) a dieciocho (18) años. En la sociedad actual no es raro observar en las noticias o en el transcurrir diario la presencia de adolescentes que se dedican a actividades ilícitas convirtiéndose en adolescentes infractores, muchas veces influenciados por personas adultas que tratan de aprovechar de su calidad de fragilidad para obligarles a cometer actos delincuenciales de diversa índole; así como también, adolescentes que se han visto orillados a tomar el camino de la delincuencia por motivos familiares o la extrema violencia intrafamiliar, bajo estrato social, inmigración de sus progenitores, presión de ambiente en el que viven como la existencia de pandillas dedicados al sicariato, asesinatos, robos, etc.

Las etapas de juzgamiento de adolescente infractores, en los que es común que se hallen transgredidos los principios constitucionales del proceso como la falta de celeridad para ser juzgados, alargándose por tiempo los procesos, la falta de imparcialidad de los administradores de justicia, así como presentación de informes periciales a destiempo, son características comunes y frecuentes de un proceso penal; sin embargo, los jueces dan validez a pesar de ello; de manera que resulta de gran importancia las normas internas e internacionales en que los principios no sean quebrantados para que no les afecte a los adolescentes infractores que se encuentran en proceso de juzgamiento; en este contexto el Estado democrático de derecho de sujeción del ordenamiento y la sociedad en su totalidad expande su fundamento en la Constitución Política que contempla los derechos fundamentales, a más la implementación de normas específicas: el Decreto Legislativo N° 1348, no discrepa la naturaleza de

responsabilidad penal del adolescente con la del adulto, siendo considerada como específica y exige en su diligencia medidas socioeducativas o de medidas de coerción procesal. Su aplicación del debido proceso y dentro de una observancia, de marchas o de usos y costumbres, resulta pernicioso para el infractor; por lo mismo que, si el adolescente inculcado falta o no quisiera acudir a las citas pese a estar comunicado debidamente, el juez puede imponer medidas de coerción procesal para obligarlo a que vaya a las audiencias. La primera es la detención, que puede ser policial, mediante arresto ciudadano o resolución judicial por flagrancia delictiva. Estos arrestos no pueden durar más de 24 horas. Otra medida inmediata es la suspensión preventiva de derechos como el impedimento de salida del país o de realizar determinadas labores. También será posible ordenar el impedimento de aproximarse a ciertos lugares. La última medida es la internación preventiva, cuando exista peligro de fuga y convicción que cometió una infracción sancionable con internación.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, nuestra sociedad, ha experimentado un proceso acelerado de crecimiento económico a efectos de producir cambios, sociales, culturales, económicos y tecnológicos; es evidente también que los resultados sociales escapan y rebasan el control estatal y social, manifestándose en la violencia juvenil, deserción, insatisfacción de necesidades básicas, mortalidad infantil y desaliento de los jóvenes a un futuro de oportunidades y desarrollo. La violencia juvenil ha sido usada y señalada como un ingrediente que incrementa la sensación de inseguridad ciudadana y el incremento de la criminalidad, son temas que siempre han llamado la atención y generado preocupación de la sociedad. Para enfrentar este fenómeno, se ha adoptado una política criminal centrada en el incremento de sanciones y la disminución de las garantías procesales. Una expresión de estos lineamientos, lo constituyen los decretos legislativos expedidos en el marco de las medidas de emergencia sobre seguridad nacional, que afectaron directamente al sistema de responsabilidad penal juvenil diseñado por el Código de los Niños y Adolescentes y la dación de un nuevo decreto legislativo que encierra el espíritu de un debido proceso en el juzgamiento de adolescentes infractores, materia de análisis de la presente investigación.

El reciente decreto legislativo, en materia jurídica, pone en énfasis el derecho que tienen los adolescentes, sustentada en tratados internacionales y normas internas. En este sentido, este estudio pretende indagar, analizar y describir sobre las condiciones necesarias para lograr la vigencia efectiva de la normativa destinada a garantizar los derechos de los adolescentes imputados en los procesos judiciales actuando con el debido proceso. Se parte del supuesto que pesar de existir una normatividad específica, no basta con establecer el derecho a la defensa de adolescentes, sino que es necesario remover prácticas arraigadas que lo han desconocido y construir nuevos criterios informadores de la cultura jurídica en el juzgamiento de los adolescentes infractores, mediante del debido proceso que es un derecho fundamental que tiene toda persona y que le faculta a

exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo. Es obvio que dichos fines se logran a través de procesos que garanticen la educación, protección y restauración de sus derechos.

Esta investigación tiene su génesis en el planteamiento del problema, señalando las características y realidad de la criminalidad juvenil creciente en nuestro país y el debido proceso en el juzgamiento de adolescentes infractores; además de los objetivos e hipótesis planteados, se apoyó con la revisión de los antecedentes, encontrándose capital preocupación de los países de concebir y esbozar políticas de prevención, lejos de optar por disposiciones represivas, en materia de legislación del menor infractor; así como también en un manejo adecuado de un marco teórico de jurisprudencia en la temática del debido proceso. Finalmente el diseño metodológico define el tipo de investigación desplegada, la presentación de los resultados en materia de juzgamiento de adolescentes en el Juzgado de Familia de Tingo María 2014-2015, la discusión de los mismos, las conclusiones y recomendaciones.

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema

El crecimiento y desarrollo de las sociedades produce una infinidad de problemas, económicos, sociales, culturales, políticos, etc., los más agravantes están en el orden social cuyas manifestaciones conlleva a profundas reflexiones y debates: una de estas expresiones es el problema de criminalidad juvenil, y consecuentemente, controversia y tan cuestionado el debido proceso que desarrollan los administradores de la justicia en el juzgamiento de los adolescentes infractores.

El debido proceso se encuentra plasmado tanto como principio, derecho fundamental y garantía. Los Estados consideran en la legislación y la doctrina internacional ampliamente lo aborda. En el ámbito penal, inmediatamente se relaciona su observancia con un conjunto de derechos fundamentales que se aglutinan bajo la “definición marco” y omnicomprensiva del debido proceso legal dentro de un estado constitucional de derecho (Hernández Alarcón, 2005).

El autor Hernández Alarcón, al mencionar que el debido proceso es entendido como principio, al estar sujeto a una serie de doctrinas, normas o dispositivos; concebido como derecho fundamental, que el debido proceso toma en cuenta el estricto respeto de los derechos y libertades reconocidos por los Estados, sin condicionamiento alguno por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole; finalmente derecho de garantía que asegura y protege que todo proceso se lleve con la respectiva imparcialidad y asidero legal.

Hoy en día, la pluralidad de derechos que lo conforman y las múltiples interpretaciones que se han hecho es un consenso internacional que esta institución es uno de los elementos centrales cuya observancia determina la existencia de un estado de derecho, inclusive para el más avezado delincuente juvenil. En este sentido, todos los Estados incluyendo el nuestro han entendido la importancia de la tutela de derecho al debido

proceso. Existe un esfuerzo de la legislación, en hacer realidad el sistema acusatorio garantista. Sin embargo, todas estas coincidencias y esfuerzos se desvanecen cuando el debido proceso se inserta en la Justicia Penal Juvenil. Es en este ámbito de la Justicia donde las verdades que no necesitarían afirmación aparecen como descubrimientos por la resistencia que existe en la práctica legislativa y judicial de una verdad de Perogrullo: Los adolescentes son sujetos de derechos y responsabilidades.

Dentro de este contexto de litigios, desaciertos del ciudadano; la seguridad ciudadana y el incremento de la criminalidad son temas que siempre han llamado la atención y generado preocupación de la sociedad. Para enfrentar este fenómeno, se ha adoptado una política criminal centrada en el incremento de sanciones y la disminución de las garantías procesales. Una expresión de estos lineamientos, lo constituyen los decretos legislativos expedidos en el marco de las medidas de emergencia sobre seguridad nacional, que afectaron directamente al sistema de responsabilidad penal juvenil diseñado por el Código de los Niños y Adolescentes de 1993, así como a diversos instrumentos internacionales sobre la materia.

Muchos autores suelen destacar la normalidad de la delincuencia juvenil. Con ello se quiere poner de relieve que pocos menores y jóvenes escapan a la realización de algún acto delictivo, aunque sea con carácter leve y episódico. Esto no disminuye la importancia que una delincuencia frecuente y de cierta gravedad puede alcanzar en el desarrollo del joven: es alto el grado de consolidación de carreras criminales por parte de aquellos menores y jóvenes, procedentes de las clases sociales y económicas menos favorecidas, responsables de la mayor parte de los delitos, muy en especial de los más graves y violentos que a la fecha a nivel país hasta forman parte del sicariato como lo es en Lima (Callao – San Juan de Lurigancho), La libertad y otras regiones.

En cualquier caso, el hecho de que los autores de las conductas delictivas sean personas no plenamente adultas lleva casi de forma natural a contemplar esta realidad con un prisma en parte diferente al que es usual en el derecho penal de adultos. En la medida en que el sujeto es un menor se requiere una respuesta diferenciada de la pena: una respuesta que deje

a un lado el castigo justo y proporcional por el mal causado y se centre en los aspectos educativos, buscando con la remoción de los factores individuales y/o sociales que contribuyeron al comportamiento delictivo a través de una intervención centrada en el interés del menor y dirigida a procurar su reeducación y reinserción social.

En la actualidad a pesar de que nuestro país se ha adscrito a un modelo garantista en la Justicia Penal, y dentro de la Justicia Penal Juvenil a la doctrina de la Protección Integral, la práctica nos permite observar que el modelo de teórico por el que nuestra legislación ha optado dista mucho de la realidad en el caso de los adolescentes sometidos a la Justicia por la comisión de faltas o delitos (Hernández, 2005) .

La presente investigación abordará desde una perspectiva descriptiva, explicativa y exegética la manera cómo están siendo juzgados los adolescentes infractores por los operadores de justicia en el Juzgado de Familia de Tingo María; por lo visto que se presenta el conflicto de la Legislación nacional aparentemente adscrita a la Doctrina de la Protección Integral con la práctica policial, fiscal y judicial en el Sistema de Justicia Penal Juvenil que se manifiesta en una vulneración de los derechos de los adolescentes, especialmente del debido proceso como elemento central que posibilita la efectivización de sus otros derechos humanos específicos; partiendo de un cuestionamiento sui géneris, ¿se respeta el debido proceso en la etapa policial, juzgamiento y ejecución de sanciones aplicadas a los adolescentes? ¿Cuáles son los niveles de participación de los adolescentes en el proceso y su inobservancia en el respeto del debido proceso? Finalmente, por medio de la respuesta concreta a estas interrogantes se pretenderá, en el caso de los adolescentes sometidos al juzgamiento por la comisión de alguna infracción a la ley penal analizar el cumplimiento en la práctica del derecho al debido proceso, por lo que, teniendo en cuenta que estamos ante un derecho instrumental donde no sólo se vulneran otros derechos al incumplirlo, sino que el respeto de otros derechos concretos es un indicador de su observancia.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general:

¿De qué manera están siendo juzgados los adolescentes infractores en el Juzgado de Familia de Tingo María 2014-2015?

1.2.2. Problemas específicos:

- ¿Cómo influye la imparcialidad e independencia del Juzgador en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?
- ¿Cómo influye la Presunción de Inocencia en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores
- ¿Cómo influye el derecho a la Defensa en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?
- ¿Cómo influye el Derecho a guardar silencio en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?

1.3. Objetivos de investigación

1.3.1. Objetivo general

¿Determinar si los adolescentes infractores están siendo juzgados mediante un debido proceso en el juzgado de familia de Tingo María, 2014-2015?

1.3.2. Objetivos específicos

- ¿Determinar la influencia de la imparcialidad e independencia del juzgador en el debido proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?
- ¿Determinar la influencia de la Presunción de Inocencia en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?

- ¿Determinar la influencia del Derecho a la Defensa en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?
- ¿Determinar la influencia del Derecho a guardar silencio en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?

1.4. Justificación de la investigación

La presente investigación aborda el debido proceso que se aplica en el juzgamiento de los adolescentes infractores; tema que tiene relevancia jurídica y trascendencia social, porque de acuerdo al impacto del encuentro del adolescente y el sistema penal, éste puede ser el único en su vida, cumpliéndose de este modo la finalidad preventiva especial de la intervención penal o ser un paso de familiarización con el sistema punitivo. La vulneración de sus derechos y la irracionalidad de la intervención incremental su vulnerabilidad y restan el valor o contenido educativo del encuentro lo que favorece su reincidencia por lo puramente negativo de la experiencia; por lo visto que la delincuencia juvenil como una manifestación que se inscribe en los espacios de una sociedad en la cual su estructura material, y su formación social consecuente, se halla en una profunda crisis.

En este sentido, la política del Estado en torno al problema de las conductas infractoras de los adolescentes no puede ser exclusivamente represiva. Hoy es de casi unánime aceptación que se requiere de una política social integral y, de ser necesario como última ratio legis, dentro de ella, de una política criminal que pueda detener el avance de las infracciones a la ley penal cometidos por adolescentes; por lo que, tratándose de menores de edad la Ley 27337 que comprende a las personas entre los 12 hasta antes de cumplir los 18 años los exime de responsabilidad, tales como la prohibición de su detención arbitraria o ilegal, acceso a la asistencia jurídica, celeridad procesal y acceso a la doble instancia, variable que tendrán que ser abordadas mediante la interpretación de la Ley, necesario para el análisis de la normativa jurídica en torno a la implementación de una normativa específica aplicable para la solución de la delincuencia juvenil en nuestro país..

El propósito de toda tesis la solución de un problema no solo teórico y sobre todo fáctico y teniendo en cuenta además que en el campo jurídico especializado, se han hecho pocos estudios sobre el debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes infractores sobre la base del análisis de expedientes judiciales, analizando la racionalidad de las decisiones dictadas por los jueces en el periodo 2014 - 2015, se abordará dentro de la práctica judicial, empero también analiza la parte doctrinaria y desde la perspectiva de los mismos adolescentes, en relación con el principio de participación como parte del derecho de defensa dentro del marco de la jurisprudencia especializada..

Asimismo, la presente investigación pretende, en la medida que se abordará exclusivamente el derecho al debido proceso y el fenómeno de la Justicia Penal Juvenil, delimitando el alcance de la investigación únicamente en el Distrito Judicial de Tingo María, como principio, garantía y derecho fundamental o derecho humano específico del adolescente sometido a la Justicia Penal.

1.5. Limitaciones de la investigación

Las limitaciones del presente trabajo constituyen los factores externos que eventualmente se presentaron durante el desarrollo de estudio sobre todo relacionado a la recogida de datos: falta de cooperación de las autoridades de los operadores de justicia para suministrar información, falta de colaboración en la que se realiza una investigación o finalmente la imposibilidad de controlar los efectos o influencias de las variables extrañas, durante el proceso de investigación. Empero entre los más principales se anotan:

- Una limitación será el tamaño de la muestra que se tomará de la información de los hurtos, homicidios y asaltos cometidos por los adolescentes y jóvenes (2014 – 2015)
- Otro factor es la limitada empatía que pueda existir al entrevistar a los menores de edad que han cometido algún tipo de delito u homicidio.
- Acceso limitado a documentos confidenciales de los juzgados y fiscalía.

1.6. Viabilidad de la investigación

El problema será susceptible de estudiarse por cuanto se dispone de los recursos necesario: financieros, humanos y materiales, sobre todo acceso a la información, preferentemente del Ministerio Público, la Fiscalía; especialmente a la fuente de datos de la Comisaría de la ciudad. Los resultados obtenidos serán también de interés para estas dependencias en la solución del problema.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de la investigación

A) INTERNACIONALES

1. Montesinos González, Gabriela Mabel (2007), tesis desarrollada en Chile intitulada: “Ley de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Análisis dogmático a través de la jurisprudencia de los tribunales oral en lo penal de las ciudades de Valdivia, Osorno y Puerto Montt (sentencias de junio a diciembre del 2007), tiene como propósito analizar la regulación que se adoptó para el problema y tratamiento de la delincuencia juvenil, basados en la incapacidad de culpabilidad del sujeto responsable. Una ficción de inimputabilidad para el menor de 16 años, donde se asume una incapacidad de culpabilidad, en la forma presunción de derecho in boanm partem, dándose por supuesta la ausencia de suficiente discernimiento, según el cual se exime de responsabilidad criminal al menor de 16 años, en forma absoluta e incondicional. En el estudio se aplica el nivel descriptivo – explicativo – comparativo, llegando a las siguientes conclusiones:

- Respecto a la total simetría de los tipos penales de adultos y adolescentes en las conductas típicas, sería conveniente analizar desde un punto de vista valorativo y desde una perspectiva preventiva si es legítimo mantener esta identidad, sin tener en consideración la edad del agente autor del delito, teniendo en cuenta que la idea principal del sistema de responsabilidad penal adolescente es reducir al máximo la intervención penal. En este mismo sentido, Hernández, Bustos y Hormázabal, señalan una necesaria revisión al carácter de subsidiariedad del CP respecto a las conductas típicas, además de una reducción teleológica de modo de otorgarle un carácter coherente con los tipos penales. Debería comprobarse por parte del Tribunal que, en el caso concreto, se identifique una conducta con el significado propio del respectivo título delictivo,

la cual se encuentra etariamente condicionada por el grado de inmadurez e inestabilidad emocional del menor, debido a la natural diferencia de percepción y asimilación de los conceptos que estructuran los tipos penales por parte del mismo.

- En los delitos cometidos por adolescentes, es un factor común en todas las sentencias analizadas, la actuación del menor dentro de un grupo de pares a la hora de comisión del hecho delictivo, cuestión que a juicio de los Tribunales se circunscribe a la circunstancia agravante establecida en el artículo 456 bis Nº 3 CP. Se hace necesaria una revisión de la concurrencia de tal circunstancia y de los elementos que la determinan en el caso de los adolescentes, de manera de adecuar el razonamiento de su interposición a los principios inspiradores de la Ley 20.084 y a las formas conductuales de cometer el ilícito propias de la edad del agente, las que debido a su estado de desarrollo difieren de las de un adulto, siendo necesaria la incorporación de otros requisitos, como la comprobación de que el menor no hubiese cometido el delito de manera individual.

2. Pineda Arteaga, César A. (2005), investigación presentada para optar el Título Profesional de Abogado y Notario en la ciudad de Guatemala, intitulado. “Estudio sobre los eximentes de responsabilidad penal con énfasis en las causas de inculpabilidad en el código penal guatemalteco”, desarrollada con una metodología descriptiva – explicativa, llega a las siguientes conclusiones:

- Establece la importancia de distinguir la diferencia entre las causas de inculpabilidad y las causas de justificación, lo cual implica una mejor concepción del derecho penal en su parte general.
- El cumplimiento de un deber jurídico no es causa de inculpabilidad, como obediencia debida, sino una causa de justificación, toda vez que se trata de una conducta legalmente autorizada

3. Juárez Gonzales, Ciro (2005), tesis doctoral : La nueva ley de menores infractores y los delitos graves”, el principal propósito de esta investigación se traduce en el análisis teórica y jurídica de la nueva legislación de menores del Estado de Hidalgo, con el objeto de construir una propuesta de respuesta a la problemática de la administración de la justicia para menores y, resuelva la problemática generada por la comisión de delitos graves cuyos autores son menores de edad, con una metodología descriptiva – explicativa. El tesista llega a las conclusiones:
- En toda medida punitiva que tome el Estado relativa a menores debe atenderse al interés superior de estos últimos.
 - El Estado mexicano a nivel federal ha experimentado diversas formas de tratamiento de menores infractores que van desde penas de prisión atenuadas hasta el tratamiento de internamiento o extremamiento.
 - El menor de edad adquiere el mismo tratamiento protector en las diversas ramas del Derecho, no así en el derecho penal.
 - Un tratamiento garantista a la delincuencia juvenil, no significa únicamente modificar aspectos destinados a beneficiar al menor, sino también de beneficiar a la víctima, lo que implica obligaciones para el menor.
 - Para efectos del Derecho Penal, en delitos graves cuyos autores tengan entre 16 y 18 años, esta protección debe tener efectos distintos, en virtud de que quien genera la intervención del Estado es el propio menor con su conducta antinormativa.
 - La delincuencia relativa a menores se torna aún más sensible como sujetos activos, cuyos derechos intencionalmente están reconocidos y merecen ser atendidos con oportunidad al ser más fácil e incluso económico educar a un adolescente que readaptar a un adulto, lo que si se hace a través del castigo o la reclusión se toma más complicado.
4. GALVEZ (2010), investigación presentada para la Maestría: “Los Menores Infractores Derecho Penal. Análisis Crítico en el Derecho Comparado”, con la finalidad obtener resultados del diseño de un conjunto de conjunto de medidas preventivas criminológicas a fin

de enfrentar la delincuencia juvenil en los países de Ecuador y Cuba. Se utilizaron los métodos generales de la ciencia en las investigaciones teóricas entre ellos: El Análisis, la Síntesis, la Deducción, la Inducción. Se emplearon a su vez métodos empíricos como la Observación, y la Experimentación. Así como los específicos de las Ciencias jurídicas tales como: El Método Histórico- Jurídico, Método exegético jurídico y el Método Jurídico Comparativo

- La delincuencia juvenil es un proceso multifactorial producido por menores de edad, que responde a las condiciones socioeconómicas e históricas de cada sociedad en particular, transgrediendo el orden social y legal, en un lugar y momento determinado.
- Dentro de las características fundamentales que pueden establecerse dentro de la perfilación criminológica de la delincuencia juvenil encontramos: la impulsividad, rebeldía, agresividad, afán de protagonismo, fracaso escolar, baja autoestima, familia desmembrada, falta de afectividad, pocas habilidades sociales y comunicativas, poco equilibrio emocional, frustración, siendo estas características influyentes pero no determinantes para la delincuencia .
- El comportamiento de la delincuencia juvenil en América Latina tiene una tendencia al aumento, donde el modus operandi fundamental es a través de la “Maras o Pandillas”, participando fundamentalmente en delitos que afectan disímiles bienes jurídicos protegidos tales como los derechos patrimoniales, el orden público, contra la administración y la jurisdicción.
- El cuerpo legal que en materia internacional protege los derechos de los niños y los adolescentes es la Convención Internacional de los Derechos del Niño y fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, convirtiendo las necesidades de la infancia en término de derechos. Desencadenado

particularmente en América Latina, leyes de “segunda generación” que amplían el tratamiento de los infantes.

- Dentro de las doctrinas que tienen que ver con la protección legal de los menores están la Doctrina de La Protección Integral y La Doctrina de la Situación Irregular, acogiendo la Convención de los Derechos del Niño, la primera de las doctrinas antes enunciadas.
- En el país de Cuba el derecho de los menores que transgreden el orden social, está regulado en el Decreto Ley 64/82. El Modelo de Justicia o de Responsabilidad es un sistema de protección social y legal de los menores en conflicto con la ley penal que establece una clara distinción entre los conflictos sociales y los delitos y los principio de oportunidad, el de celeridad, el de flexibilidad, entre otros.
- En el país de Ecuador el derecho de los menores que transgreden el orden social, está regulado por una ley especial que es el Código de la Niñez y Adolescencia, Normativa en la cual es la base fundamental para la protección del menor y de igual forma procesos que se llevan a cabo para imputar a un adolescente que haya cometido un delito sea este leve o grave, siendo beneficiario para aquellos jóvenes que alteran la paz y el bienestar de la ciudadanía con un juicio justo, catalogado como uno de los mejores en Latinoamérica, por el énfasis de respetar normas internacionales que amparan la protección menor de edad y así conseguir la mejor rehabilitación y concientización con justicia y equidad.

B) NACIONALES

1. Hernández Alarcón, Christian A. (2005), tesis para optar el grado de Magíster, con el título de “El debido proceso y la justicia penal juvenil”, con una metodología descriptiva de análisis documental, con una muestra 64 expedientes Judiciales en ejecución, sentenciados el año 2004, repartidos en forma equitativa entre el 5 y 3 Juzgados de Familia de Lima 16 de cada secretaría, y 32 de cada juzgado, para determinar, las principales causas de la

inobservancia del debido proceso, la posible conexión de la misma con la ineficiente legislación procesal en la materia, a fin de describir la problemática y explorar alternativas de solución que posibiliten su respeto. Y una exploración en el nivel de participación de los adolescentes en el proceso judicial seguido en su contra y la forma en la que perciben el desempeño de las actividades realizadas por los operadores, por medio de la aplicación de una encuesta a 40 adolescentes varones del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima en calidad de sentenciados a sanción privativa de libertad, a efectos de determinar tanto el grado de participación dentro del proceso, como el respeto del debido proceso en la etapa de la ejecución de la sanción privativa de libertad. Teniendo en cuenta la especial situación de los adolescentes hemos realizado dos sesiones de entrevistas grupales, para validar los resultados cuantificados y enriquecerlos con sus propias explicaciones. Nos hemos esforzado, por ello en ser respetuosos en el mayor grado posible de sus aportes tanto como práctica metodológica y exigencia de rigurosidad, así como parte del respeto de los aportes que se pueden rescatar desde ellos en la construcción de prácticas de respeto los derechos, arriba a las siguientes conclusiones:

- En la mayoría de los procesos seguidos contra adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se incumplen las normas que regulan el debido proceso durante la etapa policial, fiscal, juzgamiento y ejecución de las sanciones aplicadas a los adolescentes, tanto en su faz sustantiva como adjetiva, vulnerándose sus derechos humanos específicos en todas estas instancias por medio de decisiones arbitrarias y transgresión de sus garantías procesales, debido a causas de carácter normativo, (deficiente regulación normativa) cognitivo (inadecuada capacitación y comprensión de los operadores de la doctrina de la protección integral) y operativo funcional (incumplimiento de funciones de garantía de parte de los operadores).

- Las deficiencias en la redacción de la legislación peruana en materia de adolescentes infractores inciden en la interpretación garantista del debido proceso y en su respeto, pues regulan un proceso autoritario, inquisitivo y que además no establece normas específicas que potencialicen el respeto de los derechos que contienen el debido proceso por parte de los operadores.

C) LOCALES

Realizada los hallazgos y visitas a las fuentes de información de la localidad no se han encontrado trabajos de investigación relacionadas al tema propuesto, en consecuencia, no hay antecedentes locales.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. El debido proceso.

Los hechos concretos de la protección legal se encuentran influidas tanto por factores legales e institucionales, como por aspectos culturales generales y del derecho, que dicen relación con consideraciones del contexto social en que se desarrollan y la propia maniobra de la evolución de la práctica jurídica; en efecto las pericias desarrolladas por las instituciones y abogados dedicados a la defensa jurídica del menor infractor se sustentan de la contribución de la doctrina internacional y jurisprudencia nacional, siendo esta obligatoriamente estar articulada y sujeta a convenciones internacionales en materia de derechos humanos y en especial el cuidado del menor o adolescente.

El Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de responsabilidad penal de adolescentes, describe sobre el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, con el propósito de superar algunos vacíos advertidos por el Comité de los Derechos del Niño, así como dotar de mayores garantías al proceso de juzgamiento referente a los menores implicados, este instrumento e en materia jurídica es una de las innovaciones; al respecto en el Artículo VII (Publicado en El Peruano), consigna sobre el debido proceso, lo siguiente:

1. Todo infractor adolescente tiene el derecho inviolable e irrestricto a que se le haga conocer sus derechos, la imputación formulada en su contra, a la formulación y preparación de su defensa, imparcialidad en la objetividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la Ley señala.
2. Ningún adolescente puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer responsabilidad contra sí mismo o los miembros de su grupo familiar, cuarto grado de consanguinidad y/o segundo grado de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia.

Por otra parte, las actitudes de coerción e incluso asumir responsabilidades colaterales de otras personas de convivencia mutua, dejan de ser desestimadas y el menor no pueden declarar en contra del imputado.

3. El proceso de responsabilidad penal del adolescente garantiza, también, el derecho a la información y de solicitar copias de los autos en cualquier parte del proceso, siendo las autoridades jurisdiccionales el de velar por su cuidado y/o protección de acuerdo a su posición.

En síntesis, los puntos antes descritos, se expone con objetividad, sobre cómo realizar el procedimiento debido al adolescente infractor en materia de juzgamiento, desde una concepción de derecho innato, así como estableciendo una serie de medios en las que deben actuar los operadores de justicia desde la consignación de un abogado defensor, hasta que asuma él mismo en una situación de ejercicio de libertad, incluyendo una participación activa al acceder a la información y participación plena en el proceso; lo más significativo la ley insta que las

autoridades deben custodiar y dar una llaneza justa coherente a la condición de adolescente. Obviamente me materia de jurisprudencia son los cambios más resaltantes en el debido proceso.

Finalmente, como noción general en sumario (Alvarado L.,(2010: 23) que el debido proceso es un derecho exigible ante cualquier institución con poder jurisdiccional, que es, el conjunto de "escenarios que deben realizarse para afirmar la buena defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial". Precisamente, el debido derecho es un acto con el cual se va asegurar una buena defensa de parte del menor infractor.

2.2.1.1. Antecedentes del debido proceso

En materia de derecho son las acciones coactivas del poder las que generan principios y/o derechos dentro de la convivencia social; en este sentido la génesis del debido proceso se remonta a la Carta Magna de 1215 de Inglaterra, en donde los barones, obispos y ciudadanos cansados de la tiranía del rey Juan se levantaron en armas y lograron que se les otorgara una Carta de Libertades. La sección 39 de dicha Carta estableció: ninguna persona será apresado ni recluso ni desposeído de sus bienes ni desterrado sobre él ni mandaremos ir sobre él, si no media juicio en legal forma efectuado por sus pares o conforme a la ley del país (law of the land o ley del reino). La frase law of the land constituye el antecedente directo del concepto de due process of law (debido proceso legal), que tiene un alcance tanto sustantivo como adjetivo. En consecuencia el debido proceso nace como un derecho inherente que tiene toda persona a no ser sentenciado sin que haya previo un juicio justo e imparcial, medida adoptada desde una consideración humana, sobreponiéndose este valor como una derecho sui géneris a una concepción del hombre.

De acuerdo a un recuento histórico, todo derecho nace desde hechos perversos, actuaciones perversas, tiranas y abusivas que autoritarias y abusivas que muestran los que tienen el poder que esquivan la dignidad de toda persona; siendo el caso principal que da lugar el debido proceso está en la pretérita Carta Magna de Inglaterra, que hasta la fecha sigue

teniendo va teniendo vigor en las sociedades modernas expresados como debido proceso sustantivo y adjetivo.

A partir del siglo XVIII es recogida por la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1789 se adoptó la V Enmienda que estableció: "a nadie se le privará de la vida, la libertad o a la propiedad sin el debido proceso legal". "La Enmienda XIX reafirma lo establecido con la V Enmienda, al enunciar que: ningún Estado podrá privar a cualquier persona de la vida, la libertad o a la propiedad sin el debido proceso legal".

Otro escenario histórico, en el caso de la jurisprudencia norteamericana, el debido proceso ha sido insertado en su Constitución, exaltando a la persona humana, la libertad y la propiedad; y que todo proceso judicial debería estar sujeto con la aplicación del debido proceso, hecho contundente que a su vez es refrendada en la siguiente enmienda, que a partir de esa fecha marca un hito en la jurisprudencia universal.

Analizar aspectos conceptuales del debido proceso, es descender a una comprensión diáfana, unívoca, muchos tratadistas han abordado sobre este tema jurídico; por ejemplo, para la procesalista (Ledesma, 1998), "tradicionalmente la idea del debido proceso se limitaba a un acatamiento de los procedimientos establecidos en el marco normativo correspondiente; sin embargo, de una simple garantía procesal, hoy se piensa que es positivo concibe como un auténtico ideal de justicia. Los procedimientos convencionales o injustos que respondían a decisiones personales de los; y conforme pasa el tiempo la concepción alcanza es el ideal de justicia. El autor citado explicita el rumbo habitual que se le concedía a esta categoría jurídica cuya eficacia era la aplicación de procedimientos legales establecidos, hasta considerada como una mera garantía procesal, dando lugar a actuaciones arbitrarias y decisiones independientes, hoy por hoy, es una categoría magnífica de justicia.

Otro antecedente importante está dado por la posición desarrollada por el Juez Marshall de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso Marbury contra Madyson en donde se estableció que: la esencia misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el derecho de toda persona a requerir la protección de las leyes cuando ha sido objeto de daño. Uno de los principales deberes de un gobierno es proveer esta

protección, que por ciertos muchos estados en su carta magna consideran este aspecto tan valioso de amparo a sus ciudadanos.

Otro hito de referencia que cobra significancia en la comprensión y actuación procesal de los operadores de justicia de aplicar el debido proceso está en la postura del Juez Marshall de la Corte Suprema de los Estados Unidos, instituyendo la esencia misma de libertad, habiendo determinado que toda persona tiene derecho de protección de las leyes cuando ha sido objeto de detrimento por parte de la justicia.

Estos antecedentes importantes, ha hecho que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 consagre también la garantía al debido proceso en su artículo 8 y 10:

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

En efecto toda persona tiene derecho innato ante las instancias jurisdiccionales correspondientes a fin que velen sus derechos fundamentales descritos por la ley o reconocidos en la carta magna

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Este artículo prioriza la naturaleza humana que tiene derechos y está sujeta en materia de justicia a ser oída y tratada por un tribunal independiente ante cualquier proceso o acusación penal.

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha incluido al debido proceso en el inciso 1) del artículo 8:

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter.

Tanto las Naciones Unidas como la Convención Americana de Derechos Humanos reconocen los derechos jurídicos de todas las personas que están reconocidas por la constitución y las leyes frente a agravios y/ o acusaciones para ser tratados en forma imparcial e independiente ofreciéndole cauciones prudentes frente a cualquier delación.

2.2.1.2. Definición de debido proceso.

Dentro de la literatura de la jurisprudencia, no es nada fácil dar una definición del debido proceso por sus múltiples implicancias dentro del marco jurídico; el término el debido proceso tiene varias denominaciones o acepciones, las cuales no necesariamente ostentan un contenido unívoco, sino es polisémico, conforme los van analizando y/ o recomendando los tratadistas o jurisprudentes, o particularmente cuando se presentan casos sui géneris en materia jurídica.

En este sentido, se le ha denominado: Forma de Proceso, Sentencia legal, Derecho de Audiencia en Juicio, Due Process of law, Derecho a la tutela efectiva.

En cuanto a la conceptualización del debido proceso, para Oteiza, (2002), el derecho que se comenta invita a repensar los desafíos del Derecho Procesal en términos de desarrollo de las ideas que han dado cuerpo a la actual legislación procesal y el resultado concreto del ejercicio de los derechos que dicho sistema normativo posibilita ante la administración de justicia. El debido proceso no es un concepto estático con un significado fijo, por el contrario su alcance ha evolucionado a través del tiempo y continúa evolucionando (pág. 4).

La significación del término debido proceso, conforme lo indica el autor citado, va más allá del desafío y el desarrollo de las ideas propias del derecho procesal, en cada etapa o cambio que sufre la sociedad, se

mantiene mutable, por tanto también exigirá mayores precisiones e investigaciones en el ordenamiento jurídico.

Por su parte, Sanguino Sánchez, (2007), refiere que la garantía de un debido proceso constituye, por ende una seguridad, una tutela, una protección para quien se vincula o tiene la posibilidad de vincularse a un proceso; es por eso que el Estado a fin de preservar la tutela jurídica de un debido proceso debe consagrar en sus normas fundamentales los principios generales que regulan los diferentes procesos, las funciones jurisdiccionales y la permanencia de la administración de justicia.

El autor citado, enfoca al debido proceso que se centra en la seguridad, como una especie de una necesidad o protección que tiene que asumir alguien; en este caso es el Estado quien cumple ese rol de protección jurídica al ofrecer en sus normas los principios generales que regulan la administración de justicia.

Por su parte, Herrero, Luis (2010), expresa que el debido proceso significa que:

- a) Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por ley;
- b) Ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser el debido;
- c) Para que sea el debido tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso;
- d) Esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de audiencia (ser oído).

Según el autor aludido, centra sus ideas en que un infractor no puede ser privado de un derecho; es decir las actuaciones judiciales deben estar dentro de un debido proceso, dándole cabida de participar con propiedad y utilidad en un proceso con conocimiento de causa, ofreciendo pruebas y fundamentalmente a ser escuchado.

El ir desenredando sobre la significación y comprensión del debido proceso, el tratadista de derecho Arazí, Roland (2004) considera que, el debido proceso se integra con tres principios procesales de jerarquía constitucional: igualdad ante la ley, congruencia y bilateralidad. Un debido proceso supone, que el justiciable haya tenido y podido acceder a un proceso justo y razonable, en donde haya también tenido posibilidad cierta de ejercer un derecho de defensa razonable dentro del Principio de bilateralidad y en un esquema contradictorio, y al mismo tiempo con un trámite predeterminado en la legislación. Y que todo ello dé lugar a una motivada y razonable resolución que sea coherente con lo que se pretende sancionar, y que guarde la proporcionalidad de los hechos que describe"(p. 97).

El autor enfoca el debido proceso desde una perspectiva constitucional determinando su componente a través de tres principios procesales; que el sujeto justiciable sea igual ante las leyes, teniendo un proceso justo, objetivo, accediendo a una defensa oportuna, obviamente dentro de la legislación que le respalda y le brinda una tutela finalmente obteniendo una resolución satisfactoria; es decir una aplicación de proporcionalidad.

Al margen de las diversas definiciones y enfoques que se puedan dar respecto al debido proceso, la mayoría de tratadistas y legisladores que se han abocado al desarrollo de éste tema coinciden en considerar al debido proceso como un derecho fundamental que se sustenta en la dignidad de la persona, en el derecho inalienable, constituido por determinadas condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones vienen siendo ventilados en un proceso.

Por su parte, el Tribunal Constitucional sostiene que el debido proceso presenta dos expresiones: una formal y otra sustantiva. La expresión formal comprende los principios y reglas relacionados con las formalidades aplicables a todo proceso judicial, tales como el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. En cambio, la expresión sustantiva está relacionada con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe cumplir.

En este caso, estas dos expresiones tienen que tratar y lograr los intereses en juego, el interés social por la comisión de un delito expresados en la aplicabilidad de principios, leyes y la formalidad, y el interés individual, puesto en peligro por su sometimiento a proceso, entendida también como la expresión sustantiva que todo operador de justicia debe cumplir en base a la razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones judiciales.

Es por eso que con justa razón también se afirma que se encuentra ante un conjunto de derechos esenciales a la persona humana, los que a su vez han configurado una suerte de mega derecho o derecho continente que contemporáneamente ha recibido el nomen iuris de debido proceso legal.

a) Debido proceso formal y material

Es aceptada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia la afirmación de que el debido proceso tiene dos dimensiones: la formal y la material.

Dimensión adjetiva, formal o procesal, es el conjunto de recaudos y formalidades que deben de cumplirse antes de sentenciarse. Sin embargo, la faz procesal no se limita a este concepto pues implica que ningún sujeto de derechos puede ser privado de su libertad sin un juicio limpio (fair trial americano) llevado a cabo por el órgano competente y efectuado sobre pruebas válidamente obtenidas e incorporadas, habiendo tenido los justiciables, en igualdad de condiciones, la oportunidad de ser oídos, de contradecir, de impugnar con la finalidad de lograr en un plazo razonable, una decisión justa; pues en rigor como señala Linares (2005), el debido proceso adjetivo no es sino un aspecto de aplicación del sustantivo en el procedimiento de defensa judicial de los derechos; es decir lo que una persona justiciable tenga acceso formal y material a la justicia, como derecho de plantear contiendas, probar los hechos, las razones, alegar en su defensa y obtener una sentencia favorable a sus pretensiones justas.

.

Dentro de este contexto, el Tribunal Constitucional señala que los principios y reglas que integran la dimensión formal del debido proceso tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento establecido

previamente, el derecho de defensa, la motivación, etc. En efecto, frente al acceso real, libre de la persona a la aplicabilidad de las formalidades constituidas por las leyes o principios o al derecho de toda persona a que se le administre justicia por los tribunales de manera pronta, completa e imparcial, sobreponiendo el derecho de utilizar los medios de defensa e indicando la relación concreta y directa entre los hechos probados y las normas jurídicas.

Por otra parte, el debido proceso está comprendido por determinados elementos procesales mínimos que son necesarios e imprescindibles para el establecimiento de un proceso justo, es decir contar con el apoyo de un experto en derecho; con los medios determinados convenzan al Juez que se está llevando con total parcialidad y salvaguardado los derechos elementales, que toda persona puede refutar y contradecir lo dicho por la parte contraria; solicitar ser atendido durante todo el proceso con las prerrogativas correspondientes y otros derechos que forman parte y son principios fundamentales e inherentes de toda persona. A su vez, estos elementos impiden que la libertad y los derechos de los individuos se afecten ante la ausencia o insuficiencia de un proceso. En todo caso, el debido proceso responde a un mecanismo que se sobrepone a actuaciones arbitrarias o convencionales en el ámbito de los procedimientos administrativos del Estado al consignar un conjunto de garantías que permiten que las personas puedan tener un proceso regular y justo. En efecto el debido proceso esta entendido por síntesis procesales que son necesarios e indispensables para que se realice un proceso justo, impiden se vulnere el proceso. Finalmente el debido proceso, se realiza con el fin de que se respete las acciones realizadas dentro en un procedimiento administrativo del Estado, y que estas garantías hacen que la acción y/o proceso se realicen de forma normal y con las garantías correspondientes y así sea justo.

En este punto es necesario señalar que el debido proceso, concebido como un derecho fundamental de toda persona, no sólo tiene como campo de acción el ámbito judicial, sino que es aplicable a cualquier tipo de procedimiento, sea este administrativo, militar o arbitral; es

decir la aplicabilidad trasciende y/o propaga a todo el ente administrativo en un Estado o país.

La jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la diligencia de que se siga con el debido proceso, no solo es exigible en los diferentes niveles que componen el Poder Judicial, sino que deben ser respetadas por todo miembro que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; los acuerdos internacionales del que forma parte una nación en materia de jurisprudencia, no solo es exclusivo para el ámbito judicial, sino también serán aplicables en toda instancia jurídica. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta locución nos dice que toda autoridad que ejerce autoridad dentro de un estado y emita resoluciones de acorde a sus prerrogativas resalte derechos y obligaciones que deben cumplir las personas; siendo en este caso que de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial se someten a ese estado de derecho que tiene una persona.

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que cualquier instituto del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene el deber de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana; es decir actúa bajo la tutela jurisdiccional internacional, obviamente plasmada en la norma fundamental; ser escuchado la persona en las diferentes etapas del proceso, brindándole los derechos inherentes y fundamentales que tiene toda persona y dentro de los plazos determinados por ley, por la autoridad o debidas garantías y dentro de un plazo prudente, por un juez o corte conveniente, que no tenga impedimentos, ni lineamientos fuera de lo normado y que esta se ajuste de acuerdo a las pruebas y medios propuestos y dilucide su determinación en justa.

En consecuencia, este mismo criterio ha sido recogido por el Tribunal Constitucional al expresar que: el derecho al debido proceso,

reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, es un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con las exigencias de su respeto y protección, sobre todo órgano, público o privado, que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales; es decir su aplicabilidad se extiende a todo el aparato administrativo público .

- b) **El debido proceso sustantivo**, funciona como una representación de autocontrol en la forma de autocontrol en la actuación de la administración pública en general; en tanto, resguarda a toda persona de las leyes inversas a los derechos fundamentales, así como las determinaciones administrativas y territoriales contrarias a las establecidas por ley, dándose lugar a que estas no sean aplicadas, viéndose de modo determinado su invalidez, evitando de esta manera la discrepancia entre actos y los principios que consagra la constitución y el estado de derecho; es decir se realiza como un medio de controlar conforme a la razón de las leyes, exigiendo que todos los hechos del poder, sean imparciales como las normas jurídicas, actos administrativos y aplicados respetando los valores superiores, los derechos fundamentales en concordancia a los bienes constitucionalmente reconocidos y protegidos.

De modo que, sirve para exigir que lo descrito en los contenidos o fundamentos de base de los actos legislativos, judiciales o administrativos, sean acordes con los principios técnico axiológicos que todo operador de justicia y/o administrativo de advertir en las formas procesales, tales como el principio de razonabilidad, proporcionalidad, equidad, justicia, etc.

El Tribunal Constitucional señala que en su faz sustantiva el Debido Proceso se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, los cuales adquieren a juicio del Tribunal Constitucional especial relevancia junto con los derechos de interdicción de la arbitrariedad y motivación de las resoluciones. Según lo expresado

por el Tribunal Constitucional la faz sustantiva está sujeta con la actuación axiológica del operador de justicia o el poder público.

El debido proceso sustantivo exige, por su parte, que los actos tanto del legislador, del juez y de la administración sean razonables y respetuosos de los derechos fundamentales que tiene toda persona, a tal punto que su contravención deba ser castigada con la no aplicación del acto en sí o viciando el acto y declarando su invalidez. La connotación más significativa del debido proceso sustantivo es exigir a la autoridad que emite justicia mediante sus actos resolutivos y otros sean medidos y deferentes, tomando en consideración la inherencia que toda persona tiene con respecto a los derechos fundamentales.

En el proceso judicial, ésta labor se posibilita a través del control difuso que realiza el juez, lo que implica que el que se pronuncia en lo que compete puede advertir que la ley es nula y no aplicarlo en el procedimiento determinado; dependiendo del juzgador el poder pronunciarse sobre su ineficacia (ley) e inaplicarla para un caso determinado; es decir va depender del concepto de lo sustantivo que internalice el juez para declarar o desestimar para un caso concreto que va a depender exclusivamente de sus actos o decisiones.

Por ello, el debido proceso sustancial no solo tiene por fin asegurar la razonabilidad de lo decidido en un proceso, sino mucho más a va al orden de probidad, en relación a reglas del correcto entendimiento humano (lógica), contingentes, variables, experiencia de tiempo y lugar. Un debido proceso no solo va con lo justo, lo razonable, lo lógico, sobre todo va más allá del entendimiento; es decir va con la integralidad de los operadores de justicia de sus actos.

El debido proceso puede también desdoblarse, citando palabras del procesalista Monroy Gálvez, Introducción al proceso civil, en derecho al proceso y derecho en el proceso.

De acuerdo al enfoque que brinda el autor desde una génesis, que el derecho al proceso empezó a manifestarse hace ya más de siete siglos, y fue en principio el derecho de todo ciudadano a no ser condenado sin que medie un juicio previo, o sea que un ciudadano no podría ser sometido ni juzgando sin un previo juicio.

Hoy en día, luego de un constante cambio, el derecho al proceso permite que toda persona la inherencia de obtener un proceso razonable con la finalidad de que se pronuncie sobre su pretensión; es decir también tenga oportunidades para que consiga una buena defensa y a ser atendido incoando sus interés personal. El derecho al proceso también implica por otra parte, que ninguna persona que sabiendo sus derechos que le corresponde pueda ser justiciado sin que se realice los procedimientos debidos conforme lo indica la ley y otros; no pudiendo existir sentencia antes de un proceso que conlleve al esclarecimiento de los hechos que finalicen en acto firme; precisamente el debido proceso hace que sean respetados todos los hechos que se realizan dentro de una instrucción, y que sea esta de manera justa e imparcial; vale decir que las acciones que se imparten por y ante los jueces que emiten y/o dictaminan y que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto que han requerido la intervención de un conflicto o de un litigio a fin de definir ideas de acción, pretensión y jurisdicción.

El derecho en el proceso implica que todo individuo que participa en un proceso cuente con las normas respectivas a fin de que sean utilizados conforme al transcurrir de este; es decir ese catálogo constituye los derechos inalienables que tiene todo ser humano. Una vez que el sujeto se inmiscuye en un proceso, de forma un ciudadano empieza a involucrarse en un proceso, facultativa u forzosamente, el Estado debe asegurarle que durante su tramitación no se encuentre en desventaja para expresar su posición jurídica, sea probando su derecho, alegando, impugnando y asegurando la ejecución de lo decidido en definitiva; es también importante la participación y/o tutela del Estado para

garantizar desavenencias que pudieran perjudicar a cualquier persona. En caso se vulneren éstos derechos, el acto que permitió dicha transgresión será nulo. En este sentido el derecho en proceso al acceder la participación del sujeto imputable permite que mediante participación de su abogado defensor o el mismo esté al tanto de todos los derechos que le asisten, siendo el meollo de ese derecho, caso contrario, estarían transgrediendo lo que en sí significa el debido proceso, que finalmente todo acto jurídico en participación del sujeto queda invalidado. Definitivamente el debido proceso contempla una serie de procedimientos legales en los que tiene que ceñirse el sujeto imputable, esos procedimientos forman parte de todo ese proceso considerado debido proceso.

2.2.1.3. El contenido del debido proceso

Términos explícitos del debido proceso constituye un derecho y garantía, y de acuerdo a lo referido en párrafos anteriores, en el sentido de que es considerado como un mega derecho o derecho continente, está constituido por los siguientes derechos: derecho al juez ordinario, derecho a la asistencia de letrado, derecho a ser informado de la acusación formulada, derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, derecho a la presunción de inocencia. En efecto, ese mega derecho consignado a favor del sujeto implica una serie de acciones y retribuciones a los que tiene acceso que constituyen garantías fundamentales en proceso judicial, brindando de esta manera una seguridad jurídica dentro del goce o ejercicio de derechos y libertades; es decir que el imputado actúa dentro de una celeridad de normas y/ o acciones que implementa y garantiza un proceso judicial, siempre a favor de cualquier imputado y el contenido del debido proceso a todo recursos o derechos que le asusten.

2.2.1.4. El debido proceso en la justicia penal juvenil

En materia de derecho el concepto de justicia penal juvenil ha generado una serie de debates, cuestionamientos y finalmente consignando una serie derechos inherentes; en este caso, derechos específicos relacionados con el proceso de desarrollo e incluso estableciendo los

actos cometidos por los menores requiere de un régimen de asistencia y determinada responsabilidad. Empero la más grave privación que puede imponerse a un sujeto por una acción realizada contraria a lo establecido por ley, es la libertad por consecución al resultado de un proceso penal incoado a un individuo y lo que conlleva en la sociedad tal hecho. Es por esa justa razón que el Derecho Penal materializando las ideas de BECCARIA en el contexto de la Revolución Francesa, ha representado - al menos en términos legales- un límite a las injusticias que realiza el poder punitivo de la autoridad (Estado) y una garantía para la defensa de la sociedad civil, sobre todo al amparo de los jóvenes que infringen leyes o normas de convivencia

En todos los países, todas las legislaciones penales han establecido desde antaño, que ningún ciudadano podía ser detenido salvo mandato judicial. Poco a poco, progresivamente se han reconocido en las legislaciones latinoamericanas los Derechos Humanos de los niños en forma diferenciada de los adultos valorando, en primer lugar, la compleja evolución histórica que ha tenido que atravesar la infancia para ser reconocida como categoría jurídica con Derechos Humanos Específicos, al margen del dato puramente biológico y psicológico y entender, en segundo lugar, que el reconocimiento de los derechos jamás ha asegurado por sí mismo su respeto irrestricto.

En efecto, las exigencias de los tratados y las convenciones internacionales que celebra cada país hacen que tengan una legislación en materia penal juvenil que respondan a la realidad social en la necesidad de la existencia de derechos y derechos de los niños, niñas y adolescentes; además entiendo que la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

A partir de este del concepto señalado, el interés superior del niño y el principio de no discriminación por señalar un ejemplo, habiendo sido reconocidos desde la Declaración de los Derechos de Niño de 1959, recién se han tornado exigibles desde la suscripción de la Convención de 1989; en este sentido, lo reconocido como evidente para un adulto, no lo ha sido

históricamente para un niño, muchos países han aplazado tales convenios u otros a fin de visualizarlo en forma clara al respecto. Ilustrando lo antes descrito, puede ser que nadie puso en tela de juicio la ilegalidad de que una persona o sujeto sea detenido sin el mandato judicial emitida por la autoridad competente. No obstante, este mismo hecho cometido frente a un niño, ha sido justificado históricamente con el pretexto de la protección de sus derechos, sin que nadie haga un examen de la arbitrariedad o necesidad de dicha medida, claras muestras de una actuación contraria y dividida en cuanto a consideración de una legislación diferenciada y particular. Por esta razón, se considera que, la afirmación de los derechos de los niños en las leyes internas de cada Estado no ha conchabado de lo que ya se sabía, si no que dilucido la afirmación de algo que no se sabía o no se entendía claramente, aunque parezca paradójico: los adolescentes tienen derechos inherentes, derechos propios por su naturaleza; es decir en materia de juzgamiento debería primar esta última consideración por lo visto ante la declaración de los Derechos de los Niños Adolescentes.

En consecuencia, junto con la consideración de sujetos de responsabilidad, surge el reconocimiento de sus derechos fundamentales en el proceso judicial, convirtiéndose el debido proceso en el instrumento que garantiza la efectivización o realización concreta de los demás derechos fundamentales; entiendo que en la Declaración de los Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. De este modo, se considera que su estricta observancia es la garantía dinámica (en la práctica) de la adecuación de la legislación interna de un Estado y de la Administración de Justicia Penal Juvenil a la Doctrina de la Protección Integral. En consecuencia, el reconocimiento de un catálogo de derechos: a la vida, desarrollo integral, interés superior, ni de ser oído; sino el reconocimiento del derecho fundamental al debido proceso y la posibilidad de su exigencia en la realidad, lo que representa el paso trascendental en el cambio de la visión de la infancia como categoría jurídica diferenciada y como sujeto de derechos específicos. En este caso, a parte de una aseveración de derechos y prerrogativas propias e inherentes que solo el adolescente lo posee, siendo lo mas eludible que el menor infractor sea visto, reconocido y

ubicado dentro de la justicia penal con la diferencia que este tiene derechos preferentes ante las instancias correspondientes.

Por otro lado, el debido proceso además de procurar la concretización o realización de valores como la justicia y la equidad y limitar el poder público, se basa en el reconocimiento de la dignidad del niño y adolescente, considerándolo como el resto de la humanidad, como sujeto primario de todo orden legal y político; pues, el reconocimiento y observancia del debido proceso como principio, derecho fundamental y garantía del niño y el adolescente, implica como se ha señalado el reconocimiento de su dignidad, entendida como la premisa antropológica cultural del Estado constitucional, cuya consecuencia organizativa es la democracia. Un país jurídica y democráticamente organizado reconoce sobre todo el capital humano como eje de desarrollo; en este sentido los niños, niñas y adolescentes están protegidos y se les garantiza el bienestar para ellos como sujeto primario de todo orden; pues el debido proceso constituye un principio inalienable e irrenunciable.

2.2.1.5. El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en la justicia penal juvenil

El debido proceso, en su triple manifestación (principio, derecho fundamental y garantía); es decir un acto que rige la conducta; un conjunto de principios, preceptos, normas y reglas que rigen las relaciones humanas en toda sociedad civil que les son esenciales; y aval que se le brinda ante cualquier eventualidad jurídica que se presenta; se relaciona con diversos principios y de distintas maneras, con los cuales debe ser aplicado en forma conjunta.

Nuestra Constitución (Art.139 inciso 3) como toda nuestra legislación tradicionalmente sincrética mezcla una institución de origen anglosajón, (debido proceso) con otra originada en la Europa continental (tutela jurisdiccional efectiva), consagrando ambos derechos fundamentales en forma conjunta, lo cual obliga a realizar un esfuerzo de diferenciación conceptual entre ambos derechos, como criterio de coherencia o concordancia práctica, asunto muy complicado por encontrarse entrelazados sus contenidos. Sin embargo, esta fusión enriquece el

sistema penal jurídico, salvo que su aplicabilidad está en torno a una exégesis depurada, analítica y sustantiva.

La regulación vigente aglomerada bosqueja el siguiente raciocinio: Si se considera a la tutela jurisdiccional efectiva como el poder que tiene todo individuo dentro de un estado o la sociedad a asentir a la autoridad jurisdicción competente, para posterior a una locución en igualdad de procedimientos y otros que conlleven una investigación, alcanzar una disposición capaz de ejecutarse en la vida diaria del justiciable, es evidente que no puede haber las garantías que corresponden en lo que respecta a la tutela del Estado hacia el individuo, si no se llevo conforme a lo establecido en la normativas correspondientes. Así pues, si bien no son lo mismo, el debido proceso (garantías) y la tutela jurisdiccional efectiva implica la existencia de un proceso judicial rodeado de todas las garantías efectivas para las partes involucradas en el proceso. (García Toma, 1998, pág 249) El autor citado refiere con exactitud las diferencias entre debido proceso y la tutela jurisdiccional como el poder que tiene toda persona humana, sea esta natural o jurídica, a fin de exigir al Estado que lo haga efectiva su función jurisdiccional sobre sus pretensiones, pero dentro la función adjetiva y sustantiva del debido proceso.

Por otro lado, los derechos que componen la tutela jurisdiccional efectiva, también forman parte del debido proceso. Así por ejemplo: el derecho de acción (interponer una demanda con la finalidad de que sea investigado por el órgano correspondiente) y contradicción, (la parte contraria refute con medios pruebas y demás lo realizado por el accionante), se encuentran contenidos en el debido proceso dentro de la concepción americana; es obvio que ambos términos se complementan dentro de la literatura del derecho, el caso es que cada jurisprudente tenga una noción propia y clara.

En conclusión, esta situación ha llevado a un sector de la doctrina o jurisprudentes a señalar una identidad entre ambos derechos, señalando que la única diferencia está en que mientras la tutela jurisdiccional efectiva es el “todo”, la abstracción; el debido proceso es la “parte”, manifestación concreta de la tutela jurisdiccional efectiva. En este caso formarían algo así como las dos caras de la misma moneda, un aspecto subjetivo (tutela) y

otro objetivo (debido proceso). En consecuencia se debe reconocer o, que si bien ambos derechos son el fruto de un desarrollo histórico distinto, y lo que se dice de ambos en sus contenidos en muchos aspectos se subsumen mutuamente. No obstante, la amplitud del debido proceso hacia todo los ámbitos de la vida, sea procesos judiciales, administrativos e incluso hasta al ámbito privado, nos lleva a reconocer adicionalmente que el debido proceso, es un principio de mayor consolidación universal y desarrollo, que agrupa todo en sí, el cual por coincidencia histórica, ha ido subsumiendo otros derechos, hasta convertirse en un derecho aglutinador de otros, por lo que sin poderse establecer una relación de género a especie con la tutela jurisdiccional efectiva por la diferencia de su origen, contiene dentro de sus alcances todos los derechos que la componen.

2.2.1.6. Principios Fundamentales de la Doctrina de la Protección Integral

En todo proceso penal, es indispensable una lectura constitucional y de Derechos Humanos de las normas aplicables. Así, por ejemplo en el procesamiento penal de un adolescente, la aplicación del Código del Niño y del Adolescente debe hacerse desde una perspectiva constitucional y desde los Tratados Internacionales que los protegen, por encontrarse inmersos en el conflicto judicial sus derechos humanos o derechos fundamentales.

Al efecto, debe tenerse en cuenta, que la Cuarta Disposición Final de la Constitución de 1993, señala que las normas relativas a los derechos y las libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú, lo que significa que siempre que se interprete un derecho fundamental como es el caso del debido proceso, debe recurrirse a los tratados, especialmente a los que tienen que ver con los niños y adolescentes, que conforman la Doctrina de la Protección Integral; en efecto los principios fundamentales de protección integral están expresadas también una jerarquía de normas, la misma que es reconocida por la Constitución, su operatividad implica precisamente que toda actuación judicial deben tener presente esa tutela jerárquica.

En efecto el debido proceso si se relaciona con la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, como un bloque de constitucionalidad, se tiene que reconocer al debido proceso como derecho fundamental constitucionalmente reconocido y al mismo tiempo como un Derecho Humano Específico; es decir un auténtica interpretación o lectura parte desde una concepción macro de las normas existentes, las normas de carácter internacional se sobreponen a los planteados en las nacionales, empero dentro de la óptica de la Constitución y propiamente dentro los derechos, tomando siempre en consideración el fin trascendental de la protección completa del menor infractor.

2.2.1.7. Principios rectores de la Convención que inciden en la configuración y observancia del debido proceso.

A continuación se analizan y presentan los principios rectores de la Convención de la jurisprudencia interamericana en la configuración y la observancia del debido proceso en la justicia penal juvenil, siendo estos:

a) El debido proceso y el interés superior del niño en la justicia penal juvenil

La relación existente entre el debido proceso y el interés superior del niño, ha sido reconocido mucho tiempo antes del debido proceso, sea en forma explícita como en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 o implícita en diversos artículos del Código Civil del 1984, con distintas denominaciones: "bienestar de los hijos, lo más beneficioso para los hijos", "interés del menor" o "intereses del menor" o "intereses de los hijos". Estos dos documentos por antonomasia, desde el seno familiar la concepción de una especial consideración hacia el menor, son puestos en relieve el interés superior del niño y del adolescente.

El debido proceso funciona como principio informador y orientador de todo el ordenamiento jurídico y es al mismo tiempo garantía de efectivización de otros derechos; el interés superior del niño, es también principio rector que informa y orienta la aplicación de las normas específicas y las decisiones de la administración pública y la sociedad

civil que afectan a los niños y adolescentes. En consideración a lo expuesto el debido proceso funciona como un mecanismo que orienta, informa y le brinda garantía en todo proceso jurídico que se le somete desde la aplicación de las normas precisas y las decisiones que pudieran afectar al menor.

El caso del interés superior del niño como sucede con todo principio, es difícil establecer su alcance, pues se encuadra dentro de las llamadas definiciones marco, en constante evolución y susceptible de distintas lecturas, pues cada época y cada cultura define qué es lo mejor para la niñez en función de un determinado sistema de valores y de representaciones sociales. Efectivamente un Estado o país adopta una serie de cánones de consideración como políticas y programas de atención integral al niño y el adolescente a más de consignarle derechos económicos, sociales y culturales constituyendo así el interés primordial, incluyendo a la familia.

Si la concepción convencional de la sociedad se expresa el interés superior del niño, también en la Justicia Penal Juvenil se pone de manifiesto o concretiza por medio del respeto irrestricto de todas las garantías que conforman el debido proceso. En este sentido, se considera que la búsqueda de lo más favorable al interés superior del niño en el proceso penal, no puede ser otro que el respeto irrestricto de todas las garantías que un adulto tendría en las mismas condiciones, y adicionalmente las garantías específicas por tener en cuenta su especial condición de sujeto de derechos en desarrollo, condición preponderante ante cualquier decisión procesal. De acuerdo a lo expuesto la consideración que se le da al menor, bajo el término en “desarrollo” hace que la justicia penal juvenil, al margen de las normas o del derecho del debido proceso, tenga otra consignación en el tratamiento de las normas del código penal, en todo caso para la aplicación o decisiones judiciales.

Este proceso de adicionamiento de garantías se ha denominado “Doble Garantía” o adecuación de las garantías, porque no significa derechos adicionales que sumados a los que tiene todo ser humano, ponen en

ventaja al adolescente procesado sobre los demás sujetos procesales adultos; sino, la aplicación específica de los derechos humanos que todos los hombres tienen, en razón de que no todos se encuentran en condiciones de ejercerlos del mismo modo. Las consideraciones expuestas sin lugar a dudas, no significa una ventaja sobre el adulto, sino que se expresa y resignifica la condición de este derecho que por cierto constituiría una doble garantía, el debido derecho más el derecho a desarrollo integral del niño o adolescente.

La exigencia de la presencia de los padres en la declaración de los adolescentes adicionalmente a la del abogado defensor y el fiscal, así como la notificación de los sentencia a los mismos. La ratio legis de estas normas, se encuentra en que si bien para un adulto, recibiendo la declaración o notificándole a él sobre la decisión jurisdiccional se garantiza su derecho de defensa, en el caso de un adolescente el ejercicio de su derecho de defensa se encuentra condicionado a su capacidad de comprensión de las actuaciones y diligencias para cuyo efecto necesita tener alguna persona de confianza, que contribuya en la comprensión de las actuaciones procesales y en el ejercicio de sus derechos humanos específicos. El proceso penal supone otra cuota importantísima en el ejercicio de los derechos de defensa del adolescente añadiéndole el acompañamiento de una persona en la comprensión de las actuaciones y/o diligencias que le contribuye en la interpretación, análisis e internalización de las actuaciones procesales, que finalmente una forma de ejercer su derecho.

La aplicación del interés superior del niño en la justicia penal juvenil y en concordancia con el debido proceso, no significa que los derechos del adolescente, sean prevalecientes sobre los derechos del adulto víctima; sino que como principio rector exige en cada caso concreto, que el ejercicio de los derechos del adolescente se efectúen teniendo en cuenta su situación de titular de derechos humanos específicos; en este caso es solo sobreponer el derecho que tiene el menor por su condición de que se le respete las prerrogativas adquiridas y tutelados por los Estado, sin otra interpretación.

El interés superior del niño en cada acto formal presupone que se; siga todos los pazos conforme a sus derechos inherentes que le corresponde; por esta razón, si se mezclan sus derechos inherentes a un debido proceso, se puede concluir que el interés superior exige sopesar las circunstancias de hecho existentes en cada caso concreto para determinar de qué manera puede maximizarse la aplicación de las garantías que lo contienen. Esta adecuación no significa la prevalencia del derecho al debido proceso del adolescente, sobre el derecho al debido proceso del adulto, como si la incursión del interés superior ubicara los derechos de ambos en una distinta jerarquía; sino reconocer básicamente que el derecho fundamental al debido proceso es un derecho humano específico que exige, por tanto un nivel de concreción material acorde con su condición de sujeto en proceso de desarrollo.

Así, los derechos de los adolescentes que siguen una investigación penal, de ninguna manera están por encima en virtud del interés superior del niño a los otros sujetos que son parte de la investigación, pues la diligencia concreta del menor infractor dentro del proceso penal, no hace que esta niegue los derechos de los demás dentro del proceso llevado. De este modo, el debido proceso en la justicia penal juvenil, al mismo tiempo que le da contenido al interés superior, restringe sus alcances, no debiéndose entender el límite como restricción sino como la exigencia de una aplicación concordante.

Finalmente, el interés superior del niño solo potencia en materia de justicia penal juvenil en caso del uso de medidas cautelares y coercitivas a que el niño no sea endeble a actos o censuras judiciales que estigmaticen o condenen de por vida el aislamiento de la sociedad, sino que ese interés superior es para proteger el derecho en la acción judicial y que siempre prime la inherencia de los derechos fundamentales del menor frente a la figura penal.

b) El debido proceso y el principio de participación

El derecho a participar nos quiere decir que toda persona sea adolescente y/o adulto tiene la potestad de accionar en los casos

propuestos o llevados en instancia alguna por el órgano jurisdiccional correspondiente, llevado a la par con el derecho a ser oído ya que todos deben dar las opiniones y contradicciones propuestas y que el jurado o la autoridad en base a eso emita pronunciamiento, siendo estos la expresión libre de que cada sujeto exponga sus argumentos y no se les limite. Como derecho y como principio rector de la Convención de los Derechos del Niño, se encuentra regulado en el Art. 12.

El derecho a expresar libremente las opiniones no tendría sentido si éstas no debieran ser tomadas en cuenta, en función de la edad y madurez. Al respecto, hay una discusión doctrinal sobre la edad desde la cual estas opiniones deben ser tomadas en cuenta. Esta discusión es resuelta legislativamente, pues el artículo 85 del Código de los Niños y Adolescentes señala que el niño debe ser escuchado y la opinión del adolescente (12 años en adelante) debe ser tomada en cuenta, al menos para el ámbito penal juvenil es acertado al concordar con el establecimiento de la responsabilidad penal. En todo caso, las discusiones doctrinales quedan de lado cuando la ley dispone y reconoce como derecho la participación plena del menor a ser escuchado y respetar las opiniones en los órganos jurisdiccionales.

El derecho a la participación en el proceso penal juvenil, tiene relación tanto con el debido proceso como con la determinación del interés superior del niño, además de ser un derecho propio de todo menor y que no puede ser sujeto a observaciones, entonces se sobrepone por la consideración del menor como interés superior, obvio contemplado las garantías procesales correspondientes.

En cuanto a la conexión entre el interés superior del niño y el derecho a ejercer su libre opinión en la justicia penal juvenil; debe tenerse en cuenta que en la búsqueda de la decisión más favorable a su desarrollo integral, escucharlo es un ingrediente importante pues implica pensarlo y considerarlo como una persona. Asimismo, reconoce las posibilidades que tienen los niños de enriquecer el proceso de toma de decisiones al compartir su perspectiva y participar como ciudadanos. En consecuencia el debido proceso pone en relieve la madurez en relación a la libre

expresión, a la competencia oral que dispone el adolescente efectos de procesos de maduración que innegablemente, de acuerdo a lo que dispone el debido proceso debe ser tomado en cuenta como una manifestación de su propia identidad a fin de tener una amplitud de juicios dentro de la administración de justicia.

Por otra parte, en relación al debido proceso, el ejercicio del derecho a ser escuchado tiene una relevancia gravitacional, no sólo por ser parte del contenido de las garantías del debido proceso, de modo que al no escucharse al adolescente se viciaría todo el proceso, al vulnerarse su derecho de defensa, pero no entendido en su ejercicio como el de un adulto, sino teniendo en cuenta su especial condición, aún muchos jurisprudentes, frente a los cambios abruptos en especial consideración del interés superior del niño en la legislación del derecho penal juvenil permanecen en esquemas obsoletos al tener ofuscaciones de todo proceso.

En este sentido, se discurre que no compensa el cumplimiento del ejercicio del derecho de defensa de un adolescente, cuando simplemente se le peticiona al adolescente que explique solamente lo que se le pide y sólo cuando se le pregunta, o que se le reciba su declaración indagatoria, sino por medio de la realización de acciones positivas de parte del juez, tendientes a potencializar su participación activa y libre expresión dentro del proceso. De lo contrario, si el juez tiene un rol pasivo en el aspecto respectivo, tal vez se respete el derecho de defensa en los términos en los que se exigiría su respeto si un adulto fuese el imputado, pero no en los términos que corresponden al ejercicio de un derecho humano específico de un adolescente sometido a proceso judicial. El conseguir que el menor infractor este en todas las diligencias correspondientes, va depender de la autoridad jurisdiccional competente, potencialice ese derecho que le asiste para que el infractor participe plenamente, caso opuesto no se llegara a lo previsto ni cumplirá el derecho que le asiste dentro del proceso judicial.

Asimismo, el derecho a ser escuchado implica además de la información obtenida durante la declaración sea adecuada el derecho a no ser

forzado por persona alguna dentro y fuera del proceso, a que no se exprese, a no ser incoado con términos o favores que conlleven al cambio de versiones dadas en instancias con el fin de que la parte obtenga beneficio con estos actos, debiendo la autoridad debe adelantarse el dialogo y el intercambio de puntos de vista, a fin de que el proceso sirva como un espacio pedagógico donde el adolescente o menor infractor informe en forma constante, tolerante y con libre expresión. El juez, debe ser el orientador de este proceso que incluso posibilita que llegue a comprender las razones de determinadas decisiones y por qué éstas difieren de las que hubiera preferido. Es muy importante la función pedagógica que debe adoptar el juez durante el proceso judicial que se le somete al adolescente, esta participación va a depender de las estrategias que las maneje a fin de obtener una información pertinente, sin ser influido, maniobrado en el mensaje que se desea alcanzar; el generar un diálogo activo, la reciprocidad de perspectivas a fin de actuar sustantivamente dentro del proceso judicial.

Debe tenerse en cuenta, además que no es suficiente escucharlo, sino que en algunos casos es necesario que preste su aprobación con las garantías que estas ameriten informado. Para Grosman, Cecilia, (2010: 219) este es el momento más elevado en la determinación de su interés, pues representa hacerse cargo de sí mismo por comprensión y razonamiento basado en la plena información y en el conocimiento de los riesgos. Según la autora, la participación activa del adolescente constituye el momento más elevado en la intrepidez de considerarse y asumir su propia madurez, cuyo razonamiento es de suma valía en el despliegue de decisiones de parte del juez.

En nuestra legislación, Art. 227 del Código de los Niños y Adolescentes, considera, el derecho a la participación del adolescente en la Justicia Penal Juvenil, siendo un elemento esencial en la observancia del debido proceso, en la medida que al garantizar el ejercicio del derecho de defensa como derecho humano específico, posibilita la efectivización de su derecho al debido proceso, respetando su identidad como sujeto en proceso de desarrollo; en sí el principio de participación es un derecho

que tiene todo adolescente infractor, consignado dentro del proceso formal, pero determinado la identidad en reserva o confidencialidad.

En consecuencia, no puede haber un proceso penal juvenil justo, si no se ha permitido al adolescente o menor infractor procesado participar, durante todas las actividades de investigación, expresándose libremente, sin tapujos y sin manipulaciones de cualquier índole por terceros, luego de haberse informado de las consecuencias de sus intervenciones y del significado de cada acto procesal desarrollado. En este aspecto se da la posibilidad también se concibe una forma de ejercer su ciudadanía diferente en el estado democrático de derecho, compatible con la debida consideración de su diferencia con respecto a los adultos, es decir a su identidad como niño y el debido proceso lo estipula de esa manera.

c) El debido proceso y el principio de no discriminación

Los Derechos Humanos son inherentes a toda persona de un Estado o Nación, sin que medie restricciones u otros, correspondiendo trato igualitario a todos sin discriminación de cualquier índole. Sin embargo, no todas las personas sujetas de derechos tienen las condiciones de utilizar los medios o mecanismos previstos en ley del mismo modo, ya que en la sociedad actual existen tabúes al respecto que contravienen lo dispuesto por los órganos en las materias referidas. La afirmación de esta proposición, implica que las leyes, normas propias de un Estado y demás dados mediante los Tratados Internacionales que hacen hincapié en la igualdad, no aseguran que estas se cumplan como explica la norma u otro referente a que sea imparcial e igualitario para todos; no debiendo cegarnos ante lo contradictorio, ni mucho menos tratar a toda persona como si están fueran iguales y tuvieran las mismas prerrogativas, pues hacer eso conllevaría a que se cometa uno de los peores actos discriminatorios e impediríamos el respeto de la autentica igualdad que se observa en forma subjetiva y medida la cual no se hace referencia en la ley, si no cuando se ajusta la inherencia y ejecución de sus derechos a las diferentes

especificidades que tiene cada persona o sujeto, comparamos las diferencias

El brío de los Derechos Humanos es la consideración especial que otorga a cualquier ser humano inverte persona la igualdad es todo aspecto: ante la ley, dentro de las relaciones sociales, acceso a servicios, etc., es decir confrontamos desigualdades, por medio de este reconocimiento una persona ejerce ese derecho fundamental de la no discriminación.

En el proceso penal Juvenil, si bien tanto el agraviado como el procesado, tienen el mismo derecho al debido proceso, ambos no se encuentran en las mismas condiciones de exigir el respeto irrestricto de las garantías que permiten su observancia. Al reconocer que el derecho al debido proceso es un derecho humano específico del adolescente procesado, se reconoce la especial posición que tiene y las condiciones en las que se encuentra para el ejercicio de sus derechos, lo cual implica una intervención discriminatoria positiva de parte de la administración de justicia, a fin de impedir que las diferencias existentes entre él y los demás sujetos procesales influyan en el logro de la finalidad del proceso judicial: resolver el conflicto social y sancionar al responsable.

El principio de igualdad ante la Ley y el principio de no discriminación, se encuentran íntimamente ligados, en la medida que no se puede lograr la igualdad si no respeta el principio de no discriminación, el cual obliga a los estados, tanto en su poderes ejecutivo, judicial como legislativo, además de respetar el ejercicio irrestricto de todos los derechos consagrados en la Convención, la realización de acciones afirmativas o medidas activas para disminuir o eliminar las condiciones que causan o perpetúan la discriminación.

En el proceso penal juvenil, el logro de la igualdad por medio del ejercicio de los derechos humanos específicos y el principio de no discriminación, es fundamental en la observancia del debido proceso; pues, la situación de igualdad de las partes a lo largo de todo el

proceso es a su vez, requisito indispensable para que la contradicción de posiciones, elemento del derecho de defensa y por ende del debido proceso, sea efectiva. Contradicción supone que las partes sean oídas en cada actuación procesal, de modo que no se resuelva sobre lo alegado por una de las partes sin haber tenido en cuenta la contradicción de la otra o darle la posibilidad de ejercerla. Pues, habrá contradicción en la medida que el adolescente además de conocer los cargos que forman parte de la imputación penal con la debida antelación; pueda ejercer su derecho de defensa con “igualdad de condiciones”, o en “igualdad procesal”, implica necesariamente que los operadores de justicia penal juvenil deben realizar acciones afirmativas en beneficio del adolescente, activas para disminuir o eliminar las condiciones que causan o perpetúan la discriminación.

Muchos tratadistas y jurisprudentes concuerdan que las normas que regulan el proceso penal juvenil vigente, se puede concluir que preliminarmente que éstas no posibilitan la contradicción en igualdad de condiciones; consecuentemente, no favorecen la observancia del debido proceso, pues a pesar de que enumeran los principios del proceso penal de adultos que le son aplicables, no establecen reglas que adecuen el ejercicio de los derechos y los principios procesales a las especial condición de los sujetos procesales.

d) El debido proceso y el principio de supervivencia y desarrollo

En todos los derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos se encuentra una finalidad común: asegurar el desarrollo integral del niño. El derecho al desarrollo integral se ha convertido en un principio de la convención cuyo objetivo final es el efectivo cumplimiento de todos sus derechos consagrados, en la máxima medida posible. El conseguir alcanzar el máximo de las potencialidades del niño por medio de la satisfacción de sus necesidades básicas se ha convertido en la plataforma de lucha política de muchos gobiernos: salud, educación, nutrición; han sido variables útiles para medir el nivel de calidad de vida en términos cuantitativos: índice de mortalidad infantil, deserción escolar, control de enfermedades, niveles de nutrición etc., se han convertido en uno de

los temas más frecuentes del discurso social, y no es difícil encontrar coincidencias en la sociedad cuando se trata de satisfacer las necesidades de los niños, y señalar con valentía que la sociedad debe satisfacer sus necesidades, incluso hasta con una perspectiva asistencialista. De esta necesidad y derecho dentro de las políticas sociales cada gobierno va incrementando este cuidado, incluso otorgándole a ministerios competente esta atención hacia el menor consagrado en la Convención.

Lo difícil que es hablar de la justicia penal juvenil y de las garantías judiciales, especialmente del debido proceso, pues no las conectamos con los demás derechos consagrados en la Convención. Pareciera como si se estuviera refiriendo a niños distintos, unas víctimas y otros delincuentes.

No obstante, que el derecho a la supervivencia y al desarrollo lo tienen todos los niños, todos los adolescentes, las víctimas y los delincuentes es decir cualquier persona, niño o adolescente, respecto a los principios de supervivencia y desarrollo dentro sociedad democrática aparte de ser un derecho surge como consecuencia de las relaciones dentro de la sociedad amparado y favorecidos por las leyes del Estado, partiendo de la familia quien en principio vela por supervivencia y desarrollo brindándole derecho a la vida, a una identidad, salud, vivienda, vestimenta y educación. Respetar el derecho humano específico al debido proceso de éstos últimos es el primer paso para conseguir que su proyecto de vida y su desarrollo no se trunquen, cualquier acto jurídico teniendo en consideración los principios de desarrollo y supervivencia insta a respetar ese derecho atribuido como la filosofía de vida que a la postre será un ciudadano de bien. Respetar sus derechos dentro del proceso, es comenzar a tratar a los adolescentes en conflicto con la ley penal, como alguien cuyo futuro nos importa. Es entender el daño que representa en su vida el simple sometimiento al sistema penal, al sopesar la trascendencia de “cambiar la carpeta escolar” por la “silla de acusado” en el juzgado. Hay un impacto cuyas consecuencias no son perceptibles en el momento en la personalidad en fase de estructuración del adolescente que ha tenido que cambiar de roles en su vida porque se proyectan a

su futuro, obviamente una arbitrariedad al margen del debido proceso podría ocasionar frustraciones y/ o vejaciones con repercusiones psicológicas inalterables.

Es más fácil encontrar una relación del derecho de los niños a alcanzar la satisfacción de sus necesidades materiales con el derecho a la supervivencia y al desarrollo, que con derecho al debido proceso, a la hora de analizar se sobreponen las cuestiones materiales si lugar a dudas; sin embargo cuando un adolescente se encuentra con el Sistema Penal, es tan trascendente ese momento en su vida que se marca un antes y un después, generalmente el después será peor que el antes, porque el Derecho Penal ha dado suficientes muestras de su ineficacia, como para creer lo contrario. Es por ello que el máximo acento que tiene que darse en su encuentro con el Derecho Penal es garantizarse que esta experiencia no signifique el truncamiento de su “proyecto de vida”, porque la estigmatización y la experiencia negativa del encuentro puede ser tan desastrosa, llegando a significar, la “afectación y truncamiento al libre desarrollo de la personalidad, la interrupción de las acciones que (pudieran) realizar”. El reconocimiento del daño al proyecto de vida, es más integral y consistente desde una perspectiva de protección a los derechos humanos, apartándose de corrientes esencialmente patrimonialistas” en la cual adquiere pleno sentido y transcendencia la relación entre el debido proceso y el derecho al desarrollo integral. Los operadores de la justicia, en este caso, deberían poner en tela de juicio el debido proceso sustantivo, ciñéndose estrictamente al debido proceso como derecho innegable considerando el principio de desarrollo y supervivencia.

Existen distintos medios por los cuales la doctrina ha tratado de buscar alternativas para aminorar los efectos negativos del Derecho Penal. Sin duda las más importante ha sido el derecho Penal mínimo que como señala Beloff, (2005), se ha convertido en el fundamento filosófico, legal y de políticas criminal de la intervención penal juvenil y de la construcción del sistema de responsabilidad garantista, la jurisdicción especial se enmarca en el principio de legalidad, siguiendo las debidas garantías y se adoptan medidas orientadas al reparo a la víctima y

reeducación del menor infractor a la ley, relegando a casos absolutamente necesarios el internamiento. Obviamente los efectos negativos del derecho penal juvenil al aplicar las medidas coercitivas o el internamiento del menor infractor generan efectos nocivos, al respecto la autora citada observa que el derecho penal mínimo se convierte en un cimiento filosófico, legal y política criminal de la intervención y dándole garantía, jurisdicción especial, siendo legal que adoptan medidas orientadas al reparo y reeducación del adolescente.

Por otro lado, las mismas reflexiones que han cuestionado la vigencia y razón de ser del control penal formal y la crisis de la resocialización, han reconfigurado la forma de intervención punitiva. En este aspecto el Derecho Penal Juvenil ha sido la vanguardia de estos movimientos pues tanto el abolicionismo, como la desformalización o diversión sin intervención (principio de oportunidad) o diversión con intervención (remisión y justicia restaurativa) se han regulado en normas internacionales vinculantes, siendo una muestra que el Derecho Penal Juvenil tanto en la práctica como en las normas está avanzando hacia donde tendrá que transitar tarde o temprano todo el Derecho Penal. El hecho que se le sancione al menor infractor no significa que una forma de intervención correctiva, estas experiencias enriquecen y clarifican incluso las normas internacionales como una muestra de evolución en materia jurídica de derecho penal juvenil que cada vez más se va adaptando a las controversias y a la coyuntura de la sociedad.

En este sentido, la observancia de los derechos que forma parte de la garantía del debido proceso del adolescente no sólo asegura la posibilidad de su pleno desarrollo futuro, sino que lo considera en cada momento del proceso como un sujeto de derechos con un presente y con un porvenir cuya realización depende del respeto y efectividad en la realización de sus derechos presente evitando la postergación del ejercicio de sus derechos y además la interpretación abusiva de lo que más le conviene (interés superior) o lo que es mejor para su futuro (desarrollo integral).

Otro aspecto importante es la forma en la que se ha relacionado la Justicia Penal Juvenil con el derecho al desarrollo integral; en este caso ha sido básicamente por medio del llamado principio educativo, donde su justificación se encontraba en el hecho de que se castigaba para que no lo vuelva hacer y que la intervención penal tenía como objetivo hacerle reflexionar lo que había cometido. Sin embargo dentro de esta perspectiva la dimensión educativa se ha encontrado en la sanción, llámese (medidas socio educativas), olvidándose la dimensión pedagógica del proceso penal. Las acciones verificadas por todos los procedimientos procesales en materia de juzgamiento del adolescente la medida que se le aplica, tiene un carácter desarrollista por cuanto una medida coercitiva permitirá un cambio cualitativo siempre en cuando se le brinde los mecanismos adecuados.

La dimensión pedagógica del proceso penal juvenil adquiere una relevancia trascendental, pues si para algunos autores determina la diferencia entre el derecho penal de adultos y el de adolescentes, el lugar en el que se desarrolla el encuentro pedagógico es básicamente el proceso penal, pues en la etapa de la ejecución de la sanción lo pedagógico será ya el valor agregado que suma sobre la sanción, mas no su esencia. Toda decisión que tenga en cuenta su interés superior, la efectividad de sus derechos y el derecho a su desarrollo integral, no debe perder de vista la aplicación del principio educativo en el presente (debido proceso) y el futuro (derecho al desarrollo). Así, antes del proceso en la toma de una decisión sobre desjudicialización o diversión debe verificarse la necesidad de intervención en función de su porvenir a la luz de la intervención inmediata frente al hecho por parte de los mecanismos informales de control social, dentro de una perspectiva de prevención especial positiva: “se interviene para prevenir no para castigar.

De otro lado, en el caso de la judicialización el principio educativo sirve para adaptar el ejercicio concreto de los derechos que forman la garantía del debido proceso, posibilitando una experiencia formativa. A su vez, esta relación concreta del principio educativo con las garantías del debido proceso, impide su conversión en el caballo troyano de

antaoño, donde todos los males y violaciones de los derechos se hacían justificados en el desarrollo futuro del adolescente.

En consecuencia, el debido proceso y el principio de supervivencia y desarrollo son contemplados en el proceso de sometiendo a actos procesales al adolescente infractor, teniendo en cuenta que es un derecho fundamental dentro de un debido proceso brindándole protección desde un aspecto educativo hasta el cuidado de no truncar el proyecto de vida del menor.

2.2.1.8. La aplicación del principio – derecho del debido proceso en los procedimientos administrativos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alcanza la Guía sobre la aplicación del principio – Derecho del Debido proceso en los procedimientos administrativos (2013), considerando que el debido proceso constituye un principio-derecho que debe ser aplicado en sede jurisdiccional. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido que este derecho también debe ser observado en la tramitación de los procedimientos administrativos. Es decir pautas o procedimientos que deben tener todo operador de justicia a nivel nacional para hacer un proceso más práctico, ágil, justo y de celeridad; entendiéndose que el procedimiento administrativo es vigente y aplicable en cualquier institución pública que puede acceder desde un ciudadano común y corriente has los funcionarios.

En este documento se pone en énfasis la acepción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el conjunto de garantías que conforman el debido proceso debe ser observado por cualquier autoridad administrativa que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas, apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana.

Asimismo, la guía apela lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimando que el debido proceso resulta aplicable en la vía administrativa a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, tales como las sanciones administrativas o los

procedimientos propios de una instancia administrativa en el cumplimiento de sus funciones.

Como sustento legal normativo, toma en cuenta lo determinado por el Tribunal Constitucional peruano que considera que el derecho al debido proceso reconocido en el Numeral 3 del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú, no solo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al procedimiento administrativo; es decir a todo el aparato estatal constituido por instituciones de la administración pública gubernamental, las entidades, organismos, proyectos, programas cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público. El Tribunal Constitucional refiere que el fundamento principal por el cual el debido proceso resulta aplicable a los procedimientos administrativos reside en el hecho de que la Administración Pública se encuentra vinculada a la Constitución Política del Perú y, por ende, a las garantías procesales que este reconoce a las personas, a fin de velar por el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentra la protección de los derechos de la persona y su dignidad; valer decir el debido proceso tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable a la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico personal.

En síntesis. el hecho de que el debido proceso resulta aplicable a los procedimientos administrativos reside en que la administración pública tiene un ordenamiento jurídico y actúa en base a las normas que emanan desde la propia Constitución Política; en este caso debe brindar las garantías procesales de todas las personas que pueda hacer uso efectivo de sus derechos.

2.2.2. Juzgamiento de los adolescentes infractores.

En nuestra sociedad “Joven delincuente”: esta categoría social se ha constituido en el último tiempo como un fenómeno complejo que nos indica que un segmento de la juventud ha adquirido una nueva razón de ser

consecuencia de los grandes cambios socio económicos y del fenómeno de la globalización.

La clasificación de adolescente o joven ha sido entendida como una categoría social que da cuenta de un tránsito o etapa del ser humano en la que ya no se es un niño, pero en la que aún no se tiene el estatus de adulto. El mundo juvenil y el adolescente propiamente tal se constituyen como realidades que muchas veces se subentienden como conflictivas y altamente problemáticas, en desmedro de antiguas visiones históricas que consideraban al joven como sinónimo de rebeldía y lucha social; las propias desigualdades, el crecimiento social, la falta de acceso al mercado laboral, las condiciones socioeconómicas, la pérdida de valores, la corrupción reinante a toda escala, las familias disfuncionales, la falta de oportunidades quizás sean factores determinantes para el incremento de ese grupo con conductas conflictivas y sumamente problemáticas.

El alto nivel de competitividad y exitismo que muestra la sociedad moderna, sin duda imprimen en los sectores sociales más vulnerables y dependientes (como por ejemplo el sector juvenil) un elevado nivel de frustración y descontento. La moderna sociedad de control ha subvertido las viejas implicaciones de rebeldía del mundo juvenil cambiando la pasión por lo desconocido y transformador en post de lo conocido y controlable.

Debido al temor que provoca esta imagen (alimentada mediáticamente por los medios de comunicación) de estos jóvenes dispuestos a todo y que, aparentemente, no tienen nada que perder, es que se han perfeccionado las tecnologías de control social y vigilancia con respecto a este segmento de la población, lo que se ha traducido en el reforzamiento extremo de medidas de seguridad, donde la vigilancia se constituye como un factor determinante de sostenimiento del orden social. Entonces, no cabe duda de que la necesidad de vigilar y castigar ha estado asociada al miedo al “otro” desconocido. La construcción social del enigmático mundo juvenil o adolescente ha contribuido muy poco a comprender la riqueza de este período vital. Por el contrario, ha reforzado los mecanismos de represión social de este sector donde la vestimenta o el corte o color del pelo muchas veces constituyen un antecedente para ser detenido y controlado por las policías.

Así, se constata que se ha producido un asombroso despliegue con respecto a la participación del estrato adolescente o juvenil en la comisión de delitos. Al respecto, la promulgación de normas o leyes especiales, que rebajó la edad de responsabilidad penal de los adolescentes y su debido juzgamiento, nos da cuenta de cómo la sociedad evidencia a un nuevo sujeto social, a saber, un joven, condenable y castigable.

En la relación individuo-sociedad se establece una tensión entre factores profundamente personales, como roles de identidad y clasificaciones sociales o como del mundo adolescente con sus potencialidades y particularidades con las instituciones sociales que regulan y administran las formas de castigo y control social como garantes del orden social establecido. Desde esta óptica, la delincuencia no se remite necesariamente a la comisión de un delito sino a la transgresión de una norma de control. El joven delincuente encuentra a la ley como representante máximo del control social que el Estado establece o simplemente se categoriza como juzgamiento de los adolescentes infractores. En efecto una sociedad democrática permite y considera que este vasto sector tenga un especial cuidado, sin embargo al margen de la rebeldía expresada es la propia sociedad que la condena y conduce a que las expresiones rebasen el control social que establece el Estado en su afán proteccionista; en un país en crecimiento la distribución de la riqueza es inequitativa, el acceso a oportunidades es altamente competitiva y al margen de estos aspectos la propia dinámica del crecimiento económico trae consigo la delincuencia, resulta fácil captar a un grupo vulnerable a transgredir las normas sociales; y es precisamente que el Estado implemente normas o códigos para el juzgamiento de los menores infractores a fin de garantizar el bienestar colectivo.

2.2.2.1. Naturaleza jurídica de la responsabilidad penal del adolescente.

La promulgación del Código de los Niños y del Adolescente (CNA), significó un cambio de paradigma en el tratamiento legal frente a los adolescentes, con la superación de la llamada Doctrina de la situación irregular en nuestro país.

Son dos aspectos fundamentales de este cambio de perspectiva: los niños y adolescentes no son ya objetos de clemencia y de contención, sino que ya los derechos son inherentes; y en segundo lugar, en el recinto penal, se establece una normatividad exclusiva para el adolescente o menor infractor donde según a la transgresión se le impone medidas socio educativas perfectamente diferenciada del niño o adolescente en presunto estado de abandono sujeto a medidas de protección.

En este orden de ideas el joven que tiene o es mayor de doce años que realiza una acción contraria a la ley sea como autor, coautor o partícipe de un hecho sancionado tipificado como delito o falta dentro de la ley penal es propenso de medidas socioeducativas que conlleven que este pueda por la edad resocializarse y que las leyes lo protegen del mismo que el adulto en las penas.

Es decir, tanto las penas como las medidas socio educativas son la respuesta del Poder Punitivo estatal, entendido éste como la facultad del Estado de intervenir y sancionar la comisión de ilícitos y como tales, ambas encuentran su justificación en la idea que tenga el Estado sobre la finalidad de las sanciones que aplica. Este instrumento jurídico se implementa a fin de sancionar ilícitos cometido por los niños o adolescentes, siendo facultad del Estado pero en el orden de derechos y dentro de la jurisprudencia de convenios y acuerdos internacionales a más de la consideración del derecho reservado del interés superior del adolescente.

Baratta, 1995, pág. 77) sostiene que, nos encontramos en ambos casos con una intervención penal frente a una responsabilidad penal, por ser tanto la pena como la medida socio educativa: a) una respuesta a la realización culpable de una figura delictiva perpetrada por un adulto o un adolescente y b) por significar ambas una restricción de derechos y en consecuencia una sanción negativa.

En efecto el autor explicita los ilícitos deben ser sancionados por ser una responsabilidad penal, tanto la determinación de la pena como la medida

Para muchos entendidos la medida socio educativa pese al nombre distinto que se usa para diferenciarlo de la pena aplicada a los adultos no pierde su contenido esencialmente punitivo y sancionador frente a acciones que

trasgreden el ordenamiento jurídico. En el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes Ley 27337, no las define y únicamente establece que tienen por objeto la educación del adolescente en su artículo 229 y que se debe tener en cuenta en su aplicación la capacidad del adolescente para cumplirla (Art. 230).

En cambio, en la doctrina de la situación irregular, si se encuentra un concepto de medida socio educativa. Según Mendizábal Oses, (1977), son aquellas en las que la finalidad esencial no es la de penar ni la de intimidar a los menores, así como tampoco la de reprobar socialmente la conducta de quien se encuentre en situación irregular porque fundamentalmente se trata de proteger jurídicamente al menor contra el medio ambiente que nocivamente influye en su comportamiento y contra las tendencias o inclinaciones perturbadoras de su normal desarrollo personal que motivan indudables desajustes a su convivencia con los demás por ello la finalidad esencial de éstas medidas es de prepararle eficazmente para la vida. Según Mendizábal, todas las medidas que se dictan no poseen un carácter de sanción, sino tienen la finalidad de contribuir la formación y educación del infractor a cargo de personal especializado en pos de una protección integral.

El término medida socio educativa propio de la situación irregular, aún dentro de legislaciones adscritas a la doctrina de la protección integral pues ha existido una resistencia tanto en la ley como en la jurisprudencia de aceptar la naturaleza penal de la medida socio educativa.

Para Baratta, este maquillaje terminológico es muy peligroso, especialmente para los adolescentes pues va en desmedro del gran valor pedagógico que tiene el hecho de que comprendan las consecuencias que para ellos mismos tienen sus actos y su responsabilidad frente a los mismos. Por otro lado la sanción que aparece como “un bien” corre el riesgo de ser usada y abusada. No se puede castigar, independientemente de la finalidad que el castigo tenga, diciendo que se está aplicando un castigo positivo. La sanción es sanción y no hay sanción positiva. El adolescente lo debe tener en claro del mismo modo que el operador de derecho. Solamente reconociendo la naturaleza restrictiva de derechos de

la medida socio educativa se puede asegurar al adolescente tanto en el proceso como en la ejecución de las garantías de justicia que no deben ser menores sino mayores a las que goza el infractor adulto.

Según el planteamiento y análisis que alcanza el autor respecto a la terminología “medidas socioeducativas” considera demasiado expuesto frente a los hechos imputables y que el adolescente comprenda los efectos que tiene sus hechos; asimismo advierte que la sanción sea entendida en su real dimensión la acepción castigo (que se le da al que no cumple una norma establecida o tiene un comportamiento incorrecto) con la finalidad de asegurar al adolescente en el proceso como en la ejecución de medidas garantías de justicia, advirtiendo que no deben ser distintas a las impuestas a los mayores.

2.2.2.2. Culpabilidad, inimputabilidad y responsabilidad penal.

Otro elemento que genera un cambio de perspectiva, dentro de la intervención penal frente a los adolescentes es el de la evolución en la comprensión de inimputabilidad y su incidencia en la configuración de un nuevo sistema de responsabilidad, al servir del filtro o mecanismo selectivo para ser pasible de una sanción distinta a la del derecho penal de adultos.

La mayoría de las legislaciones penales tiene una norma que proclama la inimputabilidad de los niños y adolescentes. Así el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal peruano señala que se encuentra exento de responsabilidad penal el menor de dieciocho años, pues esta consignación llegó a la disconformidad del consenso implícito en acciones judiciales, so pretexto que el menor que cometía delitos se encontraba en una situación irregular y debía recibir tutela y protección del Estado.

Por no decir todas, hablamos de las legislaciones penales donde hacen referencia a los actos cometidos por personales inimputables siendo considerados estos incapaces absolutos y relativos, haciendo referencia en la norma, como así el niño y adolescente que por el hecho de tener menos de dieciocho años, se encuentra exento de responsabilidad penal no imponiéndose una pena como al adulto sino esta sujetos a infracciones y por tal debe recibir protección, cuidado por parte del Estado.

Normas como esta, plantean una paradoja y debate en el sistema jurídico de control social, toda vez que por un lado se plantea la inimputabilidad del menor de edad y por otro se reconocen sistemas de responsabilidad a los adolescentes. Aquí surgen una infinidad de cuestionamientos e interrogantes, ¿cuándo se regula normativamente que un adolescente es responsable por los ilícitos penales que comete?, ¿estamos ante una responsabilidad de naturaleza penal o nos referimos a un inimputable?, ¿Puede ser responsable penalmente un inimputable? Ciertamente el Código Penal en el artículo de la referencia ha tomado la opción legislativa de mantener la inimputabilidad dentro del marco penal y a la vez establecer un sistema de responsabilidad en cuya intervención se usan las normas procesales y penales en forma supletoria.

Esta opción de nuestra legislación no es la más adecuada, lo señalado anteriormente, se considera que el adolescente no sólo es penalmente responsable; sino que además es penalmente imputable y lo es porque, a pesar, de haberse podido comportar lícitamente, es decir, de haberse podido decidir por el derecho opta por el injusto. Dicho de otro modo, siéndole exigible una conducta distinta, al ser capaz de ser motivado de modo suficiente por la norma para comportarse conforme a derecho, actuó ilícitamente. Por lo tanto, al comprender la ilicitud de su actuar, dicho acto le es reprochable, en todo sentido, no quepa en la concepción y razón de todos que un acto reprochable sea premiada, acepción cuestionada y equívoca consignada en el derecho penal y no puede ser tratada actos irregulares y en flagrancia cometidos por los adolescentes en forma supletoria o complementaria en las decisiones judiciales.

La nota característica o la interpretación que se le asigna, es que su responsabilidad del adolescente infractor se ubica en un sistema distinto al de los adultos; pues debe responder como sujeto de derechos humanos específicos, es decir desde su específica posición dentro de la sociedad bajo protección y tutela del Estado.

El concepto normativo de culpabilidad explicitado por medio de un juicio de valor o de reproche frente a la realización de un hecho antijurídico y se

distingue tanto de las teorías de la inimputabilidad e irresponsabilidad del adolescente surgidas bajo la influencia del positivismo criminológico que motivaron las doctrinas tutelares, así como de las teorías de responsabilidad sin imputabilidad que inspiran la mayoría de opciones legislativas actuales, entre las que destaca la europea continental, por considerar que no superan la paradoja anteriormente planteada, pues pese a partir de presupuestos válidos llegan a conclusiones inválidas; es decir la existencia de pruebas imputables simplemente dejan de ser válidas dentro de la justicia procesal.

Bustos Ramírez (1998), ha significado, sin duda el punto de vista de mayor consistencia académica, dentro de esta corriente a la que se ha denominado de la paradoja o de la responsabilidad sin imputabilidad. Tal vez, la razón de su posición se encuentra en la necesidad de separar el derecho penal de adultos del derecho penal de adolescentes, sin necesidad de replantear el sistema penal, pues de otro modo, los adolescentes son penalmente responsables pero inimputables dentro del sistema penal de adultos. En este sentido el autor citado manifiesta tácitamente que un infractor adolescente no puede ser juzgado ni sentenciado en el sistema penal de adultos, toda vez que su conducta u acción que realiza dentro del ordenamiento no es reproachable ya que al tener la minoría de edad los protege, cometiendo solamente infracciones.

No obstante, es oportuno revisar la forma como llega a la conclusión precedentemente planteada. El punto de partida de Bustos es la formulación de una objeción al concepto de imputabilidad en relación a los menores de edad; por otra parte, es la formulación de una lectura crítica al concepto de imputabilidad en relación a los menores de edad en dos niveles: a) Como la capacidad de conocer la ilicitud del obrar (nivel cognitivo) y b). La capacidad de obrar conforme a ese conocimiento (nivel volitivo). Al entender desmerece la capacidad del menor de conocer la ilicitud del obrar, así como actuar acorde a esa sensatez, desde una óptica de madurez o desarrollo dentro de la política criminal.

Además, que existen dos aspectos relevantes al momento de analizar la imputabilidad de un menor de edad. En primer lugar hay que suponer que se

trata un individuo de derechos y obligaciones, igual a todas las personas, no pudiendo realizar ningún tipo de Primeramente hay que tener en cuenta que se trata de un sujeto de derechos y obligaciones, igual a todas las demás personas, no siendo posible hacer ningún tipo de diferenciación ni en razón de sus caracteres personales ni por el sector social al que pertenece o representa. En segundo lugar, desde una perspectiva político criminal debe considerarse que existen personas dentro de la sociedad cuyas necesidades no han sido satisfechas y que por lo tanto se dan respecto de ellos obstáculos que impiden o dificultan sus condiciones para su libertad e igualdad, por cuya razón la responsabilidad que les es exigida, tiene que ser distinta, porque es distinta su capacidad de respuesta la misma que se encuentra determinada por la insatisfacción de ciertas necesidades o de remover los obstáculos para su satisfacción.

En efecto habría que internalizar que por más menor que sea, es sujeto de derechos y responsabilidades, es igual a todos como persona humana, no puede tener una consideración especial; por otro lado, es innegable dentro de una sociedad ajena, personalista, sectaria existan personas cuyas parvedades no han sido satisfechas, llevando consigo dificultades para su independencia y paridad, por lo que implementa responsabilidades distintas, según su capacidad de respuesta por estar plagada de insatisfacciones, enfocadas desde una perspectiva psicológica.

De este modo, superando las posturas psicológicas llega la conclusión que son razones de política criminal las que excluyen a los adolescentes del sistema penal de adultos, las que los hacen inimputables y no las consideraciones personales y sociales. Es este sentido, sostiene que, estas razones de política criminal no los excluyen del sistema penal, sino que se les ubica en un sistema de responsabilidad distinto, al entenderse que la incompatibilidad de la respuesta (acto o hecho) del sujeto frente a la exigencia de protección de bienes jurídicos implica un juicio de exigibilidad distinto que tiene que tomar en cuenta su capacidad de responder de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades, siendo arbitrario y abusivo de parte del Estado de exigirle lo que no se le ha dado, en tanto sólo se puede responsabilizar en la medida que se le han proporcionado las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.

Es necesario implementar un sistema de política de sistema penal diferenciada, distinto para los adolescentes infractores dentro de una exigencia de protección de bienes jurídicos así como lo determinan las leyes macro y los acuerdos y convenciones internacionales de culpabilidad y responsabilidad penal del adolescente garantizando un debido proceso y ofreciendo instrumentos necesario para ejercicio de sus derechos y responsabilidades.

El aporte de Bustos a la doctrina ha sido fundamental en la construcción del consenso de que es la política criminal el criterio básico, para determinar el límite de edad a partir del cual un adolescente se considera responsable de sus actos. Asimismo, que son los criterios de política criminal los que han servido para la exclusión la imputabilidad por razones preventivo especiales, apoyadas en investigaciones que sustentan la necesidad de no someter a tratamiento carcelario a los jóvenes debido a los altos índices de reincidencia aunado a que los fines preventivo generales del derecho penal pueden ser alcanzadas por medio de sanciones de otra naturaleza que pueden ir desde la reparación del perjuicio como propugna la moderna victimología, hasta el internamiento reeducativo en períodos no muy prolongados y no cumplidos en prisión; estas sanciones serían aplicables desde los 12 años, desapareciendo debajo de este límite todo vestigio de responsabilidad, sin perjuicio de la asistencia a un tratamiento de otro tipo por medio de organismos de bienestar social. Del mismo modo son estos mismos criterios los que han logrado que algunas legislaciones eleven la edad de aplicación del internamiento a los 14 ó 15 años como es el caso del Decreto Legislativo N° 1348, nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

2.2.2.3. Adolescentes penalmente imputables y penalmente responsables

El manifestar que los menores infractores o adolescentes son penalmente inimputables por los actos que realizan pero a la vez son penalmente responsables, como los sostienen BUSTOS y BERDUGO, afirmaciones que se ubica en el ámbito normativo con criterios de política criminal.

Las premisas planteadas por Bustos, al mantener la inimputabilidad del adolescente, como criterio para incluirlo dentro de otro sistema de responsabilidad distinto al de la culpabilidad, no teniendo en cuenta que justamente la imputabilidad es el criterio básico que posibilita la atribución de la responsabilidad o la culpabilidad, termina así equiparado al enajenado mental con el adolescente al realizar una diferencia entre el derecho penal y el derecho penal criminal, señalando que los adolescente y los demás inimputables se encontrarían dentro del derecho penal pero no criminal.

Una réplica del Derecho Penal distinta a la de los adultos frente a los delitos y faltas cometidos por adolescentes, el criterio de esta repuesta no se encuentra en la consideración de su inimputabilidad, sino únicamente en un distinto juicio de exigibilidad, si bien al adolescente no se le puede exigir, sancionar por los actos cometidos como a un adulto, se le puede exigir como a un adolescente, por ser totalmente imputable y responsable de sus actos como tal. Así, le es reprochable como adolescente su comportamiento ilícito, (culpable) y por lo tanto puede ser pasible de sanciones penales o sanciones negativas que restringen el ejercicio de sus derechos como el internamiento, medidas restrictivas y otros cuando no responde a la exigencia de protección de los bienes jurídicos.

Además, que es un criterio de política criminal o autoridad jurisdiccional, el separar dos cosas: la imputabilidad del adolescente de la imputabilidad del adulto, por el criterio de distinta pretensión. En este sentido y por este mismo criterio, podemos exceptuar la acciones que realizan los menores de doce años, por considerar que el Estado y la sociedad debajo de este límite de edad no tiene nada que exigir y si todo que dar para brindar todas las garantías necesarias de derechos y obligaciones inherentes. Asimismo, al ser el límite únicamente cronológico y no motivado en un análisis diferencial del sujeto subrayamos que no es una psicológica; sino, político normativa. Es decir, es un problema resuelto por derecho, empero la política criminal precisamente de ir y centrar sus fundamentos de inimputabilidad al menor cuando se concibe y aplica el derecho penal; mas la condición de adolescente, como toda persona adulta esta sujeto con

derechos y responsabilidades, debe ser imputable y responsable de sus actos.

2.2.2.4. El adolescente eximente de responsabilidad.

Desde la antigüedad, el hombre ha conocido causas por las cuales la realización de una conducta de apariencia delictiva no es sometida a sanción penal, siendo, sin lugar a dudas, la legítima defensa y el estado de necesidad, las más sobresalientes de ellas. Muchos autores, al tratar las eximentes de responsabilidad penal, han seguido criterios diferentes en cuanto a su clasificación dogmática. Por ejemplo, los autores clásicos, Carrara y Carmignani, diferenciaban las eximentes conforme a criterios morales, es decir atendiendo al «criterio mesurativo de la inteligencia o voluntad del agente» Herrero, C. (2002: 367). Correspondían al primer grupo la edad, el sexo, la enfermedad mental, el error y la ignorancia, y al segundo la coacción, el ímpetu y la embriaguez, categorías tomadas en cuenta para liberar de responsabilidad penal a cualquier persona de actos ilícitos.

Algunos tratadistas italianos, partiendo de la diferenciación naturalística entre elementos objetivos y subjetivos del delito, dividen las eximentes en dos grupos: las que tienen su causa en la psiquis del sujeto (enfermedad mental, edad, error, etc.) y las que se originan en hechos externos (legítima defensa, estado de necesidad, etc.). Este es el criterio que siguen Alimena y Francesco de Luca quienes, en sendos estudios, clasifican las eximentes en causas de inimputabilidad y causas de justificación; es decir el hecho ilícito se justifica su carácter eximente en cuestiones psicológicas y hechos externos inmotivados que determinan acciones ilícitas.

Eugenio Florián, estudia las eximentes bajo el título de Exclusión y Modificación del Elemento Subjetivo, clasificándolas en los siguientes grupos:

1. Ausencia de los requisitos generales de la imputabilidad (edad, sordomudez, enfermedad mental, embriaguez).
2. Causas que suprimen la voluntariedad del hecho (error, coacción, el sueño y la sugestión hipnótica).

3. Causas de justificación (orden de la autoridad, legítima defensa y estado de necesidad).

El autor de manera didáctica clasifica la eximencia de responsabilidad, los mismos grupos o categorías son utilizados en el derecho penal en defensa de los imputados.

En Francia, Le Sellyer expone las eximentes sin diferenciarlas en categorías bajo el siguiente título: De los casos en que, aun cuando el hecho material exista y sea declarado existente, no hay crimen, ni delito, ni contravención, y, por consecuencia, ni imputabilidad, ni penalidad, ni siquiera, a veces, responsabilidad civil. Maurach, (1990: 159). Hecho extremo en catalogar el ilícito actuar de un adolescente frente a la responsabilidad penal.

En los países de habla hispana a partir de Silvela se acepta la división trimembre de las eximentes en causas de justificación, causas de inculpabilidad y excusas absolutorias. En los demás países hispanohablantes se conoce esta sistemática en gran parte gracias a las obras de Luis Jiménez de Asúa, quien en La ley y el Delito y en su tratado de Derecho Penal, expuso junto a cada elemento del delito su aspecto negativo: acción y ausencia de acción /hacer y no hacer), tipicidad y ausencia de tipicidad, antijuridicidad y causas de justificación, imputabilidad e inimputabilidad, culpabilidad y causas de inculpabilidad y, por último, penalidad y excusas absolutorias. Pues para que pueda considerarse delito deben cumplir los requisitos antes descritos, sino no se diría que es delito.

En la actualidad la innovación más importante en esta materia ha sido la división sistemática del error: el error de tipo se ubica en el nivel de la tipicidad en los delitos dolosos, mientras que el error de prohibición se ubica dentro de la culpabilidad.

En el lenguaje común, eximir significa “Liberar de toda culpa a una persona por hecho o acción realizada”, y en el mismo sentido suele emplearse en el lenguaje jurídico, como cuando se dice que ese individuo o investigado está libre de toda culpa penal por ser consiente de los actos que realizó

(inimputable), o cuando se dice que los autores de los delitos contra la propiedad verificados entre parientes próximos están exentos de responsabilidad criminal y sujetos.

Sin embargo, la expresión “eximentes de responsabilidad criminal”, tiene una connotación más concreta y técnica: la ausencia de las condiciones generales exigidas para hacer a una persona acreedora de una sanción penal. Es decir, técnicamente las causales de exención de responsabilidad sólo adquieren relevancia cuando pesa sobre un sujeto la incriminación de un hecho delictivo en virtud de un procedimiento legal. Así, el juez debe realizar una doble tarea de subsunción: comprobar que el hecho sea subsumible en un tipo penal y descartar que pueda subsumirse en una eximente.

¿Deben considerarse ley penal los casos previstos en el Código como eximentes de responsabilidad criminal? Para responder esta pregunta es necesario precisar qué es el Derecho Penal. Eugenio Cuello Calón, insigne penalista español, define el Derecho Penal como: “el conjunto de normas que determina los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad”. Para Luis Jiménez de Asúa: conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora”. La lista de definiciones del Derecho Penal podría hacerse interminable y sin embargo casi todas coinciden en construir el concepto de Derecho Punitivo sobre dos pilares: de un lado se encuentra el Derecho objetivo, el conjunto de normas que establecen los delitos y las penas, y, por otra parte, se hace referencia al derecho penal subjetivo, la potestad del Estado para aplicar las penas a los delincuentes, conocida como *ius puniendi* (Cerezo Mir. José 1982: 57)

Las definiciones del Derecho Punitivo que anteceden, no cabe más que negar la naturaleza penal de las eximentes. Si se mira al aspecto objetivo, deben considerarse como reglas que excluyen la aplicación de las leyes

penales, entendidas como aquellas que establecen los delitos y las penas. Desde el punto de vista subjetivo, esto es, del *ius puniendi*, las eximentes han de apreciarse como causas de extinción de la pretensión punitiva del Estado. Claro está, sólo para el caso concreto (Beristain, Antonio 1985: 456).

Sin embargo, el hecho de que las eximentes aparezcan enumeradas en el Código Penal debe interpretarse como una exigencia práctica que el legislador ha acatado juiciosamente. En efecto, al describir un delito en el tipo penal no es posible incluir en él todos los elementos necesarios para la existencia de la responsabilidad penal. Lo más recomendable, desde el punto de vista técnico, es tratar los problemas de la antijuridicidad, imputabilidad y culpabilidad en la parte general del Código, por ser comunes a todas las figuras delictivas, evitándose así la farragosa tarea de repetir una y otra vez los mismos requisitos. Por otra parte, el texto legal no dice quién es imputable, o quién actúa antijurídicamente, sino que establece quiénes son inimputables o cuáles acciones están justificadas, quedando, pues, los elementos de la responsabilidad establecidos por exclusión y la carga de la prueba sobre el que afirma.

En consecuencia, es que las limitaciones que rigen para el Derecho Penal en materia de interpretación, no son aplicables a las normas que regulan las eximentes. Por ello, se impone una reforma del Código Penal en el sentido de admitir la analogía en esta materia, como ya está establecido para las atenuantes, pues, aunque su naturaleza extra-penal lo permita.

2.2.2.5. Teoría de la Responsabilidad o del Sujeto Responsable.

La teoría del sujeto responsable trata de definir la responsabilidad de una persona cuya posición frente al Estado parte del reconocimiento de su dignidad y autonomía ética cumpliendo una función garantista que se formula como principio de culpabilidad por el hecho, conforme al cual, el autor no puede responder más allá de su mundo interior que se ha plasmado en el hecho cometido, o sea, sólo a aquello que le puede ser atribuido por dolo o culpa; es muy importante ese reconocimiento de la persona imputable frente al Estado, que parte desde su propio reconocimiento de dignidad y autonomía ética, rasgo en el que se

fundamenta la teoría de responsabilidad o sujeto responsable frente a sus actos.

La discusión de responsabilidad debe hacerse desde una persona determinada en un marco social concreto, en este caso del estado social y democrático de derecho, que es el de aquella forma de Estado que parte del reconocimiento de que el modelo genera desigualdades sociales y económicas y en un deber de nivelar las desigualdades, asume jurídica y políticamente la obligación de intervenir en procesos sociales (Bustos, J. 2012: 125-126). Claramente el autor enfatiza sobre el término responsabilidad que una persona actúa en un marco social concreto y democrático de derecho, que asume jurídica y políticamente la obligación de inmiscuirse en proceso sociales.

Los elementos determinantes de la responsabilidad se encuentra: exigibilidad sistémica, exigibilidad de la conciencia del injusto y exigibilidad de una conducta distinta. La exigibilidad sistémica o imputabilidad, guarda relación con la incompatibilidad o compatibilidad de la conciencia social de un sujeto en su actuar frente al ordenamiento jurídico, al sujeto se le podrá exigir responsabilidad en cuanto la conciencia social del sujeto convertida en acto sea incompatible con el ordenamiento; es decir, que afecte los valores aceptados hegemonícamente por la sociedad y que forman parte de la conciencia social del sujeto, de esta manera y al contrario, la inimputabilidad surgirá de la compatibilidad de la conciencia social del sujeto expresada en acto frente al ordenamiento, porque es él mismo el que acepta su diversidad y le brinda un trato desigual exento de responsabilidad criminal, subyaciendo en él el principio de igualdad. Al quedar afirmada la imputabilidad, la exigibilidad de la conciencia del injusto se tratará de que en el caso concreto sea posible exigirle la conciencia de los valores que configuren el injusto concreto, sólo se podrá plantear respecto de un sujeto concreto que haya internalizado los valores del sistema o haya tenido la posibilidad de internalizarlos. Una vez afirmada la imputabilidad y la conciencia del injusto concreto queda examinar si este sujeto social concreto está en situación de responder de sus actos en contra del derecho considerando las circunstancias concretas que lo llevaron a actuar Montecinos Gonzales, 2008: 7)

Según el autor la teoría de la responsabilidad está sujeta a la conciencia social de un sujeto de actuar frente al ordenamiento jurídico, la aceptación de valores y responder de sus actos.

2.2.2.6. Las garantías sustantivas, procesales y de ejecución del sistema de justicia penal juvenil.

La política del Estado en torno al problema de las conductas infractoras de los adolescentes no puede ser exclusivamente represiva, punitiva o coercitiva. Hoy es de casi unánime aceptación que se requiere de una política social integral y, de ser necesario como *ultima ratio legis*, dentro de ella, de una política criminal que pueda detener el avance de las infracciones a la ley penal cometidos por adolescentes.

Es evidente que en materia de niños, los países de América Latina no pueden desistir del Estado y por lo tanto de sus instrumentos de control social, esto porque como bien señalan muchos juristas y analistas políticos cualquier realización colectiva en nuestras sociedades tiene como eje al Estado. A lo sumo, lo que es exigible de éste es una presencia máxima en lo relativo a la promoción social y una presencia mínima en lo relativo al uso de la coerción; es decir desplegar políticas sociales de atención al menor y adolescente son obligaciones del Estado.

Desde esta configuración, se han dado pasos trascendentales, con el repliegue del sistema tutelar-punitivo que las legislaciones sobre menores establecieron durante más de cincuenta años, ya que con la promulgación en 1989 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, aprobada por el Perú el 3 de Agosto de 1990, mediante Resolución Legislativa N° 25278, se revierte el modelo proteccionista y lo sustituye por uno garantista en el cual el niño pasa a ser sujeto de derechos y deja de ser objeto pasivo de tutela, no obstante dentro de una concepción del principio de interés superior del adolescente.

Al adherirse a las posiciones garantistas, la Convención distingue con precisión dos ámbitos al establecer tratamientos distintos a los niños que se encuentran en abandono con los que transgreden las normas penales, separando claramente la aplicación de una política social o política criminal respectivamente, por lo que se prevé medidas socio-educativas que se gradúan judicialmente de acuerdo al grado y carácter de la ofensa, recurriendo a la medida privativa de libertad sólo para las

transgresiones de extrema gravedad; en este caso aparte de ser garantista, para a ser punitivo, pero desde un perspectiva educativa.

La imposición judicial de las medidas es uno de los requisitos más importantes de la Convención Sobre los Derechos del Niño: el establecimiento o comprobación de la responsabilidad del niño debe ser determinada a través de un proceso circundado de todas las garantías del Derecho penal sustantivo y adjetivo, el debido proceso como derecho irrestricto a la persona humana. Por eso, el asunto a los adolescentes infractores debe llevarse a cabo dentro del marco de todos los principios contenidos en el principio del debido proceso.

1. Garantías sustantivas

Comprende los siguientes principios:

A. Principio de culpabilidad

Según (Mir Puig, (1996), el término culpabilidad, tiene tanto connotaciones morales como jurídicas. En el derecho penal puede ser entendido de manera amplia oponiéndose a la noción de inocencia, y de manera más estricta como uno de los niveles de la teoría general del delito. Desde el Principio de Culpabilidad, se pueden establecer diversos límites al poder punitivo del Estado que se expresan en:

- a. **Principio de personalidad de las penas.** Nos da a entender que no se puede aplicar una pena o sanción a un individuo o sujeto por las acciones realizadas por otro; es decir manifestada que se debe imponer penas y acciones de sentencia a la misma persona que incurre el delito.
- b. **Principio de responsabilidad por el hecho.** Que postula un derecho penal de acto, debiendo sancionarse al autor de la acción o hecho por la conducta que realiza y no por sus características personales. En tal sentido, la culpabilidad rechaza el llamado Derecho Penal de Autor (Zaforonni, 1990); este principio de responsabilidad por el hecho sobrepone al mismo autor quien debe estar sujeto a sanción, no esta determinante sus peculiaridades o rasgos.
- c. **Principio de dolo o culpa.** Requiere que la persona haya deseado realizar la conducta (dolo) o al menos haya existido una inadecuada selección de los medios para

realizar una determinada acción (imprudencia, negligencia o impericia). Desde éste principio se prohíbe la responsabilidad objetiva o la responsabilidad por el resultado. Es decir este principio va en aplicación a aquellas personas o imputados que cometen engaño, la simulación, fraude. En los delitos, voluntad intencional, propósito de cometerlos; engaño que influye sobre la voluntad de otro para la celebración de aquéllos; también la infracción maliciosa en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Se podría también decir que se realiza con conocimiento y voluntad y por otro lado sin conocimiento y sin voluntad, siendo esta intencional.

d. **Principio de imputación personal.** Es necesario que el hecho pueda ser atribuido a su autor, por ello se prohíbe la responsabilidad penal de quienes no tengan condiciones psíquicas (incapaz) que le permitan motivarse por la norma penal.

El principio de culpabilidad conlleva connotaciones morales y jurídicas; uno responde al aspecto ético- moral; y, otro en lo jurídico expresado como una teoría general del delito. A su vez aún este principio está sujeto a diversos límites de personalidad de las penas, responsabilidad por el hecho, de dolo o culpa y la imputación personal, acciones coercitivas contempladas en las políticas jurídicas.

B. Principio de legalidad

Este principio exige que los delitos, las penas y las medidas de seguridad posibles de ser aplicadas a los adultos, así como las medidas para los adolescentes infractores, deben estar establecidas previamente mediante una ley formal y regular. Prohíbe el uso de la analogía y la costumbre como fuente de derecho para el caso del derecho penal. Su objetivo es la seguridad jurídica y limitar posibles arbitrariedades del poder penal estatal. A partir de este principio surge una serie de garantías. (Rodríguez Devesa & Serrano Gómez, 1994). Todo esto de acuerdo a lo prescrito.

a. Tipo penal - Tipicidad. El respeto del Principio de Legalidad exige una clara tipicidad (descrito en el Código Penal), esto es, la precisa descripción de la conducta prohibida. La determinación del tipo penal cumple dos finalidades: a) proteger bienes jurídicos; y, b) garantizar los derechos de los ciudadanos, impidiendo así arbitrariedades que puedan surgir durante la actuación policial o judicial. Además, en doctrina se le asigna las siguientes funciones:

- **De garantía;** sólo una conducta típica que establece claramente el ámbito de prohibición es compatible con el derecho a la libertad personal. El conocimiento claro del límite entre lo permitido y lo prohibido es tanto una afirmación de la libertad del individuo como un límite al poder penal del Estado.
- **De motivación;** el tipo legal sólo puede cumplir su función de protección de los bienes jurídicos mediante la motivación para la no comisión de delitos o infracciones, en tanto los hechos prohibidos están debidamente determinados. “De otro modo, el ciudadano ignorará la finalidad de la norma y desconocerá, asimismo, qué es aquello que realmente se está protegiendo” (Bustos Ramírez, 1991)

De otro lado, el Principio de Legalidad se afecta cuando el legislador recurre frecuentemente al uso de tipos penales abiertos, los cuales se limitan a describir la conducta prohibida de manera general, haciendo abuso del empleo de elementos normativos de carácter socio-cultural de contenido difuso. Ello permite que los operadores de las instituciones del sistema de control penal tengan una amplia discrecionalidad para determinar la existencia de una conducta delictiva.

b. Legalidad de las sanciones. El Principio de Legalidad no sólo comprende el principio de tipicidad, es decir la

descripción de las conductas prohibidas, sino también el de legalidad de las sanciones, que exige que las penas deben estar establecidas previamente por ley, vale decir escritas, debiendo cumplir con tres aspectos básicos:

- **La naturaleza de la pena.** Es decir, la determinación si se trata de una multa, privación de libertad, limitación de derechos, etc., que no debe quedar en manos del juzgador. Con esto nos quiere decir que lo que se impondrá al momento de emitir la resolución o pronunciamiento sobre el hecho materia de investigación será de acuerdo a lo descrito en la ley, y no por disposición o suposición del juzgador.
- **La determinación legal de su extensión o monto.** La existencia de parámetros demasiados amplios resulta incompatible con el Principio de Legalidad, pues se podría generar espacios donde se produzcan arbitrariedades. Así esto nos conlleva a tomar en cuenta que por las acciones que realiza el individuo o sujeto, debe estar debidamente establecido (descrito) en la ley así como la pena que le correspondería y no quedar a opinión o criterio de la autoridad sancionadora jurisdiccional.
- **La forma de ejecución de la sanción.** Las sanciones punitivas establecen una privación o restricción de derechos constitucionales que son inherentes a cada persona, los que sólo pueden ser limitados en virtud de una ley, y posterior sanción que pudiera acarrear pero además la misma ley debe establecer la forma en la cual se ha de cumplir la sanción ya que se especifica en esa lo que le corresponde, no debiendo quedar al libre arbitrio de la autoridad administrativa encargada del cumplimiento dicha sanción.

Este principio está expresada en la existencia de preceptos formales y regulares en un Estado de derecho jurídico, cuya

finalidad es la seguridad jurídica y circunscribir actuaciones arbitrarias de soberanía penal; según el autor respalda por una serie de cauciones precisas a fin de efectivizar el principio de la legalidad mediante la tipicidad y la legalidad de las sanciones.

C. Principio de humanidad

Mir Puig califica este principio como el que caracteriza en mayor medida el origen y evolución del contenido del sistema penal, que tiene como objetivo su humanización y el respeto por la dignidad de la persona. En mérito a este principio, una persona no debe ser sometida a penas crueles, inhumanas y degradantes.

El Principio de Humanidad se relaciona con el de proporcionalidad, en tanto debe existir relación entre la gravedad del hecho y la respuesta penal que se genera, teniéndose en cuenta la importancia relativa y comparativa de los bienes jurídicos afectados. Este principio fue recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 5.2), así como en la generalidad de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales es parte el Estado peruano.

El principio de humanidad está sustentado en el valor humano y la dignidad de las personas que dieron comienzo y evolución al sistema penal; comprendiendo este principio una persona no puede ser sometido a tratos inhumanos.

2. Garantías procesales

Las garantías procesales suponen una serie de derechos relacionados con el proceso al cual puede ser sometido una persona. En tanto la privación de libertad de los adolescentes es consecuencia de una investigación y juzgamiento judicial, las garantías con que deben contar han de ser similares a las que rigen el proceso penal para adultos.

Como indica Binder, (1995), la forma como se estructura el proceso en un ordenamiento penal brinda las pautas para entender la política criminal que asume un país, ya que la respuesta estatal frente al delito no sólo se manifiesta en la sanción, sino también, y a veces primordialmente, en la estructura del proceso.

El autor citado, expresa al entender sobre las garantías procesales, a la forma de cómo un país estructura un ordenamiento penal cuya respuesta frente a un delito no está en el fin, sino en la estructura del proceso.

En el ordenamiento procesal para adolescentes infractores se evidencia una tendencia a incorporar los principios que rigen la Doctrina de la Protección Integral recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como la prohibición de la detención arbitraria o ilegal, acceso a la asistencia jurídica, celeridad procesal y acceso a la doble instancia, en este caso los operadores de justicia deben actuar dentro de las garantías procesales que brinda la Convención que postula a una protección integral del adolescente siguiendo una estructura de proceso contemplados en el sistema penal juvenil. Las garantías procesales comprenden los siguientes principios:

A. Principio de jurisdiccionalidad

La normatividad internacional reconoce el derecho del adolescente infractor a ser juzgado por una magistratura especializada que debe reunir las características esenciales de toda jurisdicción: juez natural (o competente), independiente e imparcial. En este caso este principio está orientado a que un adolescentes debe ser juzgado por operadores judiciales probos, sui generis, ad hoc, que se consideran especializados en la materia, sumados por su carácter independiente e imparcialidad.

Respecto, este principio Hernández Alarcón, en su Tesis “El debido proceso y la justicia penal juvenil”, aborda y explicita con mayores argumentos y apelando tratadistas, que Según Maier, para ello existen algunas previsiones: independencia de todo poder externo, imparcialidad y Principio del Juez Natural, elementos considerados por Faúndez como condiciones previas relativas al tribunal, en tanto no tienen que ver directamente con el proceso, sino que son condiciones indispensables con las que debe contar todo tribunal, sin las cuales no es posible esperar decisiones justas. Las condiciones que señalan los autores aludidos prácticamente se centran en el juez natural, especializado en derecho penal juvenil, es decir en un contexto sobre el que se ejerce el poder de la jurisprudencia; la independencia, la imparcialidad son considerados condiciones relativas, pero las debe tener presente para dictámenes justas; a más de estos elementos serán necesarias desplegar la especial protección se explica por el derecho en juego durante el proceso penal: la libertad individual (cuando no la vida o la propiedad), en tanto toda limitación a este derecho debe realizarse mediante un proceso que responda a un supuesto expresamente señalado por la ley (Principio de Legalidad), que haya sido adecuadamente probado sin duda alguna (Presunción de Inocencia), por un ente justo y imparcial (independencia e imparcialidad del magistrado y Principio del Juez Natural) y que goce de todas las garantías procesales reconocidas e inherentes a toda persona humana (Debido Proceso).

a. **Independencia.** Del Poder Judicial y de los magistrados, de cualquier poder externo que pueda influir en la consideración del proceso. Comprende dos aspectos:

- La independencia institucional o colectiva del Poder Judicial respecto a su relación con los demás órganos del Estado. Constituye una característica básica de todo Poder Judicial, que tiene su origen en la teoría de la división de poderes. Los tribunales en su labor

jurisdiccional no deben estar supeditados a los designios de otros poderes del Estado.

- La independencia personal del tribunal y su autonomía frente a la propia estructura judicial. La independencia más que un atributo consustancial de la organización del Poder Judicial, es un atributo de cada magistrado, tanto frente a poderes externos al Poder Judicial como frente a las demás instancias de éste.
- b. **Imparcialidad.** La autoridad que conoce la causa, proceso o investigación y concluye sobre el asunto no debe anticipar subjetivamente su decisión, posterior estas sean prejuzgadas.
- c. **Competencia.** La autoridad que tenga causa y conocimiento del proceso debe ser el señalado por la ley, evitándose la expedición a tribunales que no tengan competencia antes de la realización de los hechos que se han de juzgar. Maier señala como una forma de asegurar la independencia e imparcialidad del tribunal, el evitar que sea creado o elegido por alguna autoridad luego de que el hecho a ser juzgado ya se haya realizado. Cualquier cambio en la competencia de los tribunales no debe afectar los procesos ya iniciados, en tanto sería una forma de burlar este principio.

Finalmente, el principio de jurisdiccionalidad está supeditado por la independencia del Poder Judicial, comprendida dentro de la división de poderes del Estado e independencia de su propio personal que forma el tribunal; asimismo es muy relevante la actuación del magistrado autónomo cuya competencia responda también a los arreglos de ley.

B. Principio de contradictorio

Una característica que debe tener todo proceso penal es el equilibrio e igualdad de las partes. Para ello se requiere de:

- La existencia de una imputación; que significa que el ente acusador indique claramente el hecho del que se acusa al adolescente;

- La realización de una intimación; es decir, que la imputación sea comunicada oportunamente para poder desarrollar su defensa; y,
- La celebración de una audiencia; donde puedan contraponerse las argumentaciones de la parte acusadora y de la defensa.

Es especialmente importante que la asignación de los roles principales (defensa, acusación y juzgamiento) sean formuladas a entes distintos, evitándose la concentración de funciones. También, que el proceso debe ser dividido en dos fases, la investigación y el juzgamiento, cada una de ellas a cargo de distintos órganos. Es imprescindible para el respeto de este principio, relacionado en este aspecto con el de la imparcialidad del juzgador, que en el proceso el magistrado que sentencie sea distinto a quien investigó.

Este principio contradictorio tendrá vigencia siempre en cuando contenga los aspectos básicos en un proceso de juzgamiento de adolescentes (imputación, comunicación o intimación y la audiencia), a esto se suma la pesquisa y el juzgamiento, pero desarrollado por distintas autoridades pero que sean competentes en el proceso, que aunado se imponga siempre lo justo e imparcial objetivamente.

En el mismo sentido, (San Martín Castro, 1999) menciona como aspectos esenciales del Principio Acusatorio lo siguiente:

- El ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al juez y la necesidad de la acción pública. La concentración de funciones de investigación y funcionamiento afecta tanto el Principio del Contradictorio como la imparcialidad del juzgador.
- La división del proceso en dos fases (investigación y juzgamiento), con tareas específicas cada una de ellas y

bajo la responsabilidad de órganos diferentes (prohibición de identidad entre instructor y decisor). Esta dualidad de las fases del proceso obliga a que si la primera ha estado dirigida por un juez, sea uno distinto el magistrado de la etapa de juzgamiento, evitando prejuicios que son casi inevitables cuando se ha realizado la labor de investigación.

La acción garantista de este proceso conforme lo señala el autor, está en la intervención y / o participación de distintos órganos en el juzgamiento de los adolescentes.

C. Principio de inviolabilidad de la defensa

El Derecho a la Defensa constituye la posibilidad efectiva del imputado a defenderse de los cargos formulados en su contra; es decir hacer uno de un conjunto de actos encaminados a salvaguardar los intereses legítimos comprendidos en un proceso. Este principio implica:

- Conocer los cargos que se le imputan;
- Tener la oportunidad para rebatirlos ante el tribunal;
- Poder presentar pruebas;
- Poder confrontar las presentadas en su contra; y,
- Contar con la asistencia de un abogado.

Gimeno Sendra (1988), define este principio como “el derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le puede atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de la postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional del ciudadano.

La aseveración postulada por el autor implica que el principio de inviolabilidad de la defensa constituye un derecho constitucional, como tal toda persona o adolescente para

contrarrestar la acción coercitiva del proceso será necesaria garantizar con participación o asistencia de un personal técnico, es este caso de un abogado defensor, solo así se garantiza el debido proceso.

Carocca Pérez, (1998), diferencia dos aspectos de este derecho:

- **Defensa material.** Derecho del investigado hacer prevalecer por los medios necesarios su protección ante la autoridad jurisdiccional.
- **Defensa técnica.** Derecho a contar en todo momento y circunstancia que dure el proceso investigación y decisión final de un abogado que le permita una protección adecuada de sus derechos (incluye el deber del Estado de proporcionar asistencia legal en caso que la persona no pueda acceder a un abogado). Ello complementa la capacidad del imputado de hallarse presente en el juicio, ya que en materia procesal penal el Derecho de Defensa carece de sentido sin la asistencia jurídica, en tanto el desconocimiento de sus derechos o de la forma de hacerlos valer impide a la persona ejercitar una defensa adecuada.

El autor señala las condiciones básicas del cumplimiento de este principio diferenciando dos aspectos importantes que se deben consignar en un proceso la defensa material asumida por el infractor y la técnica, mediante la participación del abogado, complementando lo imprescindible: concurrencia del imputado en el juzgamiento.

Para que la defensa sea posible es necesario que exista celeridad de los cargos; Velez Mariconde indica que deben existir requisitos para la comunicación de los cargos y se le imputan a la persona así:

- Concreta; el juez o autoridad correspondiente debe comunicar al investigado y/o imputado el hecho atribuido al acto realizado por este, no bastando señalar el tipo penal;

- Expresa; no implícita, se debe indicar todo referido al tiempo y espacio y otros, con lo cual se hace conocer lo concurrido;
- Clara y precisa; sin imprecisiones debiendo ser esta clara;
- Integral o completa; sin ocultar ninguna circunstancia jurídicamente relevante que aparezca de los actos iniciales o de la acusación, con la finalidad que se puedan oponer oportunamente los medios de defensa; y,
- Oportuna; hecha en tiempo para que el imputado tenga oportunidad para ejercer su Derecho de Defensa.

Asimismo, Velez Mariconde enfatiza para que la celeridad sea garantizada, en el proceso de comunicación debe tener requisitos de parte del juez, es decir un desarrollo comunicativo coherente, preciso, oportuno y completo

El Derecho de Defensa se relaciona también con poder acceder a las pruebas de la parte acusadora, es decir, examinar (por sí mismo o por intermedio de su abogado) las pruebas o documentación acumuladas, para poder impugnarlas o usar a favor suyo en el proceso (un aspecto fundamental es la posibilidad de interrogar a los testigos presentados por la parte acusadora). Asimismo, que las pruebas presentadas no sean descalificadas injustificadamente, poder lograr la comparecencia y careo de testigos y peritos, incorporar documentos, informes u otros datos pertinentes y lograr la información que éstos pueden proporcionar; el derecho a no declarar contra sí mismo, conforme lo especifica la ley, ni familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y la prohibición de torturas y malos tratos (la declaración obtenida por medios represivos es nula). Por ello ninguna persona que está siendo investigada puede ser interrogada sin la presencia del magistrado o de su abogado defensor.

Es muy importante que el derecho a la defensa se desarrolle dentro de los cánones regulares del derecho cumpliendo con

todos los procedimientos, será necesaria la parte educativa y la asistencia técnica que le brinde la adolescente infractor.

También respecto al Derecho de Defensa, en doctrina se señalan tres aspectos importantes:

- La igualdad de armas. Que busca evitar un desequilibrio entre las partes, que puede llevar a que la defensa sea ilusoria. Ello responde a la idea de la contradicción, la existencia de dos partes que defienden intereses contrapuestos, para lo que debe haber un acceso al proceso en igualdad de condiciones.
- Derecho a contar con un intérprete. Indispensable como medio para la defensa, para que la persona conozca lo que se dice en el tribunal, así como el contenido de los documentos o pruebas que existan. Se busca que conozca y comprenda los argumentos de la parte acusadora y también que pueda presentar los argumentos de su defensa. El desconocimiento del idioma afecta el principio de igualdad de armas al colocarlo en una situación desventajosa.
- Prohibición de reformatio in peius. Rechazo de la posibilidad que al decidirse sobre un recurso planteado por el imputado contra de una resolución durante el proceso, el tribunal pueda reformarla en su contra, sin que ello se derive de la impugnación planteada por alguna de las partes y haya sido objeto de debate durante la tramitación del recurso.

Finalmente, el principio de inviolabilidad de la defensa cobrará relevancia explícita de aspectos en el desarrollo del proceso de juzgamiento el equilibrio en la imputación y defensa; el acceder a un intérprete y la capacidad de rebatir y/ o la presentación de recurso en contra las decisiones inmediatas.

D. Principio de presunción de inocencia

Es un derecho subjetivo en favor del inculpado ser considerado inocente, en tanto no se presente una prueba suficiente que destruya dicha presunción; es decir mientras no haya un adecuado proceso y recibido una medida el imputado presume de inocencia. En este contexto se puede decir que mientras no se demuestre lo contrario en un hecho o investigación determinada, toda persona es inocente de todo lo que pueda ser imputada.

El tratadista de derecho Maier (1991) en “La víctima y el sistema penal”, plantea tres expresiones del Principio de Presunción de Inocencia:

- **Indubio pro reo.** La presunción beneficia al inculpado, siendo la parte acusadora quien busca destruirla en el proceso. Para una sentencia condenatoria es necesario que la presunción sea completamente eliminada mediante una certeza absoluta sobre la culpabilidad. La presunción se manifiesta tanto al momento de sentenciar como durante el proceso, donde la persona no puede ser tratada como culpable. Ello se vincula con el carácter excepcional que deben tener las medidas de coerción durante el proceso, que como la detención preventiva, en la práctica se convierten en verdaderas condenas anticipadas. En orden de ideas la duda favorece al imputado.

Las situaciones de sospecha o conjetura sobre actos ilícitos constituyen pruebas de la parte acusatoria; esta presunción en casos de sentencia que la ley refuta cierto, tiene que ser eliminada; en efecto, en los procesos penales sea la acusación quien deba probar la responsabilidad penal del inculpado, caso contrario el inculpado no puede ser tratado como culpable se da la presunción de inocencia.

- **Onus probandi.** La carga de la prueba recae sobre el acusador. Las presunciones legales de culpabilidad son contrarias a este principio, así como la amplitud del criterio judicial o las sentencias no fundamentadas debidamente.
- **Trato de inocente.** El imputado goza de un estado de inocencia, que restringe las limitaciones de sus derechos durante el proceso al mínimo indispensable y sólo para el cumplimiento de los fines del proceso. Es decir que un imputado es catalogado como inocente, siendo reducido los derechos.

La presunción de inocencia como principio limita las medidas preventivas de coerción, especialmente la prisión preventiva, la cual debe ser una excepción a la libertad en razón del interés del proceso.

Por su parte la libertad provisional debe ser también un beneficio que debe proceder sobre un régimen de prisión preventiva. Por otro lado el autor al señalar las expresiones de manifestación del principio de inocencia clarifica el entendiendo sobre el particular: toda presunción favorece al inculcado, la prueba contundente y el tratado que recibe durante el proceso de mantenerse inocente.

En cuanto a la prisión preventiva, sólo debe proceder en los casos en que existan:

- Elementos que permitan afirmar la posibilidad de la responsabilidad del inculcado. No se requiere de pruebas sobre la responsabilidad del procesado, pero sí de indicios ciertos sobre la misma. La limitación de la libertad únicamente procede cuando exista esta probabilidad.
- Peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso por el inculcado. A fin de asegurar su presencia en el proceso o la ejecución de la sentencia.
- Necesidad de la medida. Los dos anteriores requisitos pueden no sólo originar la prisión preventiva, sino otras

medidas coercitivas personales o reales, con que se puede garantizar el proceso.

Aun cuando la detención preventiva esté adecuadamente fundamentada, no debe exceder de un plazo razonable. La prolongación excesiva es una contradicción con el Principio de Presunción de Inocencia. El principio de proporcionalidad limita la duración de la detención preventiva, teniendo en cuenta la pena probable para el delito que se le imputa. En el ámbito internacional se han establecido dos sistemas para asegurar esta proporcionalidad: límites temporales objetivos; y el reconocimiento del principio de proporcionalidad. Afortunadamente, el nuevo Código de los Niños y Adolescentes establecen en su artículo 209º que el internamiento preventivo, que debe de ser motivado debidamente, sólo puede decretarse en tanto existan:

- **Prueba suficiente.** Elementos objetivos que relacionen al adolescente o menor infractor como autor o probatorios que vinculen al adolescente como autor o coautor de la comisión de la infracción.
- **Peligro procesal.** Se da en el sentido de que en el transcurso de la investigación estas pueden ser destruidas o poner obstáculos para no poder obtenerlas o conseguirlas y de este modo se dilate el proceso.

Dentro de este principio es necesario colisionar con la detención preventiva del imputado en razón a elementos contundentes que atribuyan la culpabilidad, el peligro a la evasión y aplicación de la medida; sin embargo revitaliza a estos postulados el Código de los Niños y de los Adolescentes la prueba suficiente y el peligro procesal.

E. Principio de impugnación

Faundez Ledesma, Héctor, citado por (Delgado Llano, 2008) sostiene que, las razones para consagrar este derecho se

sustentan en la posibilidad de que el tribunal que sentenció pueda haber cometido un error, brindándose una forma de control hacia el tribunal inferior. La evaluación que realiza el tribunal superior, comprende los aspectos de hecho y derecho, así como la condena y la pena misma. En efecto, cuando las instrucciones y medidas de sentencia son arbitrarias y con vicios procesales, el recurso contra la sentencia es una garantía procesal del condenado dentro del debido proceso; vale decir la impugnación para una revisión del tribunal superior.

Sobre el particular, en su artículo 186º, el Código de los Niños y Adolescentes en concordancia con lo establecido en el artículo 37º, inciso d) de la Convención sobre los Derechos del Niño, faculta a los niños y adolescentes a impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y ejercer la acción de Hábeas Corpus.

Además, el nuevo Código ha introducido como una saludable novedad, el derecho del adolescente de poder apelar también el internamiento preventivo (artículo 210º), estableciendo un plazo máximo de 48 horas para que la Sala resuelva la impugnación.

Finalmente, el artículo 219º del Código de los Niños y Adolescentes dispone que el adolescente, sus padres o responsables, el abogado defensor, la parte agraviada y el fiscal, puedan también apelar la sentencia.

El cumplimiento de este principio de impugnación esta respaldada con la normatividad pertinente, otorgándole al menor imputado utilizar este derecho del debido proceso, salvo algunas acepciones que los limita.

F. Principio de legalidad del proceso

Este principio se entiende como la necesidad de que el procedimiento debe estar fijado por la ley, evitándose una excesiva discrecionalidad por parte del órgano jurisdiccional en

el mismo. Lo óptimo debería ser que se trate de una ágil investigación previa, seguida de un proceso oral, con una única audiencia, para así poder cumplir los principios de oralidad, concentración e inmediación, propios del proceso penal; es decir entender este principio parte de la celeridad, prontitud y agilidad en el cumplimiento de proceso de juzgamiento. Es decir este principio se da en el orden de transparencia en los procesos y también asociada a la moralidad que se imprime en los actos jurídicos de parte de los operadores de la ley.

También, acorde con la doctrina procesal penal más reciente, debe otorgarse la posibilidad al fiscal o al juez de suspender el proceso o la medida de internamiento en caso de que ello signifique un mayor beneficio para el adolescente, no exista sentido alguno para la aplicación del internamiento o su aplicación origine un mayor daño. Además deja entender que, todos los procedimientos deben desarrollarse dentro de los derechos establecidos en el juzgamiento de imputado.

G. Principio de publicidad del proceso

Es una característica central de todo proceso penal, como lo reconocen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Constituyéndose en una garantía fundamental del juicio por ser una de las formas en la cual la ciudadanía puede controlar y evaluar el desempeño de los magistrados. En los procesos judiciales de acuerdo a este principio, la comunidad debe acceder a fiscalizar y evaluar las funciones propias del cargo de los administradores de justicia. No basta que la sentencia sea pública, sino que todo el proceso lo sea, para que el público pueda participar en él y observarlo. Se entiende este principio en dos niveles:

- Como la posibilidad de acceso a los actuados judiciales por los sujetos procesales (el procesado, los agraviados y los abogados defensores); y,

- Como el derecho de los ciudadanos a conocer el desarrollo de los procesos.

El principio de publicidad del proceso que es garantía fundamental del juicio brindada a sociedad para la información y con fines de controlar y evaluar desempeños de los magistrados, bajo un enfoque de resultados y cumplimiento de procedimientos administrativos. Sin embargo, este principio también contiene limitaciones, especialmente respecto al acceso del público al proceso. Así, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8º párrafo 5) autoriza la exclusión de publicidad cuando ésta afecte los intereses de la justicia, mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14º, párrafo 1) señala una excepción a la publicidad, respecto a la prensa y el público, por motivos morales, orden público o seguridad nacional, privacidad de las partes o la afectación de los intereses de la justicia. Las sentencias son públicas y deberían ser así conforme explicita este principio jurídico.

3. Garantías de ejecución

La ejecución de las medidas socioeducativas constituye un aspecto trascendente en el marco del Sistema Penal Juvenil. Sin embargo, como en el caso de los adultos, tiene limitado desarrollo legislativo y doctrinario. De manera general, se puede afirmar que en la fase de la ejecución debe tenerse presente la vigencia de principios que garanticen su adecuación a los estándares fijados por los instrumentos internacionales.

La responsabilidad penal del adolescente es diferente a la del adulto, por lo que las medidas aplicables no tienen la misma finalidad, aunque hay semejanzas en que necesariamente son coercitivas. En el caso del adolescente, más que el fin represivo o retributivo, que no se encuentra ausente en el derecho penal de adultos, se incide en la finalidad de crear una conciencia de la

responsabilidad de sus actos (Tiffer Sotomayor, Carlos. Pág. 107). Anota, según el artículo 40º, inciso 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, toda intervención debe estar basada en el respeto a la dignidad del niño, evitándose toda forma de degradación o sometimiento, buscando fortalecer el respeto de sus derechos y libertades, teniendo como objetivo promover su integración. En el caso de los adolescentes infractores, resulta imperativo resaltar el considerable contenido educativo que debe tener la ejecución de las medidas socioeducativas, conforme los dispone los acuerdos y las mismas leyes internas que deben estar a cargo de personas especializadas.

Al respecto, el nuevo Código de los Niños y Adolescentes establece una variación terminológica respecto a la finalidad de las medidas socio-educativas. En el Código anterior se estableció, en concordancia con la Convención, que estas medidas tenían por objeto la educación del adolescente (artículo 240º). En tanto, el vigente Código señala que el Sistema de Justicia del Adolescente Infractor se orienta a su rehabilitación y a encaminarlo hacia su bienestar (artículo 191º), concepto que se reitera luego cuando se indica que las medidas socio-educativas tienen por objeto la rehabilitación del adolescente (artículo 229º).

La modificación no ha sido la más conveniente, por cuanto el empleo de la expresión “rehabilitación”, que es regularmente utilizada para referirse al tratamiento aplicable a los adultos, ha sido cuestionada desde diversos sectores por el fracaso de las “teorías del re” y por su alto contenido positivista.

Ahora bien, el artículo 217º del Código de los Niños y Adolescentes, establece las siguientes medidas socioeducativas:

- Amonestación.
- Prestación de servicios a la comunidad.
- Libertad asistida.
- Libertad restringida
- Internación en establecimiento para tratamiento.

El nuevo Código ha reformulado el sistema de medidas socioeducativas que contenía el Código de 1993 en tres aspectos. En primer lugar, excluye como medida socioeducativa la protección, que es reservada únicamente para el caso de infracciones cometidas por un niño. En este supuesto, las medidas de protección (artículo 242º, de la Ley 27337 Código de los Niños y Adolescentes) son:

- Cuidado en el propio hogar, orientándose a los padres o responsables para el cumplimiento de sus obligaciones, teniendo el apoyo y seguimiento temporal de Instituciones de defensa;
- Participación en un programa oficial o comunitario de defensa con atención educativa, de salud y social;
- Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar;
- Atención integral en un establecimiento de protección especial debidamente acreditado; y
- Dar en adopción al niño o adolescente, previa declaración del estado de abandono expedida por el juez especializado.

En segundo lugar, el resarcimiento, que también era considerado como una medida socioeducativa, pasa a ser, como corresponde, un componente de la sentencia condenatoria por mandato del inciso d) del artículo 216º, que establece que la sentencia debe establecer la reparación civil correspondiente.

En tercer lugar, la figura de la semilibertad ya no es más una medida socioeducativa sino un beneficio conforme el artículo 241º, que se concede luego de haber cumplido las dos terceras partes de la medida de internación. De esta manera se permite al adolescente realizar una actividad laboral o educativa fuera del Centro Juvenil, como una forma previa a su externamiento. Existe una ausencia de criterios que limiten la aplicación de las medidas socio-educativas, y lo mismo sucede en el control de su ejecución,

lo que constituye una deficiencia legislativa que incide, básicamente, en la carencia de garantías para la ejecución de las medidas.

Tal como acertadamente nos recuerda (Cillero, 1997: 513), en el caso de los niños (o adolescentes) la Doctrina de la Protección Integral reconoce que es necesario asumir el carácter de privación de libertad de la medida de internación, y como tal es necesario regularla con un conjunto de garantías. Lamentablemente, los mecanismos de control de la ejecución de esta medida se encuentran insuficientemente desarrollados.

Una de las más graves afectaciones al Sistema Penal Juvenil fue la expedición del Decreto Legislativo N° 895, Ley contra el Terrorismo Especial, que en materia de ejecución ha significado la vulneración de todo el conjunto de principios, no sólo por disponer el internamiento del adolescente en un penal para adultos, sino por someterlos a un régimen penitenciario especial de máxima seguridad. No obstante en el Código Responsabilidad Penal de Adolescentes que aprueba el decreto Legislativo N° 1348, son tratados ampliamente en la Sección VIII.

2.2.2.7. ¿Por qué se establecen a las adolescentes medidas socioeducativas y no penas?

El concepto de medida socio-educativas se basa en la idea de que el sistema penal de adultos es altamente violento y criminalizaría a los adolescentes infractores.

En nuestro sistema jurídico, el concepto de las penas estigmatiza a las personas y las etiqueta como delincuentes para el resto de sus días. De ahí que se los separe de adultos, que la privación de libertad sea excepcional y que se impongan medidas socioeducativas; cuya finalidad de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1348, artículo 150 (numerales 150.1. y 150.2.) indica que: “Las medidas socioeducativas deben contener una función pedagógica positiva y formativa, con el propósito de facilitar la

resocialización y reintegración a la sociedad. En la elección y determinación de la medida socioeducativa se debe priorizar la que pueda tener un mayor impacto educativo sobre los derechos de los adolescentes y la que contribuya de mejor manera a su reintegración. Los derechos a la educación y formación profesional, así como los de salud de los adolescentes no pueden ser limitados o suspendidos en la ejecución de la medida socioeducativa”.

Los subnumerales del artículo 150; cuando señala que las medidas socioeducativas tienen una finalidad exclusivamente educativa, socializadora para adolescentes que están en conflicto con la ley, asentada en el respecto de los derechos y libertades fundamentales que la ley les reconozca; el principio pedagógico, no precisamente se refiere el acceso a una educación formal, sino que los contenidos que deben expresarse en todo momento y las respuestas al hecho punible cometido por los adolescentes, implementando un proceso constante de espacios del desarrollo y despliegue de las múltiples potencialidades; es decir brindarle capacitaciones, otorgarle asistencia profesional para la realización de la vida existencial y preparación para sus horizontes, permitiendo la cristalización de un proyecto de vida. .

En consecuencia, se persigue integrar al adolescente a la sociedad, reparar el daño causado y que el adolescente tenga conciencia de sus actos. Se establecen una serie de medidas antes de aplicar la privación de la libertad, como la amonestación, la imposición de reglas de conducta, la orientación y el apoyo familiar, la reparación del daño causado, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, el internamiento domiciliario, el internamiento de fin de semana, el internamiento de semi-libertad y, excepcionalmente, el internamiento institucional.

Alvarado, Hugo (2010), las medidas socio-educativas pretenden conciliar los intereses en juego en la sociedad a través de la inserción en la sociedad desde el cumplimiento de la medida del adolescente. El sistema tradicional, que impone penas, rompe con la ligazón entre infracción y sociedad, al separar fatalmente al infractor y al no reparar adecuadamente el daño. Son las Sociedades democráticas exigen respeto a los derechos

de todos, tanto de las víctimas como de los infractores, y esto garantiza el Código a través de la aplicación de las medidas socioeducativas.

En todo proceso de violentación de derechos se debe establecer la corresponsabilidad del Estado y sociedad civil, del victimario para ejecutar conjuntamente políticas, planes, programas y acciones encaminadas a la prevención, intervención y reinserción. El mismo DL N° 1348, Código de Responsabilidad penal de Adolescentes, establece los criterios para la determinación de la medida socioeducativa y su duración al momento de dictarse la sentencia condenatoria:

1. La gravedad de la infracción;
2. La gravedad del daño causado;
3. El grado de participación del adolescente en la infracción;
4. La edad del adolescente al momento de cometer la infracción;
5. La proporcionalidad e idoneidad de la medida socioeducativa atendiendo al interés superior del adolescente y el principio educativo;
6. La capacidad del adolescente para cumplir la medida socioeducativa;
7. La voluntad de reparar el daño mostrada por el adolescente;
8. La contención y contexto familiar del adolescente; y
9. Las condiciones personales y sociales del adolescente.

Estos criterios señalados debe ser de aplicabilidad por el Juez de juzgamiento, a su vez controlar periódicamente, la evolución de la medida socioeducativa impuesta, afín de que el desarrollo de la misma no afecte el proceso de reinserción social del adolescente; este abanico de criterios de diferente contenido son considerados a efectos de seleccionar aquellas que satisfagan con mayor claridad el interés superior del adolescente a la hora de decidir y explicar por qué considerar dentro de la sentencia condenatoria.

2.2.2.8. Los cambios más importantes el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes

En materia jurídica, desde enero del 2017, publicado en el Diario “La República” el 13 de enero del 2017, hay una especie de

reconceptualización en el tratamiento del infractor adolescente en nuestro país, desde nuevos juzgados con competencias especiales hasta medidas alternativas al proceso, el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1348, presenta importantes cambios en el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal. Entre estos cambios más importantes está en la doctrina y la jurisprudencia respecto de la imputabilidad y la posibilidad de hacer penalmente responsable a un adolescente, lo que antes era diferente pues la condición de menor no era imputable. Este decreto legislativo aporta significativas innovaciones a lo que regulaba el Código de los Niños y Adolescentes, respecto de la infracción de leyes penales por adolescentes. Entre estos aportes que se señalan:

1. Se crean juzgados con competencias especializadas

Para el desarrollo de este nuevo proceso se han creado juzgados con competencias especiales, los cuales responden a la estructura del nuevo Código Procesal Penal. Así, los Juzgados de Investigación Preparatoria del Adolescente tendrán a su cargo la investigación y la etapa intermedia, mientras que el juicio oral estará a cargo de los Juzgados de Juzgamiento del Adolescente (D.L. N° 1348), en este caso se dan nuevas funciones y atribuciones a los operadores de justicia de acuerdo al Nuevo Código Procesal desde la investigación preparatoria hasta el juicio oral.

Finalmente, las impugnaciones serán revisadas por las Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia y las casaciones y recursos de queja por la Sala Penal de la Corte Suprema, vías que esclarecen como cambios dentro del ordenamiento jurídico penal del menor infractor.

2. Medidas de coerción procesal aplicables al adolescente

Las medidas de coerción se incorporan en este nuevo Código como una forma de restricción de los derechos de los adolescentes que puede ser impuesta solamente por el juez. Su imposición exige que se haya recibido la declaración del adolescente o una constancia de que este se denegó o no concurrió a pesar de estar debidamente notificado. Estas medidas entendidas como medidas socioeducativas dentro del

debido proceso y respecto al fin supremo del adolescente infractor que está en etapa de desarrollo y aplicando una serie de principios jurídicos que le asisten al menor, abordando desde el artículo 34 al 50.

La primera de las medidas es la detención, que puede ser policial, mediante arresto ciudadano o por resolución judicial por flagrancia delictiva; y en general no deben durar más de 24 horas. También se ha regulado la medida de suspensión preventiva de derechos como el impedimento de salida del país o de realizar determinadas labores, o la suspensión de aproximarse a determinados lugares, etc. En efecto, quizás estos cambios se equiparan a los de un adulto, pues los procedimientos son cuidadosos y diáfanos en cuanto a las normas que trae consigo el Decreto Legislativo 1348. Una de las primeras medidas impuestas al adolescente infractor es la detención, ya sea por flagrancia, orden judicial, debiendo durar dicha detención conforme lo estipula la ley. También existe la medida preventiva de derechos, por la cual al adolescente se le limita a realizar determinadas cosas, mientras dure dicha medida y/o termine las investigaciones correspondientes.

Otro cambio sustantivo del Decreto Legislativo que aprueba el Nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es la medida más gravosa es la internación preventiva, cuando existan razones plausibles para considerar que el adolescente ha cometido infracción sancionada por el Código Penal; también se impone cuando exista peligro de fuga y ante fundados y graves elementos de convicción de una infracción sancionable con la medida socioeducativa de internación, pero siempre en cuando el adolescente se encuentre debidamente individualizado. Finalmente, las últimas dos medidas de coerción son la comparecencia y la internación domiciliaria; siempre cuidando los principios del debido proceso.

3. Desarrollo del proceso

Este nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes regula también los aspectos procesales de la responsabilidad penal especial del adolescente. En general, se sigue la misma estructura del Código Procesal Penal de 2004: una primera etapa de investigación, luego una

intermedia donde se debate el sobreseimiento o la acusación, y finalmente el juicio oral; es decir procedimientos regulares dentro del proceso judicial

Sobre este tema, el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes enfatiza la necesidad de brindarles especial protección. También se regula un proceso de terminación anticipada, dichos procedimientos deben enmarcarse dentro de las competencias jurídicas, siempre teniendo presente el derecho fundamental del adolescente y la consideración de las normas internacionales consecuencia de los tratados.

4. Salidas alternativas del proceso

El Código regula medidas especiales como salidas alternativas al proceso. La primera de ellas es la remisión, entendida como como eximir o liberar de una obligación o también en promover la abstención de la acción penal cuando el hecho no revista mayor gravedad y donde es posible aplicar un programa de orientación restaurativo; en este caso el juez está facultado, de oficio o a pedido, para variar la medida, reducir su duración o inclusive dejarla sin efecto, sustentada en la doctrina definida como obediencia a la regla *rebus sic stantibus*.

Otra de ellas es el acuerdo reparatorio, que consiste en el reconocimiento del daño por parte del adolescente frente a la víctima, y comprometiéndose a repararlo, se aplica siempre que el hecho punible se encuentre tipificado como delito doloso en el Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de la libertad.

Finalmente, la más llamativa de las salidas alternativas es la denominada mecanismo restaurativo, que consiste en una intervención especializada entre un conciliador autorizado por el fiscal o el juzgador para el establecimiento de un dialogo entre la víctima y el adolescente. El mecanismo restaurativo no excluye la medida socioeducativa aplicable al adolescente; es decir aplicar el principio participación, de desarrollo y supervivencia.

5. Responsabilidad penal especial y medidas socioeducativas

Finalmente, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente reconoce la existencia de una responsabilidad penal del adolescente, pero de naturaleza “especial”. No obstante, no la define ni diferencia con la que se encuentra regulada en el Código Penal. Asimismo, ésta es una exigencia necesaria para la aplicación de medidas socio educativas.

Respecto de las medidas socioeducativas, se han dividido en no privativas de la libertad como la amonestación, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y la libertad asistida. Por otro lado, la internación en un centro juvenil es la única que permite la privación de la libertad ambulatoria

2.3. Definiciones conceptuales

La presente investigación consideró importante utilizar, dentro del proceso de investigativo los siguientes términos:

DEBIDO PROCESO: Es un derecho humano específico que aglutina un conjunto de derechos que respetados dentro del proceso judicial que se le sigue a un adolescente le permiten ejercer su defensa material, potencial el principio educativo dentro del mismo proceso y posibilitan la toma de una decisión justa.

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO: Es el principio informador que busca lo mejor para el niño en cada situación en la que se encuentra involucrado, cuyo límite es el debido proceso.

JUZGAMIENTO PARA EL CASO DE ADOLESCENTES INFRACTORES:

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor es únicamente de acción pública.

TIPIFICACIÓN DE DELITOS

Conducta típica o Tipicidad tiene que ver con toda conducta que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como delito o falta dentro de un cuerpo legal.

INIMPUTABLE

Imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión.

DELITO

Derecho positivo permite atribuir al delito, a la vista de la regulación que aquel efectúa de éste.

2.4. Hipótesis

2.4.1. General

Los adolescentes infractores no están siendo juzgados mediante el debido proceso en el Juzgado de Familia de Tingo María, 2014-2015?

2.4.2. Específicas

HE1: La imparcialidad e independencia del Juzgador influye negativamente en el debido proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores.

HE2: La Presunción de Inocencia influye positivamente en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores.

HE3: El derecho a la defensa influye significativamente en el juzgamiento del adolescente infractor.

HE4: El derecho a guardar silencio influye negativamente en el Debido Proceso al momento de juzgar adolescentes infractores.

2.5. Variables

2.5.1. Variable independiente

El debido proceso

Dimensiones e indicadores

- A) Imparcialidad e independencia del juzgador.
- B) Presunción de inocencia.
- C) Derecho a la defensa.
- D) Derecho a guardar silencio.

2.5.2. Variable dependiente

El juzgamiento de los adolescentes

Dimensiones e indicadores

- A) Juzgado de Familia.
- B) Fiscalía de Familia
- C) Adolescentes infractores.
- D) Sentencia: medidas educativas

2.6. Operacionalización de variables Dimensiones e indicadores

VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES
V.I El debido proceso.	1. Imparcialidad e independencia del juzgador. 2. Presunción de inocencia. 3. Derecho a la defensa. 4. Derecho a guardar silencio.	<ul style="list-style-type: none"> • Indubio pro reo. • Defensa material • Garantía de ejecución • Onus probando.
V.D Juzgamiento de adolescentes infractores.	1. Juzgado de familia. 2. Fiscalía de Familia. 3. Adolescentes infractores. 4. Sentencia: medidas educativas.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipificación de delitos. • Acción de delitos. • Homicidios. • Inimputable

CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación (Referencial)

(Hernández Sampiere, 2010) explica que la investigación se puede catalogar de diversas maneras pudiendo ser Experimental y no experimental. Por ello, para el desarrollo del presente trabajo se tomó en cuenta el tipo de investigación no experimental, no se pueden manipular ninguna de las dos variables (independiente y dependiente).

El estudio está orientado a determinar la relación entre el debido proceso y el juzgamiento del adolescente infractor en el Juzgado de Familia de Tingo María, donde se describe y explica los fenómenos encontrados entre las variables definido por sus dimensiones establecidas de cada una. Asimismo la investigación es transversal por cuanto cuando se estudian las variables simultáneamente en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo.

3.1.1. Enfoque

Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología de la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto.

En efecto, la presente investigación ha utilizado el enfoque cuantitativo, porque parte del estudio del análisis de datos, a través de la estadística, para dar solución a preguntas de investigación o para refutar o verificar una hipótesis. Por su parte Gómez Jara, (2010: 121) señala que bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es medir. Entendiendo que medir significa asignar números a objetos y eventos, por cuanto se ha medido las opiniones sobre el debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes infractores; en este sentido los estudios de corte cuantitativo pretender la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus

resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004:24).

3.1.2. Alcance o nivel

La investigación tiene un nivel descriptivo, se describe situaciones y eventos, del debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes infractores; es decir de cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscando especificar las propiedades importantes, recogiendo información del estado actual del problema.

En la versión de Pineda J. , (1994: 82) los estudios descriptivos son la base y punto inicial de los otros tipos y son aquellos que están dirigidos a determinar "cómo es" o "cómo está" la situación de las variables que se estudian en una población. La presencia o ausencia de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno (prevalencia o incidencia), y en quiénes, dónde y cuándo se está presentando determinado fenómeno; en efecto, la presente indagación se ciñe a las características señaladas.

3.1.3. Diseño

El diseño es el descriptivo, conforme lo señala Carlos, (2005: 75), citado por Ramírez Gonzáles este tipo de diseños se ocupa precisamente en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos: su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para hacerlo. El diseño descriptivo únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.

También la presente investigación, según Cordero Ayala, (2007:18), utiliza un diseño no experimental – transeccional – descriptivo. Los diseños transeccionales realizan observaciones en un momento único en el tiempo.

3.2. Población y muestra

3.2.1. Población

Según Ramírez González, (2003: 55) la población constituye el conjunto de elementos que forma parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la investigación. La población la define el objetivo o propósito central del

estudio y no estrictamente su ubicación o límites geográficos, u otras características particulares al interior de ella. En ese sentido, el presente trabajo de investigación ha considerado, la población de estudio la jurisdicción del Juzgado de Familia de Tingo María – región Huánuco, representada por 106 casos de juzgamiento de adolescentes infractores en el período de 2014 – 2015:

TABLA N° 1
Casos presentados y atendidos en el Juzgado de Familia de Tingo
María 2014 - 2015

AÑO	F	%
2014	46	43.39
2015	60	56.60
Total	106	100%

3.2.2. Muestra

En procesos investigativos la muestra es considerada como un subconjunto de la totalidad de la población. Para nuestro caso de la presente por contar con una población menor que cien, es decir una población muy delimitada se hizo una muestra intencionada no probabilística. Para mayor precisión sobre el particular, según Tamayo y Tamayo, (2010: 115) la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. Cuando se selecciona algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una población determinada, nos referimos a este grupo de elementos como muestra. La exactitud de la información recolectada depende en gran manera de la forma en que fue seleccionada la muestra. Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de la población, se toma una muestra representativa de la misma. De acuerdo a este autor citado, la muestra para el análisis y presentación de datos, no es posible estudiar en la totalidad de los casos manifestados entre el 2014 – 2015, por presentar una serie de diligencias sobre todo de orden reservado, confidencialidad de acceso a los documentos; en este caso conforme explica el autor citado el estudio se realizó en la muestra de 22 adolescentes.

Por otra parte, el tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe

usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de ser más representativa de la población. En la investigación descriptiva se emplean muestras grandes y algunas veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la población accesible; de acuerdo a lo expuesto, en nuestro caso tenemos a 22 menores infractores como población y la misma que constituye a muestra definida para la investigación. Finalmente, la muestra que se aplicó en el presente estudio, es de tipo no probabilístico e intencionada y por conveniencia está constituido por toda la población del Juzgado de Familia de Tingo María – Huánuco; es decir casos presentados entre el período de 2014 – 2015.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.3.1. Para la recolección de datos

Díaz de Rada, (2001: 13) describe a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir.

Por consiguiente la técnica de la encuesta se utiliza en este trabajo de investigación aplicando el enfoque cuantitativo a los resultados de la investigación, también como instrumento el cuestionario de carácter cerrado, 6 preguntas dicotómicas y 4 preguntas de selección múltiple. Esta investigación pretende mediante la encuesta medir las actitudes de los adolescentes; en este caso concreto: conocer la percepción respecto al debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes. Se entrevistó a 22 adolescentes privados de libertad, a quienes se les aplicó la encuesta asistida.

3.3.2. Para la presentación de datos

Según Mason y Lind, “la distribución de frecuencias es el agrupamiento de datos en categorías que muestran el número de observaciones de cada categoría”. La presente indagación utilizó para la presentación de datos para la distribución de frecuencias que indica el número de veces que

ocurre cada valor o dato en una tabla de resultados de un trabajo de campo.

El procedimiento para el procesamiento de los datos y presentarlos de manera tal de realizar los análisis correspondientes, fue el siguiente:

- a) Obtención de la información de la población a muestra de la investigación.
- b) Categorización analítica de los datos: los datos que han sido recogidos con anterioridad, se sometieron a la clasificación y codificación de esa forma lograr una nueva o mantener la actual interpretación de los hechos recogidos.
- c) Procesamiento de la información mediante la disposición de la masa de datos para organizarla y proceder a la ordenación de la información.
- d) Calificación y tabulación de los datos.
- e) Tabulación de la información mediante tablas de resumen de resultados, para la presentación en una tabla estadística simple y un gráfico circular o pastel, siendo uno de los más sencillos de confeccionar. Su uso estadístico fundamental es en la representación de series cronológicas, y en casos particulares, para representar los valores promedio o posicionales de muchas dimensiones

3.3.3. Para el análisis e interpretación de datos

El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. Ha sido importante la planificación de los principales aspectos del plan de análisis en función de la verificación de cada una de las hipótesis formuladas.

Según Hurtado, (2006: 181), El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos recogidos.

En primera instancia, se empleó la recopilación de la información a través de fuentes bibliográficas provenientes de libros, revistas, publicaciones

periódicas, textos legales, y páginas de internet, la misma fue revisada, organizada y analizada, a través de un resumen crítico y analítico de los hechos relacionados con el tema de estudio.

Seguidamente, se procedió a la lectura-escritura con el objeto de reconstruir o contextualizar las respuestas obtenidas a través de la aplicación de la encuesta. Esto supone codificar el nivel o niveles de importancia de los datos recolectados. Para procesar los datos se realizan básicamente dos técnicas fundamentales, como el registro y la tabulación.

En conclusión el examen cualitativo y cuantitativo de las variables y las dimensiones permite evaluar la actividad de campo y la eficacia de la guía de encuesta y finalmente se procedió con la explicación las características valiéndose del marco teórico.

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1. Procesamiento de datos (cuadros estadísticos con su respectivo análisis e interpretación)

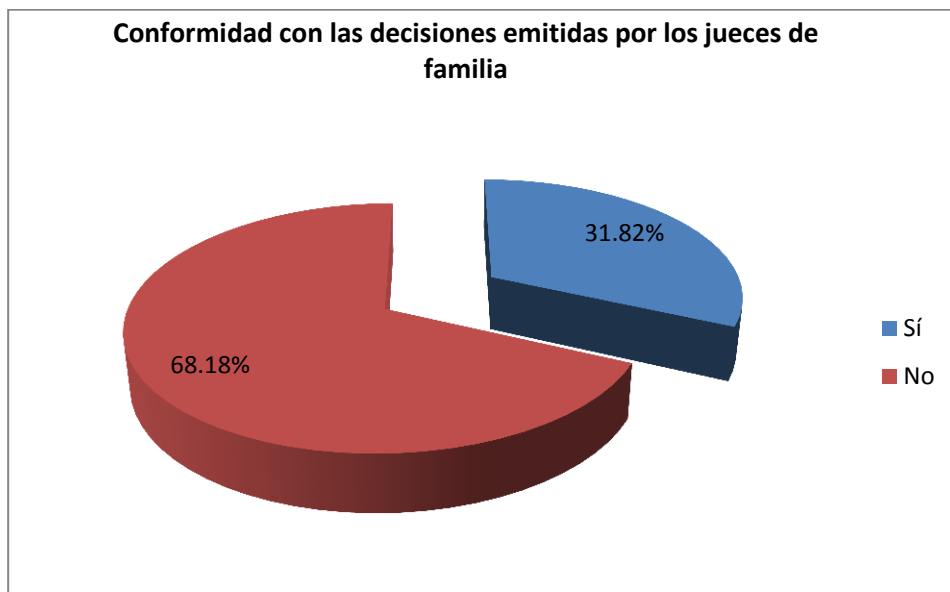
TABLA N° 02

Conformidad con las decisiones emitidas por los jueces de familia

CATEGORIA	FI	%
a) Sí	07	31.82
b) No	15	68.18
Total	22	100

FUENTE: Elaboración propia

Figura 01



Los resultados de la siguiente tabla refleja que, el 31.82 % de adolescentes encuestados están conformes con las decisiones que toman las autoridades judiciales en el juzgamiento; mientras que el 68.18%, están en disconformidad.

En consecuencia, de acuerdo a la Decreto legislativo N° 1348 que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en lo que respecta a la jurisdicción y competencia, sujetos procesales y órganos auxiliares, jurisdicción y competencia, el Artículo 9, determina las competencias del Juez de Investigación Preparatoria del Adolescente, así como procedimientos para el juzgamiento; también en el mismo Decreto Ley, Artículo 10, alcanza la competencia material y funcional de los Juzgados de Juzgamiento; es decir es competencia de los juzgados son internalizados por los litigantes menores, dando una opinión no de credibilidad en las decisiones; por otro lado el Artículo 11, respecto a Salas Penales que conozcan de procesos para adolescentes infractores de las Cortes Superiores, un porcentaje mínimo de menores infractores reconocen y están conformes con las decisiones de los jueces; y, el Artículo 12 relacionado a Sala Penal de la Corte Suprema respecto a los recursos de casación, conocer los procedimientos interpuestos contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las Salas de las Cortes Superiores; es decir instancias que permite recurrir contra la Sala Penal de apelación bien en una infracción evidente de la ley o ante la omisión de alguna formalidad esencial en el procedimiento. Estos procedimientos son desconocidos por la mayoría de encuestados.

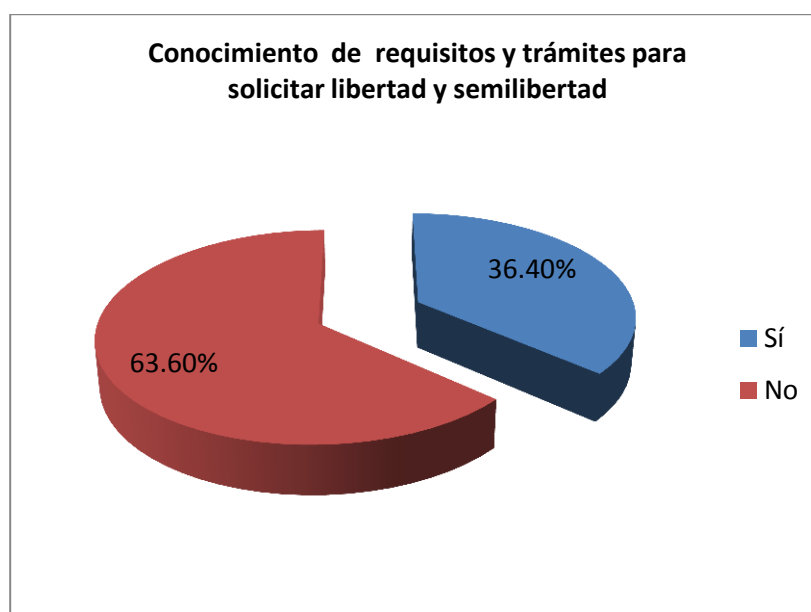
TABLA N° 03

Conocimiento de requisitos y trámites para solicitar libertad y semilibertad

CATEGORIA	FI	%
a) Sí	08	36.4
b) No	14	63.6
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 02



Los resultados de la tabla determinan que, el 63.60% de adolescentes infractores señala que no tiene conocimiento de requisitos y trámites para solicitar libertad y semilibertad; solo el 36.40% %, indica conocer estos procesos.

En efecto, el derecho a la participación y la información en el proceso o juzgamiento del adolescente infractor tiene relación con el debido proceso, todo adolescente tiene derecho inviolable a que se le informe de sus derechos, a que se comunique de inmediato (Art. VII. Debido Proceso DL N° 1348) como con la determinación del interés superior del niño (Art. IX, Ley N° 27337); además el proceso de responsabilidad penal del adolescente garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal al agraviado o perjudicado por la infracción; tanto los derechos de participación y la información principios del debido proceso, constituyen derechos inalienables del adolescentes; por una parte estar enterado de todas acción procesal y su plena participación en el proceso. Las autoridades de la Administración de Justicia, están obligadas a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición; sobre este caso, solo una minoría de adolescentes infractores al conocer

estos procedimientos participan e indican que tienen conocimiento de requisitos y trámites para solicitar libertad y semilibertad.

En cuanto a la conexión entre el interés superior del niño y el derecho a ejercer su libre opinión y acceder a información en la justicia penal juvenil; debe tenerse en cuenta que en la búsqueda de la decisión más favorable a su desarrollo integral, escucharlo y comunicarle es un ingrediente importante, pues implica pensarlo y considerarlo como una persona. Asimismo, reconoce las posibilidades que tienen los niños de enriquecer el proceso de toma de decisiones al compartir su perspectiva y participar como ciudadanos.

Finalmente, el derecho a ser escuchado implica además de la información adecuada el derecho a no ser presionado, a callarse, a no ser manipulado, ni que se influya en el contenido de su expresión, pues por el contrario debe alentarse el diálogo y el intercambio de puntos de vista, a fin de que el proceso sirva como un espacio pedagógico donde el adolescente participe en forma activa, tolerante y democrática. El juez, debe ser el orientador de este proceso que incluso posibilita que llegue a comprender las razones de determinadas decisiones y por qué éstas difieren de las que hubiera preferido. En este sentido estos derechos en opinión de la mayoría de los encuestados son vulnerados.

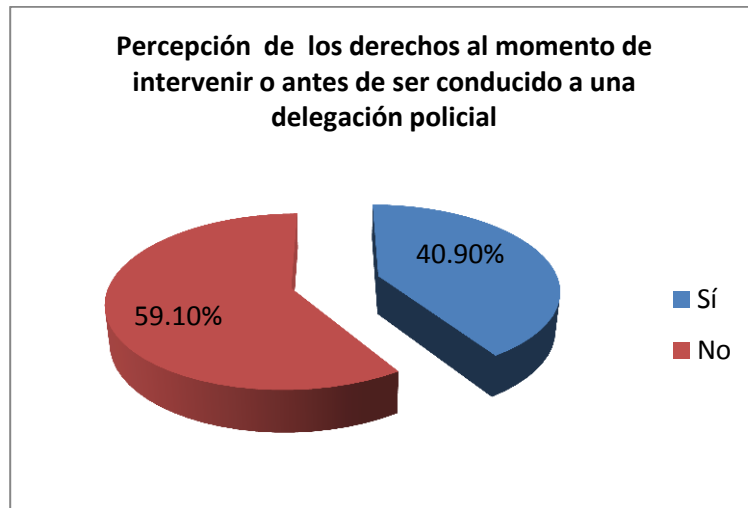
TABLA N° 04

Percepción de los derechos al momento de intervenir o antes de ser conducido a una delegación policial

CATEGORIA	FI	%
a) Sí	09	40.9%
b) No	13	59.1%
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 03



La tabla muestra sobre la percepción de los adolescentes infractores de los derechos al momento de intervenir o antes de ser conducido a una delegación policial, el 40.9%, se muestra conforme, pues sus derechos no son vulnerados; en cambio, el 59.1%, de encuestados tiene la percepción de afectare sus derechos.

El adolescente infractor desde un principio a la detención personal, la Constitución Política, en el inciso 24, literal f, del artículo 2º, dice que la detención es legítima, cuando así lo disponga el mandamiento escrito y motivado del juez y en caso de flagrante delito, es en la carta magna que contempla este procedimiento; por consiguiente, para esclarecer la controversia, es menester determinar si la detención personal se produjo en estas circunstancias y si el periodo de detención cumplido por el favorecido constituye una restricción del derecho a la libertad revista en la ley y la Constitución.

Asimismo, según Decreto Legislativo N° 1348 Nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, el adolescente infractor tiene que ser asistido por un defensor especializado desde su detención policial, durante la investigación y a lo largo de todo el proceso, así como durante el cumplimiento de alguna medida socioeducativa; en este caso cuando es asistido por un abogado defensor el Código de Responsabilidad Penal reconoce este derecho al menor infractor. En materia de proceso judicial, el menor infractor es procedimiento de su derecho de contar con un

abogado defensor desde la detención, durante el proceso indagatorio en incluso durante el cumplimiento de las medidas socioeducativas; esta percepción no repercute en la opinión de la mayoría de los encuestados. Además en este mismo decreto, claramente están delimitadas las funciones, atribuciones y obligaciones de los sujetos procesales (Arts. 13,14,15, 16, 17 y 18); es decir del Ministerio Público y la Policía Especializada de los procedimientos y el respeto irrestricto de los derechos y la ley en el tratamiento del adolescente, en base a los principios de protección integral de derechos. También los sujetos procesales deben actuar en base a los derechos establecidos en el nuevo código (Art. 19).

Finalmente, el nuevo código procesal penal es garantista, por lo tanto la función o la dirección de la investigación la asume el ministerio público con apoyo de personal policial, quien además hacen conocer en primera instancia a los menores infractores de sus derechos, así como también de la infracción cometida; estos propósitos señalados no se cumplen en el debido proceso en la opinión de la mayoría de los encuestados, al no percibir este derecho al momento de ser detenido

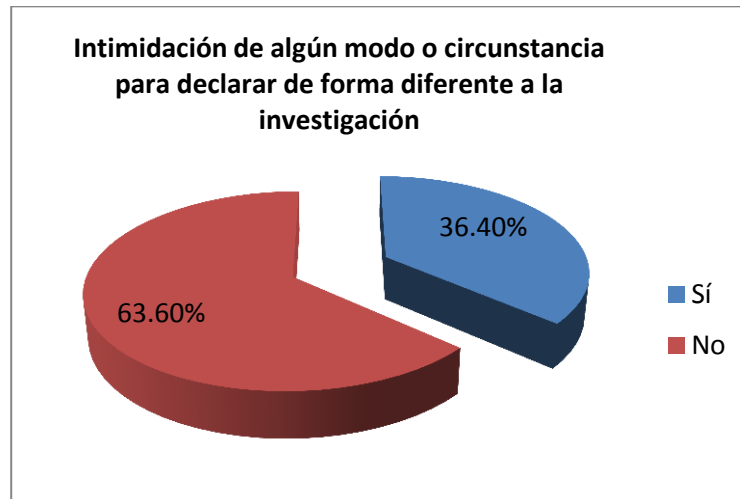
TABLA N° 05

Intimidación de algún modo o circunstancia para declarar de forma diferente a la investigación

CATEGORIA	FI	%
a) Sí	08	36.4
b) No	14	63.6
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 04



Del total de 22 procesos judiciales, el 63.6% de adolescentes encuestados señala que no ha recibido ningún acto de intimidación para declarar de forma diferente durante la investigación; sin embargo 8 casos que equivale al 36.4%, indica que ha recibido intimidaciones para declarar de forma diferente en el proceso de investigación.

El 36.4% que manifiesta haber sido de algún modo intimidado para declarar de manera diferente, aún corresponde a prácticas institucionalizadas de antaño por los sujetos procesales atentando al debido proceso y actuando arbitrariamente y al mismo tiempo no garantizando la efectivización de otros derechos; es claro que el interés superior del niño, es también principio rector que informa y orienta la aplicación de las normas específicas y las decisiones de la administración pública y la sociedad civil que afectan a los niños y adolescentes; en este caso, es diáfana el nuevo Código Procesal Penal de Adolescentes (Art. 19) que señala: los derechos del adolescente el ser asistido por un defensor especializado desde su detención policial, durante la investigación y a lo largo de todo el proceso, así como durante el cumplimiento de alguna medida socioeducativa; hacer valer por sí mismo, o a través de su abogado defensor, los derechos que la Constitución Política del Perú y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso; ser interrogado por la Policía únicamente en presencia de su abogado defensor. Es nula toda declaración que no cuente

con la presencia de su abogado defensor. La nueva legislación contempla los procedimientos señalados de asistencia y/ o acompañamiento en una acción judicial del menor imputado, que es protegido por las normas y la misma constitución. Asimismo, está prohibido dejar constancia de las manifestaciones que hubiere efectuado el adolescente de manera espontánea y en ausencia de su abogado defensor; y, acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria, cuando considere que durante las diligencias preliminares o en la Investigación Preparatoria, sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, a fin de que se subsane la omisión o se dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud se resuelve inmediatamente, previa constatación de los hechos y la realización de una audiencia con intervención de las partes, con el propósito que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley. Estas prácticas contrarias a lo dispone ley aún persisten como procedimientos judiciales.

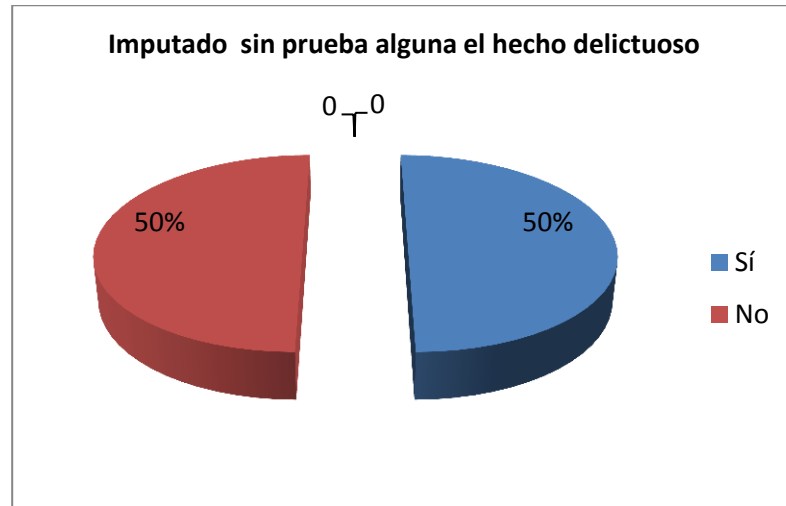
TABLA N° 06

Imputado sin prueba alguna el hecho delictuoso

CATEGORIA	FI	%
a) Sí	11	50
b) No	11	50
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 05



La siguiente tabla muestra que de los 22 procesos judiciales que tuvieron lugar, 11 que equivale al 50% de adolescentes infractores indica que las imputaciones fueron sin prueba alguna de un hecho delictuoso; otro porcentaje similar, atribuye que sí existieron pruebas en las imputaciones dadas por el juez.

EL 50% de encuestados traduce y cuestiona el comportamiento probatorio en las imputaciones, existiendo claramente una inseguridad jurídica, que se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley. En este caso, la denuncia del Fiscal, conforme lo dispone el nuevo código del adolescente, debe contener un breve resumen de los hechos, acompañando las pruebas reveladoras de la existencia de la infracción por parte del adolescente y los fundamentos de derecho; la solicitud del fiscal de contener una cabal refutación de una falsedad, más los elementos de garantía de las condiciones de vida. Asimismo, el Fiscal debe solicitar las diligencias que deban actuarse; las opiniones divididas, conforme a la opinión de los adolescentes, son imputados sin prueba alguna al hecho delictuoso; en este caso existe clara apresuramiento en la actuación del fiscal.

Es muy importante precisar que, el derecho a ofrecer y producir pruebas se encuentra reconocido en el Numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta garantía faculta a los administrados a presentar los medios de prueba que sean pertinentes para fundamentar sus argumentos, así como garantiza que la autoridad administrativa actúe y valore cada una de las pruebas admitidas antes de emitir una decisión en el procedimiento administrativo.

Conviene señalar que la producción y valoración de pruebas está vinculada a la motivación de las decisiones y al resultado del procedimiento administrativo, dado que su consideración definirá el sentido de la decisión final. Al respecto, el Tribunal Constitucional refiere que este derecho resulta trascendental en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores. En tal sentido, sostiene que todo administrado, para la defensa de sus derechos, puede presentar pruebas de descargo, las cuales deben ser necesariamente valoradas por la Administración Pública para emitir una decisión final, es decir, para concluir si corresponde o no la imposición de una sanción administrativa.

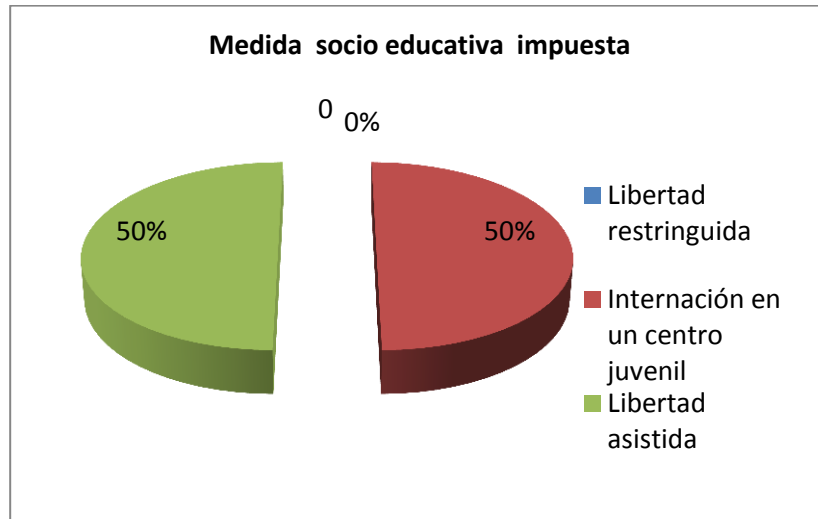
TABLA N° 07

Medida socio educativa impuesta

CATEGORIA	FI	%
a) Libertad restringida	--	
b) Internación en un centro juvenil	11	50
c) Libertad asistida	11	50
d) Amonestación	--	
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 06



De total de encuestados a los adolescentes infractores respecto a las medidas socioeducativas impuestas por el Juez; el 50% que corresponde a 11, sostiene que la medida fue de internación en un centro juvenil; otro porcentaje similar, manifiesta que la sentencia fue la de libertad asistida.

Una medida socioeducativa es una categoría de medida impuesta a los o las adolescentes por el cometimiento de infracciones penales tipificadas en el Código de los niños y adolescentes. Tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los y las adolescentes infractores/as, garantizar su educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los demás derechos de la persona. Pueden ser privativas y no privativas de libertad. Estas medidas socioeducativas están tipificadas en el Art. 156. 157 al 163 del Decreto Legislativo N° 1348, que van medidas no privativas de libertad (amonestación, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad y libertad restringida), internación en un centro juvenil, así como medidas accesorias.

TABLA N° 08

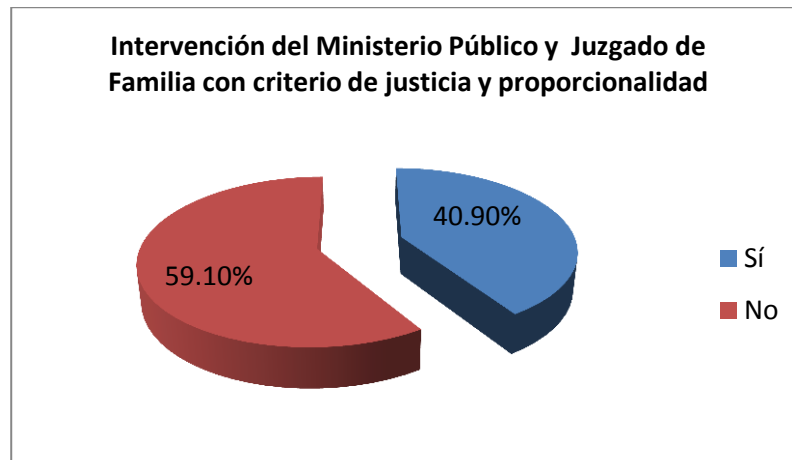
Intervención del Ministerio Público y Juzgado de Familia con criterio de justicia y proporcionalidad

CATEGORIA	FI	%
a) Sí	09	40.9

b) No	13	59.1
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 07



La siguiente tabla muestra los resultados de opinión respecto a la intervención del Ministerio Público y Juzgado de Familia con criterio de justicia y proporcionalidad en el juzgamiento de los adolescentes infractores: de los 22 casos, el 59.10% de encuestados dice que los entes operadores de justicia no actúan con criterio de justicia y proporcionalidad; mientras que un 40.90%, indica que los sujetos procesales ejercen con criterios de justicia y proporcionalidad.

El 59.10% de estimación respecto a la intervención del Ministerio Público y Juzgado de Familia es sumamente preocupante, porque en la actualidad existe un consenso respecto que la justicia consiste básicamente en respetar y actuar dentro de los derechos humanos, que la legislación en materia al juzgamiento de adolescentes infractores son considerados como sujetos activos de derechos y deberes, es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de sus derechos y además capaz de asumir responsabilidad de los actos de acuerdo a su edad.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40.4 establece la necesidad de que se disponga una diversidad de sanciones frente a un

hecho punible cometido por un menor de edad para asegurar que sean tratados de manera apropiada para su bienestar, pero sin perder de vista la necesaria proporción (principio de proporcionalidad) que debe guardar la respuesta adoptada, tanto con las circunstancias personales del adolescente en conflicto con la ley penal como con la infracción misma. Asimismo, EL nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, insta en el Título Preliminar, Art. V y XI, la actuación de los sujetos procesales bajo los principios de justicia especializada, de proporcionalidad y racionalidad.

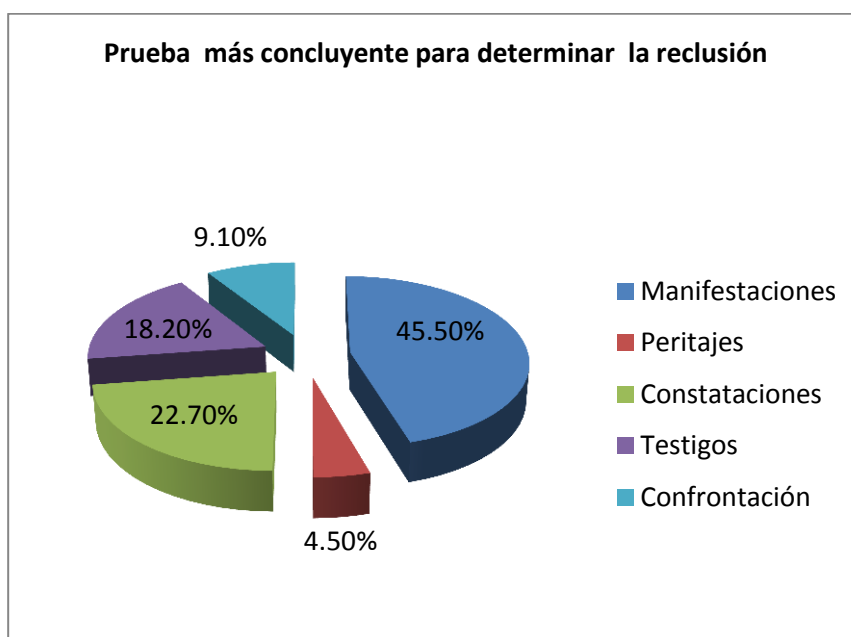
TABLA N° 09

Prueba más concluyente para determinar la reclusión

CATEGORIA	FI	%
a) Manifestaciones	10	45.5
b) Peritajes	1	04.5
c) Constataciones	5	22.7
d) Testigos	4	18.2
e) Confrontación	2	09.1
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Gráfico 08



La siguiente tabla muestra los resultados de la opinión de los adolescentes infractores relacionados a las pruebas más concluyentes para la determinación del Juez para su reclusión o internación, un 45.5% de encuestados dice que la prueba más fehaciente para su reclusión ha sido las manifestaciones consecuencia de las acciones procesales; el 22.70%, indica que las constataciones han sido determinantes para la aislamiento; el 18.2% de menores infractores señala que los testigos han sido definitivos para la imposición de la medida socioeducativa privativa de libertad; un 9.1%, atribuye, tal decisión del juez en la confrontación; y solo el 4.50% de adolescentes encuestados manifiesta que fueron los peritajes las pruebas más concluyentes para la internación.

Finalmente, El artículo 235 del Código de Niños y Adolescentes establece que la internación es una sanción privativa de libertad de carácter excepcional y se aplica como último recurso. En efecto toda reclusión que se realiza a los adolescentes, constituye el último procedimiento, siempre en cuando exista hechos razonables o demostradas; una reclusión de un menor infractor está en concordancia con múltiples normas internacionales que también garantizan la excepcionalidad de la privación de la libertad en el caso de menores de edad. Así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala: “En consideración a que la sanción en esta jurisdicción especial busca rehabilitar y no reprimir, el internamiento debe ser la última medida. Antes deben valorarse otras medidas de carácter socioeducativo como: orientación familiar, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, la obligación de reparar el daño y libertad asistida”.

Por otra parte el Tribunal Constitucional también ha reconocido la importancia del principio de excepcionalidad de la privación de libertad en sistema penal juvenil, señala que: “El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño determina el marco general de un sistema de responsabilidad penal juvenil al establecer que la privación de la libertad del niño es posible como una medida de último recurso, pero en establecimientos especiales separados del régimen para los adultos y por el menor tiempo posible, tomando en cuenta sus necesidades especiales”.

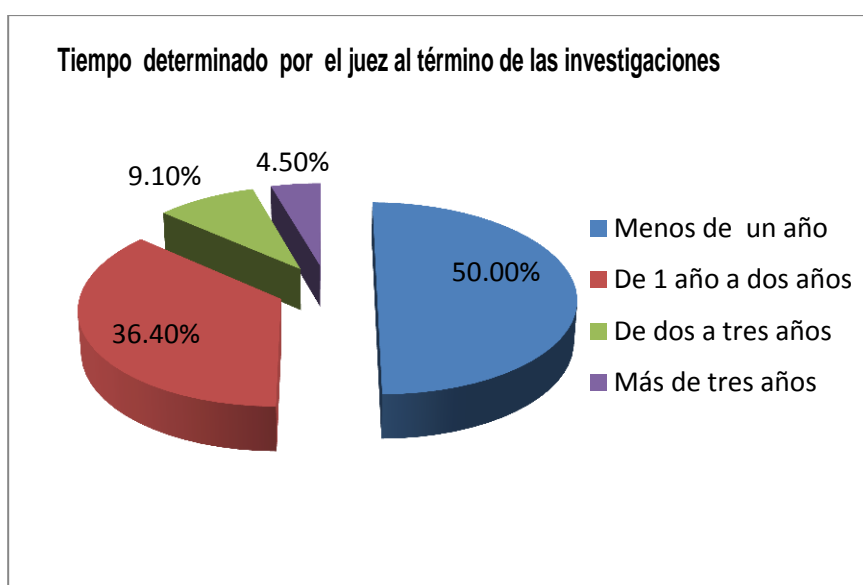
TABLA N° 10

Tiempo determinado por el juez al término de las investigaciones

CATEGORIA	FI	%
a) Menos de un año	11	50.0
b) De 1 a dos años	08	36.4
c) De dos a tres años	02	09.1
d) Más de tres años	01	04.5
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 09



Los resultados de la siguiente tabla están expresados en: el 50% de adolescentes infractores manifiesta que fueron sentenciados a menos de 1 año; mientras que el 36.4%, dice el tiempo determinado por el juez ha sido entre uno a dos años; en cambio el 9.1% de adolescentes encuestados, la sentencia fue entre dos a tres años; y solo un 4.50%, el tiempo estipulado de sentencia oscila más de tres años.

El Art. 163, del nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescente establece como regla general que la internación tiene un periodo de

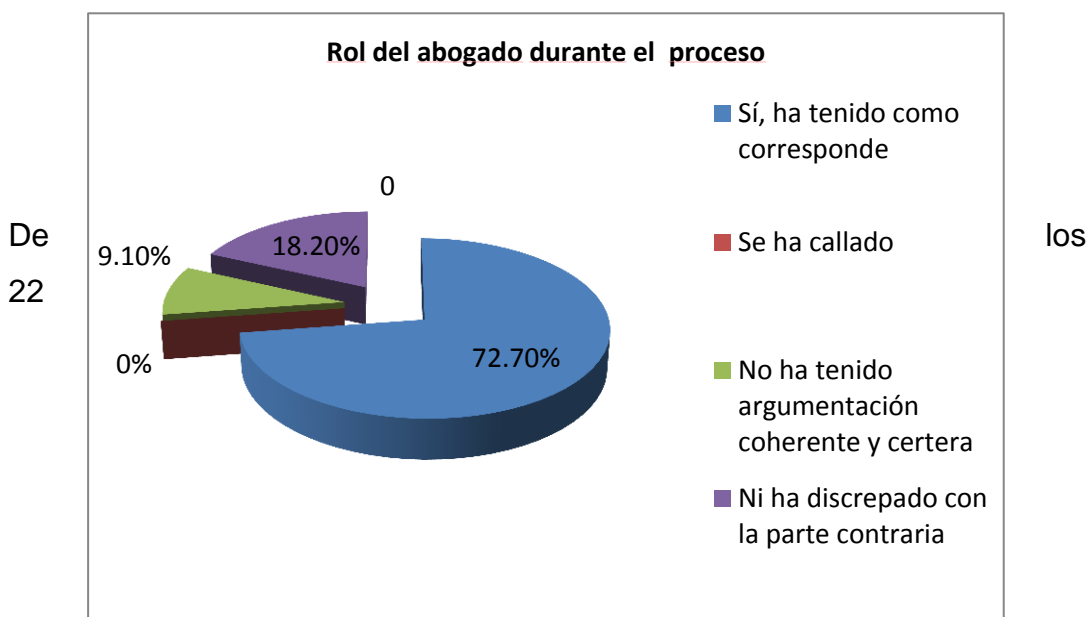
duración mínimo de un año y como máximo seis años. Empero el adolescente cuya edad oscila entre los 16 y menos de 18 años de edad, será sancionado con internación por un plazo no menor de seis ni mayor de diez años, si incurre en cualquiera de los hechos punibles que se encuentren tipificados: parricidio, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición de la víctima, feminicidio, lesiones graves, cuando la víctima es menor de edad, de la tercera edad o persona con discapacidad, lesiones graves por violencia contra la mujer y su entorno familiar, instigación o participación en pandillaje pernicioso, secuestro, trata de personas, formas agravadas de la trata de personas, violación sexual, entre otros.

TABLA N°11
Rol del abogado durante el proceso

CATEGORIA	FI	%
Sí, ha tendido como corresponde	16	72.7
Se ha quedado callado	--	--. --
No ha tenido argumentación coherente y certera	02	09.1
Ni ha discrepado con la parte contraria	04	18. 2
Total	22	100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Figura 10



casos procesales, los resultados que muestra la tabla, 16 adolescentes infractores sometidos encuesta que equivale al 72.70%, menciona que su abogado defensor ha tenido una actuación como corresponde; 4 adolescentes que corresponde al 18.2%, atribuye que su abogado no ha discrepado con la parte contraria; mientras que el 9.1% evidencia que su abogado defensor no ha tenido argumentación coherente y certera en los alegatos.

El 27.27% de adolescentes estima que el abogado defensor no desarrolla una defensa técnica, por cuanto en la opinión de los adolescentes sobresale actitudes de falta de un buen desempeño o no tiene la suficiente competencia. El Artículo 24, del Decreto legislativo N° 1348, del nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes determina que: “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provee la defensa gratuita especializada a todos los adolescentes que, por sus escasos recursos no puedan designar un abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso, incluso alcanzando en el mismo decreto Art. 25 derechos del abogado del adolescente; sin embargo el 27,3% de encuestados cuestionan la actuación del abogado defensor.

En este sentido, la noción de competencias alude a la puesta en práctica integrada de aptitudes, habilidades, conocimientos y rasgos de personalidad para cumplir una misión compleja. Las competencias profesionales son una categoría específica de características individuales que tienen también lazos estrechos con los valores y con los conocimientos adquiridos, que permiten obtener rendimientos eficaces y/o superiores en un trabajo o una situación concreta.

Este enfoque es útil porque permite unir dos puntos de vista que suelen oponerse de manera artificial. Por un lado, el enfoque de las habilidades y motivaciones personales del abogado que ejerce la defensa penal de adolescentes, y por el otro, la que enfatiza el entrenamiento en las destrezas de litigación. Se trata de evitar caer en las siguientes afirmaciones extremas: sólo un abogado carismático y comprometido puede realizar una defensa penal de calidad, o bien, es suficiente para ejercer la defensa conocer la ley y entrenar las destrezas de litigación. Por el contrario, una defensa de calidad exige conjuntamente un núcleo de habilidades y motivaciones básicas para relacionarse con el conflicto penal del adolescente, y también el entrenamiento en destrezas de litigación específicas que supone el conocimiento de las normas pertinentes.

CAPITULO V

DISCUSION DE RESULTADOS

5.1. Presentación de los resultados del trabajo de investigación

Los principios de interés superior y pro adolescente dentro de la legislación permiten privilegiar la Protección Integral y el Interés Superior del Niño y del Adolescente accediendo hacia el pleno respeto del ejercicio de los derechos de los adolescentes, gozando de un plus que la ley les otorga como un grupo de atención prioritaria y titulares de derechos, amparados por normas internacionales e internas. Se puede determinar la norma suprema la Constitución de la República no es aplicada en su totalidad a pesar de ser garantista encontrando principios, derechos y garantías que deben ser observados en un proceso penal en contra de un adolescente. Los profesionales del derecho no tienen claro la efectividad de la aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia y Código de Procedimiento Penal de Adolescentes. Se carece de jueces especializados en materia de adolescentes infractores porque existe supletoriedad en caso de no existir un Juez de la Niñez y Adolescencia. La ciudadanía no tiene pleno conocimiento de los organismos encargados de receptar denunciar como es la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Juzgado de Familia. Los administradores de justicia ponderarían en el tema de adolescentes infractores frente a otros derechos e intereses, para poder brindar una verdadera justicia respetando los derechos considerados como principios rectores que la Constitución establece y garantizando un juicio justo diferenciado de los adultos en un irrestricto uso del debido proceso.

En este sentido, la presente investigación partió de supuestos:

HE₁: La imparcialidad e independencia del Juzgador influye negativamente en el debido proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores.

HE₂: La Presunción de Inocencia influye positivamente en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores.

HE₃: El derecho a la defensa influye significativamente en el juzgamiento del adolescente infractor.

HE₄ El derecho a guardar silencio influye negativamente en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores

1. La imparcialidad del debido proceso está enmarcada dentro de las normas vinculantes del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes de los sujetos procesales, bajo el imperativo “actúa en el proceso de responsabilidad penal del adolescente con independencia de criterio o de oficio, adecuando sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose por la Constitución Política del Perú, la Ley y los tratados internacionales sobre la materia; sin perjuicio de las directivas o instrucciones de carácter general”..., porque el debido proceso es una garantía y un derecho fundamental de todos los justiciables que les permitirá, una vez ejercitado el derecho de acción pueden, efectivamente, acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada de resolverlo a pronunciarse de manera justa, equitativa e imparcial; es decir solo se circunscribe al principio de imparcialidad y que es plausible la relevancia que se le da al sustento axiológico de justicia del debido proceso; prerrogativa expresada en la opinión de la mayoría los adolescentes (68.18%) la disconformidad manifiesta con las decisiones del operador de justicia; al no tener pleno conocimiento de requisitos de los procedimientos materia de juzgamiento (63.6%); y, la intervención del Ministerio Público y Juzgado de Familia sin criterios de justicia y proporcionalidad (59.1%).

Obviamente los sujetos procesales intervienen dentro de un “modelo de Justicia o de Responsabilidad de un sistema de protección social y legal de los menores en conflicto con la ley penal que establece una clara distinción entre los conflictos sociales y los delitos y los principio de oportunidad, el de celeridad, el de flexibilidad, entre otros (Gálvez, 2010); por lo que revierten un sistema lleno de vicios entre los principales valores comprometidos en las decisiones: “En la mayoría de los procesos seguidos contra adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se incumplen las normas que regulan el debido proceso durante la etapa policial, fiscal, juzgamiento y ejecución de las sanciones aplicadas a los adolescentes, tanto en su faz sustantiva como adjetiva, vulnerándose sus derechos humanos

específicos en todas estas instancias por medio de decisiones arbitrarias y transgresión de sus garantías procesales, debido a causas de carácter normativo, (deficiente regulación normativa) cognitivo (inadecuada capacitación y comprensión de los operadores de la doctrina de la protección integral) y operativo funcional (incumplimiento de funciones de garantía de parte de los operadores)” Hernández Alarcón, Christian A. (2005).

En consecuencia, se destaca el valor justicia y el cual conduce, derechamente, a la noción rectora del proceso justo, dado que ya no existe impunidad frente a los delitos cometidos por los adolescentes hecho que corrobora también en la sanción dictaminada por el Ministerio Público, 86,3% de adolescentes sentenciados entre uno a dos años, de alguna manera perjudica, comprendiendo que dentro de una concepción relativa de usos y costumbres, antes de la promulgación del nuevo Código de Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, la actuación era irregular, muchas veces la condiciones de menor no daba lugar a sentencias listas, equitativas y objetivas no se sancionaba al adolescente infractor, dejando atrás una visión de menor inimputable, enfermo e incapaz, pero además sin garantía alguna procedimental pues era el criterio del juez el que prevalecía como absoluto, o en el juzgamiento se aplicaba un procedimiento similar al del adulto.

2. La Presunción de Inocencia influye positivamente en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores ; al respecto de este enunciado el marco teórico analiza y desarrolla como un principio del debido proceso, así también en el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes DL N° 1348, al adolescente se considera inocente cuando se somete al proceso de responsabilidad hasta que no se demuestre lo contrario por los medios establecidos; Chinchilla Gómez (2007) coadyuva cuando dice: “toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada”. De igual manera la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que todo niño se presumirá inocente mientras no se pruebe

su culpabilidad conforme a ley; en efecto las opiniones mayoritarias de los adolescentes (63,6%) el tener conocimiento de procedimientos; veredicto sobre la imputación con pruebas (50%); la intervención del Ministerio Público y Juzgado de Familia sin criterio de justicia y proporcionalidad (59,1%), el rol adecuado del abogado durante proceso (72,7%) conducen a que el debido proceso se desarrolle positivamente en el juzgamiento de los adolescentes infractores, porque no se va respetando los derechos procesales al valorar el principio de inocencia que el imputado sea tratado como inocente durante el proceso, lo que tiene implicaciones con relación a las medidas coercitivas que se ordenan en su contra, de las que sobresalen la prisión preventiva, debiendo tener estas medidas una función de naturaleza procesal, y no propiamente una de Derecho Penal Sustantivo, lo que prohíbe que se persigan los fines apremiados por las penas (prevención general y especial). De la misma manera la presunción de inocencia se traduce en el principio in dubio pro reo.

3. El derecho a la defensa influye en el juzgamiento del adolescente infractor; este derecho de defensa es un derecho del imputado (adolescente), es una facultad de éste, de poder ejercerlo personalmente, esto es lo que se llama defensa material, lo que quiere decir, que el derecho de defensa debe ejercitarse por parte del propio encausado (adolescente). El derecho de defensa material se define primordialmente a través de lo que se conoce como el derecho de ser oído o el derecho a declarar en el proceso, porque es la oportunidad que se le otorga a éste, en virtud de un derecho constitucional de defenderse en juicio, en el cual puede presentar su versión de los hechos, ofrecer su descargo, proponer pruebas, y tener un contacto directo con las personas que tienen a su cargo la preparación de la acusación, o directamente en el juicio; en este caso, los resultados de los ítems de las opiniones mayoritarias sobre este derecho de los propios adolescentes (77,2%) sobre mecanismos de percepción o información de sus propios derechos al momento de ser intervenido o conducido a una delegación, forma parte de lo que significa el derecho a la defensa; así como el la

cifra de 59.1%, cuando el Ministerio Público y Juzgado de Familia no actúa con criterio de justicia y proporcionalidad. En efecto, en el nuevo Código de responsabilidad Penal de Adolescentes, el derecho a defensa está contemplada en el Capítulo III, Adolescentes y Defensa Legal, atribuyendo derechos explícitos al respecto.

En este contexto son muy significativos los cánones que alcanza el Tribunal Constitucional cuando señala que el derecho a la defensa garantiza que toda persona sometida a un procedimiento administrativo tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de sus derechos e intereses y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando sostiene que el derecho de defensa implica que los administrados tengan conocimiento oportuno y completo de los cargos que se les imputan, cuenten con un plazo razonable para ejercer su defensa y puedan presentar medios probatorios Ministerio de Justicia , 2013: 19)

4. El derecho a guardar silencio influye negativamente en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores; el mismo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, incita a que el adolescente infractor de abstenerse de declarar , incluso desde un primer momento de detención y, si acepta hacerlo, tiene derecho a que su abogado defensor; el Artículo 45, Señala los Derechos y garantías del adolescente y de manera explícita también, otorga como derecho, durante la detención a guardar silencio; en este caso habría que considerar que este derecho es una garantía y un derecho constitucional que es aplicado tanto a los adultos como a los adolescentes, cuando haya fundamento para creer que han participado en un ilícito penal, tanto unos como los otros no pueden ser obligados a declarar contra sí mismos, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley o abstenerse de declarar, en un proceso penal ya sea de adultos o de adolescentes.

A partir del momento que a un adolescente le sea imputado un ilícito penal, es decir, cuando exista indicio de que él sea un posible autor

o participe de ese hecho punible, éste adquiere el derecho inalienable a defenderse de tal imputación. Una manifestación privilegiada de ese derecho a defenderse es el derecho a declarar, o sea, el derecho de proporcionar válidamente al proceso información que él considera conveniente, y sólo si se considera como una de las manifestaciones del derecho del imputado a defenderse, se puede pensar que ninguna persona puede ser obligada a declarar en su contra. Por lo tanto el inculpado no tiene la obligación de declarar la verdad, como también puede ocultar información, lo que no podría ser otra cosa, que ejercer su derecho de defensa, lo que significa que el acusado es el que tiene el dominio o mando sobre su propia decisión de declarar, porque sólo él puede determinar lo que quiere o lo que no le interesa declarar, esto significa el derecho a guardar silencio. Por lo que del silencio del imputado, de su negativa a declarar o de su mentira, no se pueden extraer conclusiones en su perjuicio, porque tal cosa violaría su derecho de defensa, este silencio o negativa a declarar tampoco puede originar efecto alguno sobre el proceso. Puede también declarar cuantas veces quiera, porque es él quien domina la oportunidad y el contenido de la información que desea introducir en el proceso. El análisis anterior refleja en la conducta de los adolescentes infractores, cuando en su opinión propio de ellos señalan que el (36,36%) han sufrido intimidación, que conduce a guardar silencio o actuar arbitrariamente al interés de la autoridad; otra cifra muy significativa de 50% conduce a haber sido imputado sin prueba alguna, es obvio que de alguna manera influye el silencio del adolescente infractor en estas medidas coercitivas; el 68.18,% no se mantiene conforme con las decisiones emitidas por el Juez de familia, manifestaciones quizás en la concepción que el juez cuando haya constatado que el adolescente comprende el contenido de la acusación y verificada su identidad, le indicará que puede declarar o abstenerse de ello, sin que su silencio implique presunción de culpabilidad. En consecuencia el imputado también tiene la facultad de confesar, pero esta facultad de confesar es personalísima, donde impera la voluntad de éste, por lo que no puede ser inducida de ningún modo, tampoco utilizar ningún

artificio, argucia o presión tendiente a provocar la confesión del encausado, no se pueden utilizar tampoco preguntas capciosas o sugestivas ni amenazar al procesado de lo que le podría suceder en caso de que no confiese, todos estos mecanismos u otros procedimientos similares menoscaban la voluntad del imputado (adolescente) y resultan atentatorios contra la garantía de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra o simplemente guarda silencio absoluto. Este derecho se estipula en el Artículo 40.2.b) iv) de la Convención sobre los Derechos del Niño, “Parte de que el imputado no es quien debe probar su inocencia, por lo que no tiene que aportar prueba a su favor, sino que es el Ministerio Público el que debe demostrar su culpabilidad si pretende el dictado de una sentencia condenatoria. Por supuesto que el derecho a abstenerse de declarar implica que es facultativo del adolescente el declarar o abstenerse de hacerlo, teniendo también un derecho de declarar, que supone la máxima expresión de la defensa material que pueda realizar frente a la acusación que se le haga”.

Las argumentaciones y fundamentación en el marco teórico, la presentación y discusión de los resultados permiten; uno, verificar el cumplimiento de los objetivos; y, dos, la contrastación de las hipótesis conjeturas o supuestos que dieron origen a la presente investigación .

CONCLUSIONES

1. El debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías constitucionales esenciales identificando el curso de acusación, defensa, prueba y sentencia, que se traducen en otros tantos derechos que enunciativamente se plantean en derechos propios de la jurisprudencia y cuando se aplica contra de un adolescente está revestido de principios, derechos y garantías que la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales y ordenamiento jurídico interno permitiendo una verdadera justicia en beneficio de la adolescencia como verdaderos titulares de derechos.
2. El debido proceso, desde una perspectiva pragmática, consignada dentro de la justicia penal del menor infractor, aún no se aplica con la celeridad, prontitud y objetividad de parte de los operadores de justicia, por más que se haya implementado una serie de mecanismos: jueces, policía y fiscales especializados, conforme lo determina el decreto legislativo ad hoc, incluyendo servidores civiles el sistema de justicia. Las acciones de capacitación, en materia de justicia penal juvenil y las ciencias penales permanecen pasivos a estos cambios.
3. Los administradores de justicia o sujetos procesales aún no manifiestan la conceptualización pertinente de la especificidad en el tema del proceso de responsabilidad penal de adolescentes infractores en el proceso de juzgamiento actúan en ciertas ocasiones un procedimiento igual al de adultos, vulnerando derechos propios de su edad y a la seguridad jurídica.
4. La delincuencia juvenil, en nuestra sociedad aún con los cambios que en materia jurídica penal que experimenta, se incrementa vertiginosamente; la prensa a diario reporta de manera mediática casos alarmantes de adolescentes infractores, imputados en

flagrancia, generando un estado de inseguridad en todos los ámbitos del país.

5. La justicia penal juvenil presenta un contenido normativo nutrido que parte esta consideración desde la Constitución Política, la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, el Código del Niño y Adolescente, el nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y otros convenios internacionales sobre las cuales actúan los operadores de justicia, desarrollando un modelo de protección integral basada en los derechos del adolescente considerados principios rectores y dentro del debido proceso.
6. La reciente aprobación del Código de responsabilidad Penal de Adolescentes presenta, entonces, un desafío de gran envergadura para los sujetos procesales. Tanto la investigación preparatoria, los alegatos y otras acciones del proceso del Ministerio Público, del Juez de Familia, la policía y la defensa jurídica del adolescente, junto con desarrollarse en un procedimiento acusatorio, ágil, oral y desformalizado, que implica nuevas destrezas de litigación, debe dar cuenta de un conjunto de conocimientos legales sustantivos, así como de las habilidades que se requieren para una óptima relación entre el defensor y su cliente, en este caso, un sujeto en desarrollo.
7. El nuevo Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes prioriza la protección del derecho al debido proceso y para el cumplimiento de los fines de educación, protección y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes activos del proceso penal adolescente, en desarrollo del sistema de protección integral, estableciendo con ello la reserva de las actuaciones desarrolladas en las etapas procesales, basados en la Constitución y la Convención Interamericana de los Derechos del Niño y la Ley del Código de los Niños y de los Adolescentes.
8. La garantía y derecho fundamental amparado por la Constitución Política del Estado, muy difundido, pero no desarrollado en su real dimensión. Una parte de la doctrina la desarrolla como una garantía

específica semejante al derecho a la defensa, otros lo consideran dentro del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva y también lo desarrollan como una Institución Instrumental. El debido proceso no está sistematizado dentro de la teoría general del proceso, esta garantía pertenece básicamente al ámbito del derecho procesal, al derecho judicial, más concretamente al rubro de la ciencia procesal que con el desarrollo histórico y científico de la teoría general del proceso han visto positivizado en el texto normativo de la constitución, diversos principios y postulados esencialmente procesales sin los cuales no se puede entender un proceso judicial justo y eficaz.

RECOMENDACIONES

1. Los administradores de justicia o sujetos procesales deben tener en cuenta que los adolescentes forman parte del grupo de atención prioritaria de la sociedad, brindándole la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos durante el proceso de responsabilidad penal, motivo por el cual es importante aplicar todos los principios constitucionales del debido proceso a fin de que los adolescentes infractores sean conducidos bajo un proceso de juzgamiento adecuado sin transgresiones de ninguna índole.
2. Se debe velar por la aplicación del debido proceso en todas las etapas de juzgamiento de los adolescentes infractores, los daños al mismo pueden ser de tipo psicológico como físico al tener que someterse a la presión de un proceso demasiado largo y sin imparcialidad.
3. La convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente, el Código del Niño y del Adolescente, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y todo lo relacionado con los niños y adolescentes deben ser de cumplimiento por todo funcionario o servidor público durante el desarrollo del proceso, así como durante la ejecución de alguna medida socioeducativa en el juzgamiento del adolescente infractor.
4. Se hace necesario construir una política pública de tratamiento al adolescentes infractor a fin de dar cumplimiento al interés superior del adolescente y en la consecución de la protección y prevención a través creación de programas o planes de desarrollo nacional, regional y local desde una óptica multidisciplinaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUILERA, Gabriel (2001) *"Buscando la seguridad ciudadana y la consolidación democrática en Guatemala"*. Guatemala: Ed. Cárdenas.
- ALVARADO L., H. (2010). *El debido proceso en adolescentes en conflicto con la ley en la ciudad de Cuenca*. Cuenca - Ecuador: Universidad de Cuenca.
- ARQUILA, Juan (1999) *"El futuro del terrorismo y el crimen organizado"*. Guatemala: Ed. Alianza.
- BACIGALUPO, E (1983) *"Estudio comparativo sobre regímenes en materia de menores infractores de la ley penal"*. Revista ILANUD, No. 17. San José.
- BAIZÁN, Mario (1999.) *"Democracia y crimen organizado"*. Argentina: Ed. Lerner,
- BARATTA, A. (1995). *Elementos de un nuevo derecho de infancia y la adolescencia, a propósito del estatuto del niño y adolescente. IUS ET VERITSAS - PUCP, 77.*
- BELOFF, M. (2001). *Los Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil en América Latina*. Buenos Aires: Ara Editores.
- BERISTAIN, Antonio (1985.) *"Ciencia penal y criminología"*, España: Ed. Tecnos.
- BINDER, A. (1995). *Menotr infractor y proceso penal... un modelo para armar*. El Salvador: PNUD.
- BUSTAMANTE, R. (2001). *Derechos fundamentales y proceso justo*. Lima: Fondo Editorial.
- BUSTOS J., (2005) *Nuevo sistema de derecho penal*, Editorial Trott.
- BUSTOS J., HORMAZABAL H. (2007), *Derecho penal del niño-adolescente*, Editorial Jurídica
- BUSTOS RAMÍREZ, J. (1991). *Manuela del derecho penal*. Barcelona: Aires Derecho.
- BUSTOS RAMÍREZ, J. (1991). *Manuela del derecho penal*. Barcelona: Aires Derecho.

- CABANELLAS, Guillermo (1992.)” *Repertorio jurídico*”. Argentina: Ed. Heliasta S.R.L.
- CARLOS, S. (2005). *EL Proceso de investigación*. Caracas: Ed. Panapo.
- CAROCCA PÉREZ, A. (1998). *Garantía constitucional de la defensa procesal*. Barcelona: José María Bosch Editor .
- CARRARA, Francisco. (1990) *Derecho criminal*. Buenos Aires: Ed. De Palma.
- CERDA M., CERDA R. (2006), Sistema de responsabilidad penal de adolescentes, Editorial Librotecnia, Santiago de Chile.
- CEREZO MIR, José (1982). “*Problemas fundamentales del derecho penal*”. Madrid: Ed. Tecnos.
- CHINCHILLA GÓMEZ, M. P. (2007). *Competencia de los jueces de paz en delitos cometidos por los menores de edad*. Guatemala: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universas San Carlos de Guatemala.
- CILLERO, M. (1997). *Leyes de menores, sistema penal e instrumentos internacionales de derechos humanos*. Santiago de Chile: Publicaciones especiales N° 6 Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales.
- CORDERO AYALA, H. (2007). *Investigación*. Lima.: Publicaciones UNE.
- DELGADO LLANO, L. F. (2008). *Fundamentos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes*. Bogotá: Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".
- DÍAZ DE RADA, E. (2001). *Metodología de la Investigación*. Bogotá.
- GARCÍA TOMA, V. (1998). *Análisis sistemática de la Constitución Peruana 1993*. Lima: Fondo de Desarrollo Editorial, Universidad de Lima.
- GARCÍA TOMA, V. (1998). *Análisis sistemático de la Constitución Peruana 1993*. Lima: Fondo de Desarrollo Editorial, Universidad de Lima.
- GOLDSTEIN, Raúl (1994). “*Diccionario de derecho penal y criminología*”. 3a. ed.; Buenos Aires: Ed. Astrea.
- GÓMEZ JARA, F. (2010). *El diseño de la investigación social*. México: Ed. Distribución FONTAMARA.
- GROSMAN, C. (2002). Los derechos del niño en la familia. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni Editores.

- HERNÁNDEZ ALARCÓN, C. A. (2005). *El debido proceso y la justicia penal juvenil*. Lima: UNMSM - Facultad de Derecho y Ciencia Política.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGRAW- HILL/INTERAMERICANA EDITORES S.A. DE C.V.
- HERRERO HERRERO, C. (2002) “*Tipologías de delitos y de delinquentes en la delincuencia juvenil actual. Perspectiva criminológica*”, en *Actualidad Penal*, N° 41.
- HORACIO VIÑAS, R (2002); “*Delincuencia juvenil y derecho penal de menores*”. Buenos Aires.
- HURTADO, C. (2006). *Metodología de la investigación*. México: Ed. Pearson.
- LANDA ARROYO, C. (2001). *Debido proceso y tutela jurisdiccional. Pensamiento Constitucional*, 448.
- LEDESMA, M. (1998). *Comentarios al código procesal civil* . Lima : UNSM.
- LINARES, J. F. (2005). *Las garantías del debido proceso. Matereial de enseñanza de la PUC*, 23.
- LÓPEZ REY, M. (1998). “*Criminología. Criminalidad y planificación de la política criminal*”, Madrid.
- MAEIR, J. (1991) “*La víctima en el sistema penal*”. En jueces para la democracia N° 12.
- MAURACH, Así (1990). “*Tratado de derecho penal*”, Barcelona: Ed. Ariel.
- MENDIZABAL OSES, L. (1977). *Derecho de menores*. Madrid: Ediciones Pirámide S.A.
- MINISTERIO DE JUSTICIA (2013). *Guía sobre la aplicación del principio - Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos*. Lima: VIA Publicidad S.A.C.
- MIR PUIG, Santiago (1990). *Derecho penal*. Barcelona, España: Ed. PPU.
- MONTECINOS GONZALES, E. (1995). *Mediación y justicia juvenil*. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- NINO C. (2000) *Los Límites de la Responsabilidad Penal*, Editorial Jurídica.
- OTEIZA, E. (2002). *El debido proceso: evolución de la garantía y autismo procesal*. Colombia: Oveja Negra .

PERL, Rafael. (2001) *El crimen organizado en América Latina*. Colombia: Ed. Nación S.A. Santiago.

PINEDA, E. B. (1994). *Metodología de la Investigación*. Washington: Organización Panamericana de la Salud.

PINEDA, J. (1998). *Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias sociales* México: Ed. Fondo de Cultura Económica.

RAMÍREZ GONZÁLEZ, A. (2003). *Metodología de la investigación científica*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

RODRIGUEZ DEVESA, J. M., & SERRANO GÓMEZ, A. (1994). *Derecho Penal Español*. Madrid: Edición Diykinson.

RUBIO CORREA, M. (2005). *La interpretación de la Constitución según el tribunal Constitucional*. Lima: Fondo Editorial de PUCP.

SAN MARTÍN CASTRO, C. (1999). *Derecho procesal penal*. Lima: Grijley.

SANGUINO SÁNCHEZ, J. M. (2007). *Garantía del debido proceso, en el debido proceso*. Buenos Aires : Ediciones Universitaria.

TAMAYO Y TAMAYO, M. (2010). *El proceso de la investigación científica*. México: Editorial LIMUSA. Décima reimpresión.

VIERA, Margarita. (2004) "Criminología". Edit. Pueblo y Educación. La Habana.

VIÑAS, Raúl (2006) "*Delincuencia Juvenil y Derecho Penal de Menores*". Edit. Ediar. Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera. Argentina. Buenos Aires.

ZAFORONNI, R. E. (1990). *Manual de derecho penal*. Lima: Ediciones Jurídicas.

LEYES:

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley N° 27337, Nuevo Código de los Niños y Adolescentes
3. Decreto Legislativo N° 1348 Código de responsabilidad Penal del Adolescente

WEBGRAFIA:

CARDENAS TORRES, J. <http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdiccional-efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdiccional-efectiva.shtml>

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO

TITULO DEL PROYECTO: EL DEBIDO PROCESO EN EL JUZGAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN EL JUZGADO DE FAMILIA DE

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	INDICADORES
Problema General ¿De qué manera están siendo juzgados los adolescentes infractores en el Juzgado de Familia de Tingo María 2014-2015?	Objetivo General ¿Determinar si los adolescentes infractores están siendo juzgados mediante un debido proceso en el juzgado de familia de Tingo María, 2014-2015?	Hipótesis General ¿Los adolescentes infractores no están siendo juzgados mediante el debido proceso en el Juzgado de Familia de Tingo María, 2014-2015?	Variable Independiente El debido proceso	A) Imparcialidad e independencia del juzgador. B) Presunción de inocencia. C) Derecho a defensa. D) Derecho a guardar silencio.
Problemas Específicos PE₁: ¿Cómo influye la imparcialidad e independencia del Juzgador en el debido proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?	Objetivos específicos OE₁: ¿Determinar la influencia de la imparcialidad e independencia del juzgador en el debido	Hipótesis Específicas HE₁: La imparcialidad e independencia del Juzgador influye negativamente en el	Variable Dependiente. El juzgamiento de los	A) Juzgado de Familia. B) Fiscalía de Familia C) Adolescentes

<p>PE₂: ¿Cómo influye la Presunción de Inocencia en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?</p> <p>PE₃ ¿Como influye el derecho a la Defensa en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?</p> <p>PE₄: ¿Cómo influye el Derecho a guardar silencio en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?</p>	<p>proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?</p> <p>OE₂: ¿Determinar la influencia de la Presunción de Inocencia en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?</p> <p>OE₃: ¿Determinar la influencia del Derecho a la Defensa en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?</p> <p>OE₄: ¿Determinar la influencia del Derecho a guardar silencio en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores?</p>	<p>debido proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores.</p> <p>HE₂: La Presunción de Inocencia influye positivamente en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores.</p> <p>HE₃: El derecho a la defensa influye significativamente en el juzgamiento del adolescente infractor.</p> <p>HE₄ El derecho a guardar silencio influye negativamente en el Debido Proceso al momento de juzgar a los adolescentes infractores.</p>	<p>adolescentes</p>	<p>D) infractores. Sentencia: medidas educativas</p>
---	---	--	---------------------	--

ENCUESTA

INSTRUCCIONES: Estimado amigo. Esta encuesta es estrictamente anónima y tiene por finalidad recoger información sobre aspectos actitudinales frente al debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes en el juzgado de familia de Tingo María 2014 - 2015, a fin de disponer de un marco de referencia, por tanto, agradecemos responder con la mayor sinceridad y seriedad, marcando con una (X) la alternativa que crees que es correcta.

CUESTIONARIO.

1. ¿Está de acuerdo con las decisiones emitidas por los jueces de familia?
a) Si () b) No ()
2. ¿Tienes conocimiento de los requisitos y trámites para solicitar tu libertad y semilibertad?
a) Si () b) No ()
3. ¿Te han leído tus derechos al momento de tu intervención o antes de ser conducido a una delegación policial?
a) Si () b) No ()
4. ¿Te han amenazado de algún modo o circunstancia para que declares de forma diferente a la investigación?
a) Si () b) No ()
5. ¿Crees que te han imputado sin prueba alguna el hecho delictuoso?
a) Si () b) No ()
6. ¿Qué medida socio educativo le fue impuesta?
a) Libertad restringida b) Internación en un centro juvenil
c) Libertad asistida d) Amonestación
e) Prestación de servicios a la comunidad
7. ¿Crees que el Ministerio Público y el Juzgado de Familia han actuado con un criterio de justicia y proporcionalidad?
a) Si () b) No ()
8. ¿Cuál ha sido la prueba obtenida más concluyente para determinar tu internamiento?
a) Manifestaciones b) Peritajes c) Constataciones d) Testigos e) Confrontación
9. ¿Cuántos años te ha impuesto el juez al término de las investigaciones?
a) Menos de un año b) De 1 a 2 años c) De 2 a 3 años d) Mas de 3 años
10. ¿Su abogado ha tenido una participación idónea durante el proceso?
a) Si ha defendido como corresponde b) Se ha quedado callado
c) No ha tenido argumentación coherente y certera.
d) No ha discrepado nada la parte contraria